

ISSN 0185-0423

cuadernos del
**tercer
mundo**

Abril-Mayo 1985 - \$250.00 - Año XI - N°74-75

**ORTEGA
EXCLUSIVO**

BRASIL



**ENTRE LA
ESPERANZA
Y LA
CRISIS**

A photograph of two large, faceted diamonds resting on a dark, reflective surface. The diamond on the left is a brilliant-cut diamond, while the one on the right is a larger, more complex cut. Below them, a vast field of smaller, shimmering diamonds is visible, creating a sense of abundance. The background is a dark, gradient color.

Los diamantes
de Angola
son más
brillantes

Ahora están al servicio del pueblo
y de la reconstrucción nacional

Companhia de Diamantes de Angola

Brasil: los sobresaltos de la transición

Después de esperar casi 21 años por el fin del régimen militar, los brasileños fueron obligados a postergar una vez más las conmemoraciones destinadas a saludar la vuelta de un civil a la presidencia de la República. Horas antes de tomar posesión del cargo, el presidente electo Tancredo Neves fue sometido a una operación de emergencia y no pudo recibir la banda presidencial de su antecesor. Asumió en su lugar la primera magistratura el vice presidente, José Sarney, un político conservador que fue durante años el presidente del Partido Democrático Social (PDS), creado por los militares para apoyar a la dictadura. La enfermedad de Tancredo Neves fue recibida como un balde de agua fría por millones de brasileños que aguardaban con ansiedad la aceleración del proceso de redemocratización. De repente quedaba en evidencia que las esperanzas de la nación estaban concentradas en un solo hombre. Y al quebrantarse la salud de ese hombre, el pueblo brasileño fue invadido por la incertidumbre. La opinión pública descubría la vulnerabilidad de la transición democrática pues el autoritarismo estaba cediendo lugar a un

régimen civil en el cual las élites políticas tradicionales mantenían el control de la situación. El futuro parecía incierto. Esta difícil coyuntura que atraviesa el Brasil es nuestro tema de tapa, con un reportaje político y económico. Destacamos además en esta edición una entrevista exclusiva con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el artículo sobre las consecuencias de la tragedia de Bhopal en la India. Finalmente, una buena noticia para nuestros lectores: a partir de este número *cuadernos del tercer mundo* circula también en el Río de la Plata, con una edición especial para la región. Pasamos así a tener cuatro ediciones simultáneas, dos en portugués (Brasil, Africa de lengua portuguesa y Portugal) y dos en español (México, Río de la Plata). Para nosotros esta nueva edición tiene un significado muy especial porque fue en el Río de la Plata, en Buenos Aires, que *cuadernos del tercer mundo* fue fundada, en setiembre de 1974, y de ahí tuvimos que partir por motivos políticos. Y también porque nuestro regreso es consecuencia de los avances democráticos registrados en Argentina y Uruguay.

Publicaciones con informaciones y análisis de las realidades, aspiraciones y luchas de los países emergentes, destinadas a consolidar un Nuevo Orden Informativo Internacional

Director General: Neiva Moreira

Consejo Editorial Internacional

Director General Adjunto: Pablo Piacentini

Darcy Ribeiro

Editora: Beatriz Bissio

Juan Somavía

Sub-Editores: Carlos Castilho (África)

Henry Pease García

Roberto Remo Bissio

Aquino de Bragaça

(América Latina)

Wilfred Burchett (1911-1983)

Coordinador de Producción:

José Carlos Goodim

Redacción permanente:

Claudia Neiva, Roberto Bordini, Horacio Castellanos Moya, Baptista da Silva, Carlos Pinto Santos, Guionar Belo Marques, Cristina Canouva, Eduardo Varela

Departamento de Arte:

Samaral (editor), Sonia Freitas, Miguel Efe

Centro de Documentación:

Lidia Freitas, Eunice H. Senna, Jessie Jane V. de Souza (Brasil), Cristina Assis (Portugal)

Composición:

Ronaldo Fonteca

Colaboradores: Gregorio Seiser, César Arias Quincoc, Cedric Belfrage, Fernando Molina, Mark Fried, Moscir Werneck de Castro, Eduardo Molina y Vedia, Ash Narain Roy, Alberto B. Marantoni, Maluza Stein, Sol Carvalho, José Moazzart Filho, Herbert de Souza, Theotonio dos Santos, Ladislau Dowbot, Luis Maira, Roger Rasmirill, David Fig, A.W. Singham, Alex Mashini, Laurine Platsky, Ana Maria Urbina, Ligia Chaves, Francesca Gargallo, Jim Cason, Sam Ramsamy, Gridvia Kuncas, Hugo Neves, Otoniel Martínez, Deborah Hittington, Alan Naim, Rodrigo Jaubert, Ezequiel Das, Alice Nicolau, João Melo, Mia Couto, Luis Motta, Orlando Senna, Rodolfo de Bona, Ravindran Cadinader, Phill Harris, Abdul Nafey, Francisco C. Gomes, Jorge A. Richards, Claude Alvarez, Carlos Núñez, Pablo Maritz, Mario de Coutin, Marcos Arruda, Peter Law, Agostinho Jardim Gonçalves, Nils Castro, Octavio Tostes, Ricardo Bueno, M. Venugopala Rao, Narinder Kohla, Nilton Santos

Corresponsales:

Argentina: Horacio Verbitsky
Lavalle 1282 - 1er. piso Of. 12 y 14 - Telef: 35-81-94 - Buenos Aires, Capital Federal
Chile: Fernando Reyes Matta
Casilla 16637 - Correo 9 Providencia, Santiago de Chile
Ecuador: José Steininger
Apartado 8968, suc. 7 - Torres de Almagro, Quito
Perú: Rafael Roncagliolo
Apartado 270031, Lima-27
Colombia: Guillermo Segovia Mora
Apartado Admo 10465 - Telef: 285-66-14 - Bogotá
Nicaragua: Arqueles Morales
Apartado 576 - Managua
Estados Unidos: Gino Lofredo
1648 Newton St. N.Y. Washington D.C. 20010
Mozambique: Ezevaldo Hipólito
Rua de Fins 109 Sommerchild, Maputo

Circulación en 70 países

cuadernos del tercer mundo utiliza servicios de las siguientes agencias: ANGOP (Angola), AIM (Mozambique), INA (Irak), IPS (Inter Press Service), PRESSUR (Uruguay), S.A.L.PRESS (El Salvador), SHIHATA (Tanzania), W.A.F.A. (Palestina) y del pool de agencias de los Países No Alineados. Mantiene también intercambio editorial con las revistas Africa News (Estados Unidos), Nueva (Ecuador), Novembro (Angola), Tempo (Mozambique), ALTERCOM (Ile-México-Chile) y Third World Network (Malasia).

Foto de tapa: Custódio Coimbra

DISTRIBUIDORES

ANGOLA: EDIL - Empresa Distribuidora Livros UEE, Rua da Missão, 107/111 - Luanda. BELIZE: Cathedral Book Center, Belize City. BOLIVIA: Telnobros S. R. L., Casilla de Correo 20288, La Paz. CANADA: Third World Books and Crafts, 748 Bay St. Ontario, Toronto - The Bob Miller Book Room, 180 Bloor St. West, Toronto. COLOMBIA: Ediciones Suramérica Ltda., Carrera 30 No. 23-13, Bogotá. COSTA RICA: Semanario Nuevo Pueblo, Av. 8 Calles 11 y 13 No. 1157, San José. CHILE: Distribuidora Sar, Dardignac 306, Santiago. ECUADOR: Ediciones sociales, Córdoba 901 y Menduburo, Guayaquil - RAYD de Publicaciones, Av. Colombia 248, of. 205, Quito Ed. Jaramillo Artigas, Tel. 517.590, Reg. San-dip-Fax 1256. EL SALVADOR: Librería Tercer Mundo, Primera Calle Poniente 1030, San Salvador - El Quijote, Calle Arce 708, San Salvador. ESTADOS UNIDOS: Guild News Agency, 1118 W. Armitage Ave., Chicago, Illinois - News World Resource Center, 1476 W. Irving Pl., Chicago, Illinois - Librería Las Américas, 152 East 23rd Street, New York, N. Y. 10010 - Third World Books, 100 Worcester St., Boston, Mass 02118 - Librería del Pueblo, 2121 St. New Orleans, LA 70130 - Papyrus Bookcenters, 2915 Broadway at 14th St., New York, N. Y. 10025 - Tom Mooney Bookstore, 2595 Folson Street, San Francisco, CA 94110 - Book Center, 518 Valencia St., San Francisco, CA - Red and Black, 4736 University Way, Seattle - Groundwork Bookstore, U. C. S. D. Student Center B-023, La Jolla, CA. FRANÇA: Centre des Pays de Langue Espagnole et Portugaise, 16 Rue des Ecoles, 75005 Paris. GR-ÉBRETTANHA: Latin American Book Shop, 29 Islington Park Street, London. GUINE-BISSAU: Departamento de Edição-Difusão do Livro e Disco, Conselho Nacional da Cultura. HOLANDA: Adhansum Bookhandel, Spui 14-16, Amsterdam. HONDURAS: Librería Universitaria "José Trinidad Reyes", Universidad Autónoma de Honduras, Tegucigalpa. ITALIA: Passi Nuovi, Piazza de Montecitorio 59/60, Roma - Feltrinelli, Via de Babuino, 41 Roma - Alma Roma, Piazza P. Paoli, 4/A Roma - Spagnolo, Via Monserrato, 35/6, Roma - Uscita, Bianchi Vecchi, 45 Roma. MÉXICO: Unión de Expendedoras y Vendedores de Periódico, Humboldt No. 47, México 1, D. F. - Distribuidora Sayrol de Publicaciones S. A., Mer y Pesado No. 130, México 12, D. F. - Librerías México Cultural, Mer y Pesado No. 128, México 12, D. F. - Metropolitana de Publicaciones, Librería de Cristal e 100 librerías en todo el país. MOCAMBIQUE: Instituto do Livro e do Disco, Ave. Ho Chi Minh 103, Maputo. NICARÁGUA: IMELSA, Managua, Nicaragua. PANAMÁ: Librería Cultural Paramela, S. A., Ave España 16, Panamá. PERÚ: Distribuidora Runemarka, Camaná 878, Lima 1. PORTUGAL: Dijornel, Rua Joaquim António de Aguiar 66, Lisboa. PORTO RICO: Librerías La Tortuga, Amalia Marín Esq. Ave González, Río Piedras - Pensamiento Crítico, P. O. Box 29918, 66th inf. Station, Río Piedras, P. R. 00929. REPÚBLICA DOMINICANA: Centro de Estudios de la Educación, Juan Sánchez Ramírez 41, Santo Domingo - DESVIGNE, S. A., Ave Bolívar 354, Santo Domingo. REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMÁNHA: Con. Medien und Vertrieb GMBH, Osterstr. 36, 2800 Bremen. S. TOMÉ E PRÍNCIPE: Ministério de Informação e Cultura Popular. SUECIA: Werngrin-Williams AB, S. 10425, Stockholm. VENEZUELA: Publicaciones Españolas, S. A. Ave México Lechoa e Pte. Brion, Caracas.

EDICIONES REGIONALES

• Ediciones en español:

MÉXICO, CARIBE, CENTROAMÉRICA

Editor:

Rubén Aguilar

Gerente General:

Roberto Castellanos F.

Producción:

Horacio Castellanos Moya

Suscripciones:

Berta Arufe

Distribución:

Gustavo Leyva y Víctor Flores

Correspondencia:

Apartado 20572-01000 México, D.F.
Editorial Periodistas del Tercer Mundo
California 98 A - Colonia Parque San Andrés, Coyocacán
Teléf: 689-1740 - 04040 México, D.F.
Impreso en: Litográfica Cultural,
Isabel La Católica 922, México, D.F.

RIO DE LA PLATA

Directores:

Germán Cardoso, Roberto Remo Bissio

A.C.U. S/A

Avenida 18 de Julio 1263, 3er piso - Montevideo, Uruguay

Distribución en Uruguay:

Heber Berriely Nery Martínez

Paraná 750 esq. Ciudadela - Montevideo - Telef: 90-51-55

• Ediciones en portugués

BRASIL

Director y editor:

Neiva Moreira

Sociedades:

Paulo Cannabrava Filho

Caixa Postal 60086 CEP 05033 - São Paulo

Clovis Senna - Brasília

Editora Terceiro Mundo Ltda

Rua da Glória, 122 / 105-106 - CEP 20241 Rio de Janeiro,

RJ-Telef: 242.1957-Telex: 21.33054 CTMB-BR

**ANGOLA, CABO VERDE,
GUINEA-BISSAU, MOZAMBIQUE Y PORTUGAL**

Editor:

Artur Baptista

Tricontinental Editora Ltda

Calçada do Combro, 10/19 - Lisboa - 1200 - Telef: 32-06-50

Telex: 42720 CTM-TE-P

Foto de tapa: Custódio Coimbra

4 Cartas

7 Panorama Tricontinental

13 Editorial — Viejo Orden de posguerra versus Nuevo Orden Económico

Nota de tapa — Brasil: Entre la esperanza y la crisis

- 16 La transición, *Neiva Moreira*
20 Faoro: "¡Constituyente, Ya!"
27 El nuevo papel de los militares, *René Dreifuss*
33 La encrucijada económica, *Ladislau Dowbor*

Africa

- 36 Camerún: Las tensiones dentro del gobierno Biya, *Carlos Castillo*
42 Sudáfrica: La lucha de los mineros negros

Asia

- 46 India: Bhopal, lecciones de una tragedia, *Claude Alvares*

Medio Oriente

- 51 Líbano: El diálogo imposible, *Alberto B. Mariani*

América Latina

- 54 Uruguay: Los primeros meses de Sanguinetti, *Carlos Nuñez*
61 Argentina: Impugnación a la Doctrina de Seguridad Nacional, *Horacio Verbitsky*
66 Democracia, Constitución y Justicia, *Emilio F. Mignone*
68 Nicaragua: La deuda amenaza la democracia, entrevista exclusiva con el presidente Daniel Ortega, *B. Bissio y C. Castillo*

Cultura

- 74 UNESCO: El chantaje de los dólares, *Guiomar Belo Marques*

Comunicación

- 78 Chile: Cómo los periodistas combaten la censura, *Jorge A. Richards*

80 Humor



Bhopal: los culpables de la catástrofe



Líbano: milicianos drusos



Presidente Ortega: unir a los deudores

Club de Amigos

Estamos formando un club de amigos, de varios rincones del mundo, cuyo principal objetivo es el intercambio cultural entre los pueblos y principalmente entre los jóvenes de costumbres diversas, que procuran canje de sellos y cartas postales, billetes, revistas e ideas, para una mejor comprensión entre los pueblos. (...) Solicitamos que los interesados envíen 35 sellos conmemorativos, franqueados o no, y a cambio enviaremos una lista de socios con direcciones, edad, *hobby*, y otras informaciones necesarias, además de inscribir su nombre en las próximas listas. Atentamente,

André G. Figueiredo — Clube do Selo — C. P. 1013 — Belo Horizonte — MG — CEP: 30.000 — Brasil

Los armenios

(...) Soy un latinoamericano, nacido en Montevideo, Uruguay, que actualmente vive en San Pablo. Las veces que tuve la oportunidad de leer *cuadernos*, quedé gratamente sorprendido con el nivel y calidad del contenido de esa revista. Quiero aprovechar este momento para hacer un pedido: me gustaría mucho que fuese publicada alguna nota referente a la historia, vida y cultura del pueblo armenio (pueblo que fue víctima del segundo mayor genocidio del siglo). Creo que esas páginas tristes de la historia de la humanidad ayudarán a muchos a comprender mejor el significado de la palabra fe. Sigamos siempre adelante. Ustedes aportan no solo cultura, sino también esperanza a muchos lectores que desean vivir algún día en un mundo sin injusticias sociales.

Daniel Marx Guediguian — Santo André — SP — Brasil.

Un extenso artículo sobre los armenios ya fue publicado por Cuadernos del Tercer Mundo en el número 58 (edición brasileña), correspondiente al mes de setiembre de 1983 ("¿Por qué luchan los armenios?").

La Guía 1985

A los amigos de *cuadernos del tercer mundo*, felicitaciones por el tra-

bajo realizado durante 1984, especialmente por el lanzamiento de la *Guía del Tercer Mundo*, una fuente de investigación básica para los que desean conocer la realidad del subdesarrollo. Felicitaciones por el décimo aniversario de *cuadernos*. Es realmente una victoria mantener un independiente publicación de ese nivel.

Luiz Antonio Borges — San Pablo — Brasil.

"cuadernos" en la frontera uruguaya

En primer lugar, quiero darles mis felicitaciones. Recientemente tuve la oportunidad de leer un ejemplar de *cuadernos* en Porto Alegre (por cuanto no era todavía posible leerlo en mi país) y me sentí en la obligación de escribirles para decir que la calidad de las notas y entrevistas publicadas es excelente. Todo en *cuadernos* es interesante y el artículo sobre el Frente Amplio y el nuevo gobierno en nuestra pequeña República fue extraordinario.

Héctor F. Fernández — Montevideo — Uruguay.

Salud mental en el Tercer Mundo

La Psicoterapia de Liberación es la primera psicoterapia (terapia por la palabra) nacida en el Tercer Mundo y volcada hacia las mayorías oprimidas (principalmente negros, mujeres y niños); de ahí su fuerte vínculo con la Historia, la Antropología, Sociología, etc., y su compromiso con las causas de los pueblos emergentes. Es evidente que nuestro trabajo no ignora los avances científicos realizados en otras partes del mundo, pero fundamentalmente preferimos crear y producir conocimiento y también distribuirlo obedeciendo a una óptica tercermundista, considerando todo el proceso de explotación, colonización y neocolonización que sufrimos desde hace siglos. Por lo expuesto, solicitamos tengan la amabilidad de difundir nuestra dirección para correspondencia, pues será de enorme utilidad para nosotros y las personas e instituciones de salud mental del Tercer Mundo.

Dr. Dermeval Correa de Andrade — Centro Brasileiro de Pesquisa em Saúde Mental — Rua Gama Lobo, 1007 — Ipiranga — São Paulo — CEP: 04269 — Brasil.

Comité argentino contra el apartheid

Formé, junto con otros compañeros, el Comité Argentino Latinoamericano contra el *Apartheid*. A través de él nos dedicamos a informar en la República Argentina sobre el "maldito sistema" llamado *apartheid*, país tan desinformado de la realidad de nuestro sufrido Tercer Mundo. Además, denunciamos las violaciones de la República Argentina a las resoluciones de las Naciones Unidas.

El Comité pretende lanzar este año una campaña de firmas por la libertad incondicional de Nelson Mandela, que se mantendrá en los próximos años hasta que consigamos ese objetivo.

Contamos con la solidaridad de todos los compañeros.

Juan C. Pinedo Zelaya — Maipú 484 — 1º piso (1000) — Buenos Aires — Argentina.

Lector en Australia

En mi viaje rumbo al exilio en Australia, desde Uruguay, tomé contacto con *cuadernos del tercer mundo*. Intenté conseguir la revista en Sydney, pero hasta ahora no fue posible. Ahora me dirijo a ustedes para que me envíen una suscripción de la edición en portugués, además de la *Guía*. *cuadernos* se convirtió en una necesidad para mí, porque me aporta una información cabal y seria sobre la política del Tercer Mundo.

David E. Viñas — Ashfield — Australia.

La tapa de El Salvador

(...) Felicitaciones por la alta calidad del tema sobre El Salvador, tapa del mes de diciembre; simple, objetiva e informativa. (...) En general, los artículos de la revista son altamente instructivos. Sugiero otro tema, como el que fue hecho sobre El Salvador, en relación a nuestra patriótica y sufrida Nicaragua (a pesar de ya haber publicado artículos sobre el tema).

Santini Parrini — Serra — ES — Brasil.

Nicaragua fue tema de tapa de los (nºs 64 y 71, edición brasileña). Pero igual continuamos siempre tratando los problemas de ese país que está en el centro de la lucha latinoamericana por la superación de la dependencia.

El apoyo de los cristianos a Nicaragua

(...) Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por las excelentes notas sobre Nicaragua de los nºs 64 y 71 (edición brasileña), sobre el tema religioso en América Central del nº 69 (edición brasileña) y sobre las relaciones entre el Vaticano y la Casa Blanca. Estos artículos han sido de mucha importancia para quienes se preocupan por la toma de posición de sectores influyentes de la iglesia católica en Nicaragua frente a la frágil pero promisoría Revolución Sandinista. Nicaragua es una esperanza viva para todo el Tercer Mundo, no solo en términos políticos sino también religiosos.

Pienso que el problema religioso en Nicaragua no proviene tanto de la llamada "Iglesia Popular", sino de sectores de la Iglesia distanciados de los intereses vitales de las clases populares. Si el pueblo nicaragüense apoya y defiende heroicamente las conquistas de la Revolución Sandinista, como lo demostraron en las recientes elecciones, llegamos a la conclusión que son algunos sectores de la iglesia católica de ese país los que están del lado de las clases populares en este momento tan decisivo.

(...) La burguesía montó una trampa para los católicos que hicieron una clara opción preferencial por los pobres: fidelidad a la iglesia o fidelidad a las clases populares. A la luz del Evangelio, tenemos que denunciar que ese dilema es falso. Tenemos que desenmascarar esa trampa, aunque sea montada con el apoyo de nuestros hermanos de la misma iglesia.

(...) Sugiero que **cuadernos** dé más información sobre el apoyo que otras iglesias cristianas están dando al pro-

ceso revolucionario de Nicaragua. Eso ayudaría mucho a clarificar ese tema tan delicado para nosotros los católicos que, pese a todo el avance que significó el Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín y Puebla, tenemos todavía que lamentar la incapacidad actual de influyentes sectores de la iglesia católica para apoyar y profundizar las conquistas revolucionarias del pueblo de aquel país. Tal toma de posición ha permitido que las clases dominantes continúen manipulando ideológicamente a la religión para contener el avance político de las clases populares. Infelizmente, nuestro querido Papa Juan Pablo II mira la realidad de Nicaragua como si fuese otra Polonia centroamericana.

P. Danilo S. Porto — Canguçu — RS — Brasil.

Crear conciencia

Quiero expresar mis sinceras felicitaciones por los 10 años de **cuadernos** y desear que se transformen en muchos años más. (...) La contribución de ustedes a la causa de los oprimidos, expresada en el trabajo de informar y hacer conocer el pensamiento y las ideas de los verdaderos protagonistas de la historia —contrariando los designios del imperialismo que actúa a través de empresas transnacionales de noticias con la complicidad de los medios de comunicación locales— hace que ustedes tengan sobre los hombros una gran responsabilidad. Es decir, la de crear una conciencia que se exprese en acción, para que con mayor vigor y audacia, empleando todas las formas de lucha, conquistemos la democracia y demos pasos seguros en el camino del progreso económico, social, cultural, etc.

Ayer fue Cuba, hoy Nicaragua,

Argentina; Bolivia, Uruguay y Brasil; en breve, también Chile y un día no tan lejano, será el turno de Paraguay. Países que ya recorren y recorrerán ese camino.

Creo, de esa manera, haber expresado mi opinión sobre **cuadernos**, revista que a pesar de las severas medidas de censura impuestas en varios países, logró ser ampliamente conocida.

Gerardo Torres — Santiago — Chile.

La lucha de Angola

Leí el documento publicado por **cuadernos** (nº 73, edición brasileña), referente a las negociaciones de Angola con Washington y Pretoria y quiero expresar mi simpatía y estima al gobierno del presidente José Eduardo dos Santos y al sufrido pueblo angoleño. Como afirma el presidente al escribir a las Naciones Unidas, son "cinco siglos de colonialismo, 14 de lucha por la independencia y casi 10 de combates contra la agresión extranjera y la subversión organizada". He ahí un ejemplo de lucha y coraje para el resto del mundo.

Quedé muy contento con las actitudes de países como Angola, Nicaragua, India, entre otros, que no aceptan la forma como los Estados Unidos y sus aliados cómplices tratan al resto del mundo, y dan su ejemplo de independencia. Sí, porque es precisamente el gobierno encabezado por Ronald Reagan, que tanto pregona el combate al terrorismo (...) que distribuye, a través de la CIA, manuales terroristas en Nicaragua, financia a los **contras** de aquel país y promueve el terror en Angola sustentando a la UNITA, vía Pretoria, etc.

José P. Schayder — Cachoeiro de Itapemirim — ES — Brasil.

Intercâmbio

- *Bárbara R. Herrera*
Lugareño nº 317/apto. 902
Camaguey — Cuba
- *Sebastião Vera Cruz*
Rua Dr. Pedro Vicente, 625
Canindé — CEP: 01.109 — São Paulo
SP — Brasil
- *Mario Rosaldo*
Madero 616 — 96.400 — Coatzacoalcos — Veracruz — México
- *Bernadita Astorga*
Casilla 356 — Correo Central

- Valparaíso — Chile
- *Eunice de Cesaro*
Rua da Liberdade, 228 — Centro
Coronel Vivida — PR — CEP: 85.550
Brasil
- *André Antônio Manuel*
C. P. Posta Restante dos Combatentes
Luanda — Angola
- *Rosana Barbosa*
Rua Desembargador Manuel Castelo
Branco, 2222 — Bairro Jockey Club
Teresina — PI — CEP: 64.000 — Brasil
- *Marcelo Eduardo Rebelatto*
Rua das Palmeiras, 26 — Araras — SP
CEP: 13.600 — Brasil

- *Bento Simão*
C. P. 1087 — Benguela — Angola
- *Oreivaldo Flor Carvalho*
Rua Angelo Mogiani, 364 — Bairro
Rio Branco — Caxias do Sul — RS
CEP: 95.100 — Brasil
- *André Antônio Maria*
C. P. 1665 — Benguela — Angola
- *Leonor Marques*
Rua Dr. Mário Beni, 148/01
Itanhaém — SP — CEP: 11.740
Brasil
- *Nanci Isabel de C. Paes*
Rua Dr. Mário Beni, 148/apto. 04
Itanhaém — SP — CEP: 11.740 Brasil



**FORMACION A TRAVES
DE LA INFORMACION**

en una publicación
independiente con
circulacion de
más de 80,000
ejemplares en
62 paises

Suscripciones
al telefono 689-17-40
o al apartado
postal 20-572
México 01000 D.F.

TARIFAS DE SUSCRIPCION	doce números
México	\$ 3,000
América y Caribe	US\$ 25.00
Europa	US\$ 45.00
Africa, Asia, Medio Oriente	US\$ 45.00

Sudán: el fin de Numeiry

□ El general Gaafar Numeiry no sobrevivió a la décima séptima conspiración, que finalmente puso fin a sus 16 años de poder. Fue derrocado cuando regresaba de un viaje a Washington, donde durante 10 días intentó convencer a la administración republicana de que salvara a su gobierno.

nencia ya era imposible, según la opinión generalizada en todos los sectores políticos e incluso militares de Sudán. El ex presidente, después de poner en práctica durante años un inescrupuloso malabarismo político, terminó indisponiéndose con el Fondo Monetario Internacional, con sus amigos de Arabia Saudi-



Numeiry y Reagan en Washington: sonrisas que pronto acabaron

El presidente depuesto forzó por todos los medios su visita a los Estados Unidos, en un gesto desesperado por ganar tiempo, luego que el gobierno norteamericano diera señales evidentes de que no estaba ya más dispuesto a garantizar la sobrevivencia de su otrora aliado incondicional para las maniobras de desestabilización contra Libia y Etiopía.

Numeiry cayó prácticamente solo, porque su gobierno había alcanzado tal grado de impopularidad y desgaste que su perma-

ta y Egipto y con la influyente burguesía islámica del norte de Sudán. Todo ello sumado al malestar con los grupos fundamentalistas musulmanes y al movimiento autonomista del sur, que volvieron a encender la guerra civil en el país a partir de 1978.

La habilidad política de Numeiry sucumbió al agravamiento de las tensiones económicas, sociales y políticas de su país. En setiembre de 1983, el ex presidente impulsó la ley islámica para la justicia y los negocios, pero

esa decisión destinada a satisfacer a los sectores musulmanes del país terminó provocando críticas casi unánimes. Más tarde, Numeiry enfrentó a los grupos republicanos moderados que exigían una redemocratización liberal y, recientemente, ordenó la detención de los principales dirigentes de la Hermandad Islámica, un grupo que siempre tuvo fuerte presencia en el gobierno pero que desde fines de 1984 exigía cambios más profundos en el sistema legal y financiero del país.

Mientras tanto, los rebeldes en el sur se habían adueñado de las principales provincias de la región mostrando que el país volvería a sumergirse en una guerra civil aún más sangrienta que la que había enfrentado al norte (islámico) con el sur (no islámico) entre 1956 y 1972, y que dejó como saldo un millón de muertos.

Numeiry llegó al poder mediante un golpe de estado en 1969, prometiendo seguir una política nacionalista que pretendía revivir el anticolonialismo mahdista del siglo pasado e imitar al nasserismo egipcio. Pero toda la ideología progresista terminó siendo abandonada y Numeiry se transformó en un presidente autocrático, represivo y dependiente del apoyo norteamericano.

El nuevo gobierno, fuertemente influido por jóvenes oficiales del ejército, tiene por delante una tarea extremadamente difícil. Además de resolver una catastrófica crisis económica (Sudán fue considerado técnicamente en quiebra en tres oportunidades en los últimos cinco años) deberá pagar una deuda de ocho mil millones de dólares; tendrá que dar comida a casi medio mi-

llón de hambrientos y estará obligado a resolver el problema de la autonomía de las provincias del sur, como desean los guerrilleros del Movimiento Popular de Liberación de Sudán.

Los gobernantes militares también tendrán que contemplar a la ambiciosa burguesía norteafricana, que no acepta más la dominación ejercida por la élite comercial y agrícola de Jartúm, la capital del país. Con seguridad, la política del nuevo régimen va a ser seguida muy atentamente por los gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Libia y Arabia Saudita: Sudán fue durante el gobierno Numeiry un sólido aliado de Washington en la región.



Los sectores musulmanes también terminaron enemistados con el presidente depuesto

Cualquier cambio en este juego de alianzas puede alterar drásticamente la situación estratégica en el norte de África, una región

que el Departamento de Estado norteamericano considera de fundamental importancia para sus intereses geopolíticos.

Suscríbese

BARRICADA
INTERNACIONAL

Inglés

Español



Suscripción Semestral

Estados Unidos	}	US\$ 12.00
Caribe		
Panamá		
Sur América		
México		
Centro América		US\$9.60
Europa, Canadá		19.20
Resto del Mundo		24.00
Nicaragua		C\$72.00

Organo de difusión al exterior del Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN

Nombre _____
 Dirección _____ CEP: _____
 Barrio _____ Ciudad _____
 Estado _____ País _____

Vale postal

Cheque No. _____ a nombre del diario Barricada

Dirección: BARRICADA Internacional

Apdo. No. 576 - Managua

Nicaragua

Télex: 1705 BARR Tel.: 748:85

Bolivia: la huelga preanunció la dura contienda electoral de julio

□ A tres meses de las elecciones presidenciales previstas para julio, Bolivia fue sacudida por una huelga nacional que se prolongó por 16 días. Mientras el gobierno de Hernán Siles Zuazo se prepara para realizar una evaluación definitiva del impacto económico de la paralización, cifras preliminares indican que las pérdidas del conflicto alcanzaron a 160 millones de dólares.

La Central Obrera Boliviana anunció que, pese a aceptar la oferta gubernamental de aumentar el salario mínimo en 232%, no ha renunciado a su demanda de que se establezca una escala móvil para que el salario sea reajustado de acuerdo al constante aumento del índice inflacionario.

Los mineros de Potosí y Oruro que permanecieron a lo largo de la huelga acampando en el centro de La Paz y bloquearon las carreteras de acceso a la capital, regresaron a sus puestos de trabajo. Igualmente, se replegaron a sus unidades los efectivos



Siles Zuazo



El gobierno alega que la crisis económica impide atender todos los reclamos obreros

militares que virtualmente mantuvieron ocupada a La Paz, en previsión de choques callejeros.

Según el gobierno, la aguda crisis económica por que atraviesa Bolivia impide que sean atendidos todos los reclamos obreros y lo que fue otorgado constituye, según voceros gubernamentales, "el mayor esfuerzo que puede hacer el Estado sin precipitar una inflación absolutamente incontrolable".

De acuerdo a datos oficiales, la inflación en 1984 fue de alrededor de 2.000% y para el corriente año las previsiones indican que puede ser mayor si no se toman medidas drásticas como una reducción importante del gasto público.

Cosechas aseguradas en Nicaragua

El ministro nicaragüense de Desarrollo Agrario y Reforma Agraria, comandante Jaime Wheelock, afirmó en febrero que están aseguradas las principales cosechas agrícolas de exportación.

Al dirigirse a un grupo de periodistas, Wheelock dijo que para el corriente año estaban garantizadas 50 mil toneladas de café y que el actual objetivo radica en alcanzar las 160 mil toneladas.

En relación al algodón, el dirigente sandinista desmintió a un diario de oposición, *La Prensa*, afirmando que de las 115 mil hectáreas sembradas, apenas 11 mil se encuentran amenazadas de perderse, lo que no impedirá el éxito de la zafra, habiéndose ya cosechado 75 mil toneladas de ese producto. En relación al azúcar, todo indica que la cosecha será mejor este año que la del año pasado, estimándose que alcanzará cifras superiores a las 240 mil toneladas

métricas.

En 1984, Nicaragua exportó poco más de 121 millones de dólares de café y 134 millones de algodón. Este año se espera que las cifras alcancen a los 145 y 135 millones de dólares respectivamente.

La importancia de estas cosechas radica en que han sido uno de los blancos preferidos de la contrarrevolución, que procura impedir por todos los medios el éxito del gobierno sandinista en la actividad agrícola.

SUCEDIO...

AMERICA LATINA

● **Chile:** Fueron liberadas 39 personas que permanecían detenidas en el campo de prisioneros de Pisagua desde que se implantó el estado de sitio el pasado 7 de noviembre. Permanecen todavía detenidas otras 269, acusadas de "extremistas" por el régimen de Pinochet.

● **Argentina:** El Senado aprobó el "Tratado de Paz y Amistad" con Chile que establece los límites en el austral canal de Beagle. Dicho acuerdo ya contaba con el voto favorable de la Cámara de Diputados. Hace tres meses, 80% de los argentinos se habían pronunciado favorablemente al acuerdo en un plebiscito.



Vista aérea de Beagle

● **Puerto Rico:** El secretario general del Partido Socialista, Carlos Galliza, se entrevistó en La Habana con el vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez. Analizaron la situación interna de Puerto Rico y la creciente militarización de la isla por parte de Estados Unidos como "un hecho preocupante".

● **Venezuela:** El enviado especial del secretario general de la ONU, Diego Cordovez, mantuvo contacto con el pre-

sidente Jaime Lusinchi sobre el diferendo fronterizo con Guyana por la soberanía de la zona de Esequibo. Cordovez llegó procedente de Georgetown.

AFRICA

● **Tanzania:** El presidente Julius Nyerere visitó El Cairo donde mantuvo entrevista con el presidente egipcio Hosni Mubarak. Ambos mandatarios analizaron la situación en Medio Oriente y África Austral. Nyerere, en su calidad de titular en ejercicio de la Organización de la Unidad Africana (OUA), cumple una misión encomendada por los seis países de la "Línea de Frente" para exhortar a los gobiernos del mundo a presionar a Sudáfrica a fin de que cumpla el Acuerdo de Nkomati.



Julius Nyerere

ASIA

● **Bangladesh:** El presidente Hussein Mohamed Ershad, que gobierna bajo ley marcial desde 1982 prometió una transición hacia la democracia y la convocatoria a elecciones para "cuando los partidos estuvieran prontos".

● **Nueva Delhi:** El primer ministro Rajiv Gandhi reafirmó el pleno apoyo de su país a la independencia de Namibia, luego de la reunión que mantuvo con Sam Nujoma, presidente de la Organización del Pueblo de África Sudoccidental (SWAPO), quien llegó a la India para preparar la reunión que realizará la Oficina de Coordinación del Movimiento de los Países No Alineados.



Sam Nujoma

MEDIO ORIENTE

● **Damasc:** Una representación de alto nivel de Siria, Argelia, Yemen del Sur y Libia acordó realizar una conferencia cumbre cuatripartita para discutir la situación de la región en general y las iniciativas actualmente en curso "en el marco de las estrategias hostiles a la nación árabe".

● **Túnez:** La Liga Árabe celebró el 40º aniversario de su fundación difundiendo un documento que subraya la importancia de la unidad de acción de los países árabes y llamó a que se adopten posiciones convergentes en lo que se refiere a "la lucha contra los sionistas y al problema libanés".

Zimbabwe: postergan elecciones

El gobierno del primer ministro Robert Mugabe posergó para el próximo mes de julio o julio las elecciones generales inicialmente previstas para marzo, que habrán de renovar el Parlamento de 100 miembros instalado desde la independencia en 1980. El principal motivo decidido fueron las dificultades para registrar y organizar las listas electorales de casi cuatro millones de ciudadanos aptos para votar.

Sin embargo, incluso con el nuevo plazo, parece segura la victoria del partido ZANU (Unión Nacional Africana de Zimbabwe) que ya cuenta con 7 bancas en el Parlamento. De acuerdo a los últimos pronósticos, el partido de Mugabe quizás obtenga como mínimo siete bancas más, lo que representará casi 80% de los votos de los electores negros del país. El principal partido de oposición ZAPU (Unión Popular Africana de Zimbabwe), liderado por N'Komo, obtendría un máximo de 16 diputados, mientras que los demás partidos menores dejarían de tener representación parlamentaria.

Los 100 mil blancos del país, pese a que apenas constituyen el 4% de la población total, tienen 20 bancas (20% del total), según quedó establecido por los acuerdos de Lancaster House por medio de los cuales Inglaterra reconoció la independencia de su ex colonia (en esa época llamada Rhodesia). La tendencia manifestada por el electorado blanco apunta a una caída del prestigio del ultraconservador Ian Smith (ex primer ministro que intentó la proclamación unilateral de la independencia del país en 1965, para instalar un régimen racista) y un fortalecimiento de los independientes de centro-derecha favorables a un



Robert Mugabe

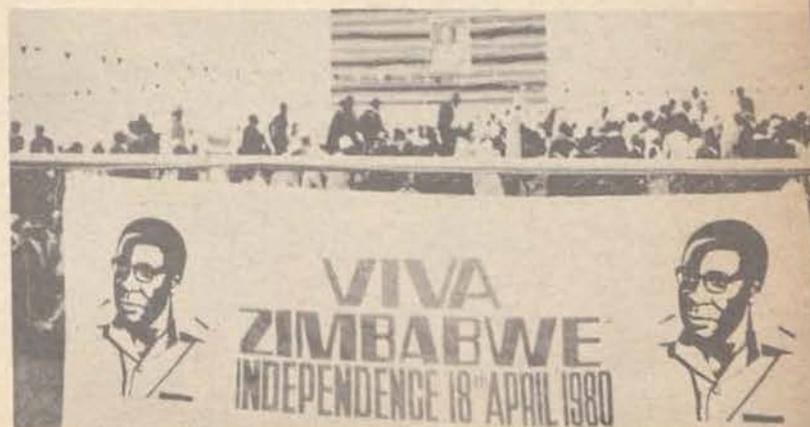
diálogo con el gobierno de mayoría negra.

Mugabe ya dejó claro que si la ZANU obtuviera más de 80% de los votos del electorado africano va a considerar ese resultado como un claro apoyo al plan de modificar los Acuerdos de Lancaster House para implantar el sistema de partido único. El gobierno intentará también —hasta fines de mayo— lograr que el Parlamento cambie el sistema electoral terminando con las listas de candidatos para implantar el voto distrital. De acuerdo con la Constitución vigente, el primer ministro Robert Mugabe puede prolongar el mandato de los actuales parlamentarios por

dos periodos sucesivos de seis meses. De esa manera, en caso que el sistema de voto distrital no sea puesto en vigencia antes de julio, el gobierno deberá nuevamente postergar las elecciones para el segundo semestre.

El fortalecimiento de la ZANU adquirió mayor intensidad desde comienzos de este año, cuando la economía de Zimbabwe experimentó una rápida recuperación luego de los tres años de sequía. El prestigio de Mugabe también crece constantemente, como consecuencia de su política de redistribución de los recursos nacionales hacia los sectores más pobres de la población.

Las dificultades del gobierno corren por cuenta de la actividad de grupos disidentes de la ZAPU, apoyados por Sudáfrica, los que desde hace dos años desataron una campaña terrorista en la provincia de Matabele. La ola de violencia amenazó con provocar un sangriento enfrentamiento entre partidarios de ambos sectores políticos, pero Mugabe hasta el momento ha logrado controlar la situación. Muchos de los políticos más veteranos de la ZAPU están abandonando ese partido para unirse a la ZANU, en un esfuerzo por crear un partido único capaz de aglutinar todo el electorado africano en la difícil batalla contra la minoría blanca que todavía controla casi 60% de la economía del país.



Guerra de ideas e invierno nuclear

□ La administración Reagan presentó en el contexto del presupuesto para 1986, un pedido récord de recursos destinados a la Agencia de Información de los Estados Unidos, USIA, el principal órgano de la propaganda oficial norteamericana. El monto solicitado al Congreso es de 973,6 millones de dólares, que representa un aumento de 22% en relación al presupuesto votado para la institución para el año fiscal en curso.

El director de la USIA, Charles Waick, justificó el pedido afirmando que será destinado a lo que los círculos gubernamentales de Washington llaman "guerra de las ideas". La USIA tiene representaciones en 125 países,

transmite programas en 42 idiomas durante casi mil horas semanales y cuenta con más de ocho mil funcionarios. La agencia está subordinada a las secciones de información de las embajadas y a la Radio "Voz de América".

Con Reagan la llamada "guerra psicológica" se transformó en política de Estado y la USIA adquirió una importancia como nunca antes había alcanzado. El propio presidente definió así los objetivos del organismo: "Su misión es comercializar en el exterior con eficacia los principios defendidos por los Estados Unidos".

Curiosamente, coincidiendo con la divulgación del pedido de presupuesto récord para la USIA,

el *New York Times* señaló que el Pentágono, por primera vez, había reconocido la validez de la teoría científica según la cual una eventual guerra nuclear podría provocar una nube de polvo capaz de tapan el sol y causar un congelamiento brusco del planeta. El diario norteamericano afirma que estas conclusiones —incluidas en un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos— se basan en un estudio científico de 1983 sobre los efectos destructores de una guerra nuclear.

Para el *New York Times*, el hecho que el Pentágono haya reconocido como verdaderas las conclusiones de los científicos no significa que la Casa Blanca vaya a alterar su política armamentista. Para eso está la USIA, que deberá usar de todo su potencial propagandístico para minimizar el impacto que esa terrible perspectiva pueda causar en la opinión pública mundial.

SUSCRIBASE A

ceres

REVISTA DE LA FAO
SOBRE AGRICULTURA
Y DESARROLLO

Seis veces al año, CERES entrega a sus lectores un paquete excepcional de informaciones, análisis y opiniones que constituye una perspectiva panorámica de las actividades relacionadas con la agricultura y la vida rural en el mundo en desarrollo

Publicada bimestralmente en español, francés e inglés por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Subscripción anual:
12 \$ U.S.A.

Lea CERES

- para conocer nuevas formas de plantear el desarrollo;
- para evaluar la experiencia de los demás con respecto a tecnologías nuevas o diferentes;
- para estar al corriente de las más importantes negociaciones internacionales en curso;
- para darse más ampliamente cuenta de la función de sus respectivas disciplinas;
- para entender mejor las fuerzas más poderosas que están dando forma al desarrollo rural.

Para suscripción dirigirse a: DILITSA - Pomona 30 - México 7, D.F. Tel. 511.45.94

Viejo Orden de posguerra versus Nuevo Orden Económico

Cuarenta años han transcurrido desde que, el 19 de mayo de 1945, concluyó la Segunda Guerra Mundial. Con ella desapareció de la historia el ominoso espectro del nazi-facismo desplegado por las potencias del Eje. Las cuatro décadas pasadas, así como el presente y el futuro previsible, están dominadas por la competencia global y planetaria entre las potencias aliadas victoriosas, y por lo tanto entre el capitalismo liberal y el socialismo.

El conflicto tuvo como protagonistas a las potencias del Norte, pero el orden mundial emergente en aquellas latitudes condicionaría las posibilidades de desarrollo económico y las opciones políticas de los países subdesarrollados del Sur. Dicho de otro modo, los centros de poder mundial se proyectarían decisivamente sobre la periferia. Pero al mismo tiempo la rivalidad ideológica y geopolítica entre los dos sistemas triunfantes — la bipolaridad Estados Unidos versus Unión Soviética — constituiría una realidad dialéctica plena de contradicciones que no cabría imaginar en el caso de una guerra ganada por un grupo de naciones identificadas con los mismos intereses e igual orientación ideológica.

En tal contexto se insertaron las luchas y las aspiraciones de los pueblos del Tercer Mundo por la liberación, entendida en su amplia acepción, que aúna la independencia política a la autodeterminación y el despegue económico. Las vistas en perspectiva resaltan las vertiginosas mudanzas políticas ocurridas en estos 40 años, frente a cambios económicos lentos y desiguales, que en algunos casos fueron verdaderos retrocesos. En conjunto el ámbito económico prepararía a las naciones subdesarrolladas decepciones y frustraciones.

Si se exceptúa a los países latinoamericanos,

de vieja independencia, casi toda Africa y gran parte de Asia se hallaban en 1945 sojuzgadas por el colonialismo.

El rápido proceso independentista que caracterizó los años 50 y 60 respondió a un complejo de factores entre los que se destacan:

- 1) la pugna Este-Oeste y el consiguiente esfuerzo de los bloques rivales por granjearse a los países del Sur.
- 2) La nueva situación de los pueblos colonizados por las potencias perdedoras.
- 3) La voluntad de los Estados Unidos, menos comprometidos que sus aliados europeos con el colonialismo clásico, por penetrar económicamente en las posesiones de aquellos (este objetivo estaba dificultado o impedido totalmente en la medida en que la situación colonial implicaba la pertenencia a la esfera económica de la metrópolis).

Así como el espacio colonial estaba obstruido, por definición, al comercio y las inversiones externas, la independencia política conllevaría la apertura al libre comercio, donde triunfa la ley del más fuerte. Puesto que todas las naciones de Europa habían concluido la guerra en ruinas y los Estados Unidos habían surgido como la primerísima potencia mundial, era lógico que sus políticos y empresarios coincidieran con la Unión Soviética en favorecer, a su manera y con metas diferentes, la descolonización.

Ya hacia el fin de los años 60 el mapa político se había transfigurado. Las colonias de tipo tradicional sólo se encuentran hoy en algunas islas y pequeños territorios que constituyen una ínfima parte de la superficie y la población del orbe.

Este proceso lineal no se corresponde con el zigzagueante andar de la economía en los países del Tercer Mundo, donde viven las dos terceras

partes de la población planetaria. Desde los primeros años de la posguerra el poderío productivo de los Estados Unidos no cesó de afianzarse, mientras Europa Occidental y Japón gozaban de los encantos de lo que en aquella época se denominó "milagro económico". Por su parte los países socialistas rivalizaban con las naciones capitalistas más expansivas — Japón y Alemania Federal — en obtener las tasas de crecimiento del Producto Nacional Bruto más altas del mundo. Esto quiere decir que en el Norte vencedores y vencidos, capitalistas y socialistas, es decir todos, conocieron la expansión y el desarrollo armónico de sus economías. En el Tercer Mundo el crecimiento económico siguió ligado, como siglos atrás, a los precios de unas materias primas cuyos mercados no controlaban — ni controlan — los países productores. Esto significa que, cuando la demanda de los centros industriales es alta, aumentan los volúmenes y los precios de los productos básicos. Y cuando la oferta es baja las cotizaciones se derrumban, a veces calamitosamente, junto con los volúmenes. Estas oscilaciones se dan en el marco del crónico intercambio desigual que marca a fuego las relaciones entre los países productores de materias primas y las naciones industrializadas que las consumen. Los productos manufacturados tienen elevado valor agregado — tanto por el trabajo obrero como por la remuneración del capital — y se intercambian en el comercio mundial por materias primas de muy bajo valor agregado. Es así que la capacidad de compra de una tonelada de granos o de yute, desciende constantemente en relación a los automóviles, armas o equipos que se adquieren con aquellas exportaciones. De tal manera las naciones industrializadas cuentan con la plataforma para un crecimiento autocentrado y continuado, sólo afectado por las crisis periódicas. Las economías periféricas, a su vez, aun en los años de incremento de sus exportaciones no obtienen del comercio internacional un excedente suficiente para su desarrollo industrial, que les posibilite el crecimiento armónico. Desde la posguerra hasta nuestros días el Tercer Mundo ha conocido ciclos de relativa bonanza,

así como de depresión. Pero en tan largo período, no ha conseguido lo sustancial: modificar su situación de proveedor de materias primas, con el consecuente subdesarrollo y dependencia económica.

Esto significa que, tanto los países latinoamericanos que alcanzaron la independencia política a principios del siglo pasado, como los afroasiáticos que la consiguieron hace pocos lustros, conocen aún el colonialismo económico o, al menos, una fuerte dependencia externa.

Hay, desde luego, diferencias importantes en el vasto y colorido abanico tercermundista. Hay un grupo de países de reciente independencia que prácticamente dejaron intactos sus vínculos con los intereses de las metrópolis y de las nuevas empresas (norteamericanas y de otras potencias capitalistas) asentadas para explotar sus riquezas primarias. En éstos la reducida burguesía local, generalmente corrupta, se alió a los extranjeros y logró enriquecerse. Este fenómeno tuvo como consecuencia una modernización parcial de los principales centros urbanos junto con la introducción de hábitos y consumos copiados de las capas superiores de Occidente.

La succión de recursos para dicha modernización y la mantención del nivel de vida de la alta burguesía mediante importaciones, implicó la ausencia de recursos para el interior del país, la miseria de las masas campesinas y el éxodo hacia las ciudades donde las espera un destino de subproletariado y desocupación.

En el extremo opuesto, un grupo de países emprendió el camino de la liberación, incluyendo el establecimiento de relaciones diversificadas Este-Oeste. Dicha alternativa permite entre otras cosas generalizar la educación y la salud, o sea la distribución equitativa de los recursos disponibles y solucionar por lo tanto problemas fundamentales. Pero el desarrollo económico requiere asimismo de capitales y tecnologías que las economías subdesarrolladas sólo podrían obtener si recibieran cuantiosos excedentes provenientes del comercio internacional. A falta de ellos genera un círculo vicioso que sólo puede interrumpirse mediante sacrificios a lo largo de muchos años. Algunos países parecieron escapar a la férrea ley del intercambio desigual. Se trata de los países

exportadores de petróleo miembros de la OPEP, que en 1973 consiguieron asumir el control del mercado de crudo y por lo tanto fijar por sí los precios del producto.

Se ha tratado de la única experiencia conocida hasta hoy en el sentido de invertir el deterioro de los términos del intercambio. Los precios del petróleo, en efecto, crecieron hasta tal punto que las mismas cantidades del producto tuvieron un mayor poder de compra sobre las manufacturas, para no hablar de las materias primas distintas al petróleo. Las circunstancias que rodean al petróleo son excepcionales y por lo tanto el modelo de la OPEP es virtualmente imposible de imitar por otras asociaciones de productores. Pero además en los últimos años debido a una compleja conjunción de factores

la organización ha perdido el control del mercado y los precios han mermado. Los analistas se interrogan, por lo tanto, acerca del futuro de la OPEP.

El retraso y la dependencia de los países del Tercer Mundo han determinado que la crisis recesiva mundial iniciada al comienzo de esta década los golpeará con violencia inusitada. Se trató de un retroceso muy significativo expresado en caídas de los productos brutos nacionales, de exportaciones e importaciones y del incremento exponencial de la deuda externa.

Esta, la más larga y profunda recesión desde la posguerra, puso al desnudo los males de la dependencia que hemos descrito, así como los engañosos cantos de sirena transmitidos desde los centros capitalistas a la periferia.

Un reciente informe del Banco Mundial revela que la deuda externa de los países del Tercer Mundo que sumaba 610 millones de dólares en 1980 llegará a la asombrosa cifra de 970 mil millones de dólares —casi mil millones de dólares— a fines de este año. Impulsada por las altas tasas de interés en los Estados Unidos la deuda se infla desmesuradamente y absorbe recursos ingentes de las exportaciones sólo para pagar los intereses. La deuda fue contraída para financiar planes de desarrollo mediante créditos que los países sólo podrían obtener en el exterior.

Al comienzo el costo de los créditos parecían tolerables, pero el aumento de los tipos de

intereses los encareció extremadamente.

El resultado es que por primera vez el año pasado el Tercer Mundo —siempre según datos del Banco Mundial— pagó 92 mil millones de dólares por concepto de servicio de la deuda, y solo captó 85 mil millones de dólares en forma de nuevos créditos, inversiones, cooperación y demás flujos de capitales.

O sea que los países del Tercer Mundo confrontan ahora un déficit crediticio (de 7 mil millones de dólares en 1984) que implica que el costo de su deuda es superior a todos los flujos de capital que reciben. Y al mismo tiempo la deuda crece y agiganta un drama sin salida previsible.

Frente a tan grave situación la comunidad internacional no tiene respuesta alguna.

En realidad los remedios son perfectamente alcanzables y constan en las proposiciones enumeradas por el movimiento de los países no alineados en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional.

Se trataría de disponer transferencias de recursos y tecnologías orientadas a paliar el desequilibrio mundial y a brindar a los países pobres la posibilidad de emerger del subdesarrollo.

Se llamó diálogo Norte/Sur al intento de poner de acuerdo a países industrializados y subdesarrollados en las bases mínimas para introducir criterios de equidad en las relaciones económicas internacionales.

Hasta mediados de la década pasada pudo parecer que podría superarse la intransigencia de las potencias industrializadas en cuanto a formular concesiones ya que algunos de los países del grupo así lo reclamaron. Pero se impusieron los duros y los acontecimientos posteriores, entre ellos la elección y reelección de Ronald Reagan, demostraron la inutilidad de un diálogo que en verdad nunca comenzó.

Hoy el cuadro es tan grave que aunque el diálogo Norte/Sur sea sólo una pía ilusión, no hay fuerza suficiente para volver a convocarlo.

La llamada comunidad mundial, que tuvo su expresión institucional en las Naciones Unidas y sus diversas agencias cuando todavía estaban tibias las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, parece incapaz de encontrar paliativos para el drama más grande de nuestro tiempo.



La transición

Los procesos de transición, como el que vive Brasil, son difíciles y complejos. Exigen mucha firmeza pero también flexibilidad.

Los dos mejores ejemplos de transiciones bien conocidas son los de España y Uruguay. En ambos, el fin de las respectivas dictaduras estuvo marcado por significativos avances políticos (y en el caso de España, ya más consolidados, también económicos y sociales) que dieron a sus pueblos la sensación de un cambio.

En Brasil, ese proceso de cambio, por lo menos temporalmente, quedó trunco por la enfermedad del presidente Tancredo Neves. Sin embargo, incluso antes de que el presidente electo tuviera que abandonar la escena pública, ya se percibían señales de que las clases y grupos que apoyaron y tuvieron la conducción del régimen autoritario, no estaban decididos a renunciar al control del país.

Esa tal vez sea la muestra más evidente del complejo momento que está viviendo Brasil.

Las condiciones del continuismo

Al negarse hábilmente a aceptar el proceso de voto directo para elegir al sucesor del general João Figueiredo, el núcleo dirigente del poder autoritario creó las condiciones para el continuismo. No había ninguna duda de que, por surgir de una coalición opositora en torno a la cual además del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) también se integraban otras fuerzas, la candidatura del Dr. Tancredo Neves a través de elecciones directas de antemano se presentaba victoriosa.

La gran maniobra de esos sectores de poder dentro de la dictadura fue impedir las elecciones directas e imponer la vigencia de un Colegio Electoral integrado por poco más de seiscientos electores de escasa representación popular, que suplantaron a un electorado que ya se aproxima a los

Los desafíos de la herencia de dos décadas de arbitrio y represión

30 millones de votantes

Cuando la Cámara de Diputados derrotó por escasas dos decenas de votos la aprobación de la enmienda constitucional que establecía las elecciones directas, el régimen obtuvo un tanto decisivo: sacaba de las manos del pueblo la trascendente elección

del presidente que debería dirigir la lucha por la reconquista democrática y la ponía en manos de una pequeña minoría de políticos.

Pero esa maniobra fue aun más eficaz, pese a estar llena de oportunismo: los mismos sectores del partido gubernamental, el PDS (Partido Democrático Social) que con su voto ayudaron a la derrota de la enmienda por las directas, rompieron a último momento con el oficialismo y se convirtieron —dentro del Colegio Electoral— en el factor decisivo para la elección del Dr. Tancredo Neves.

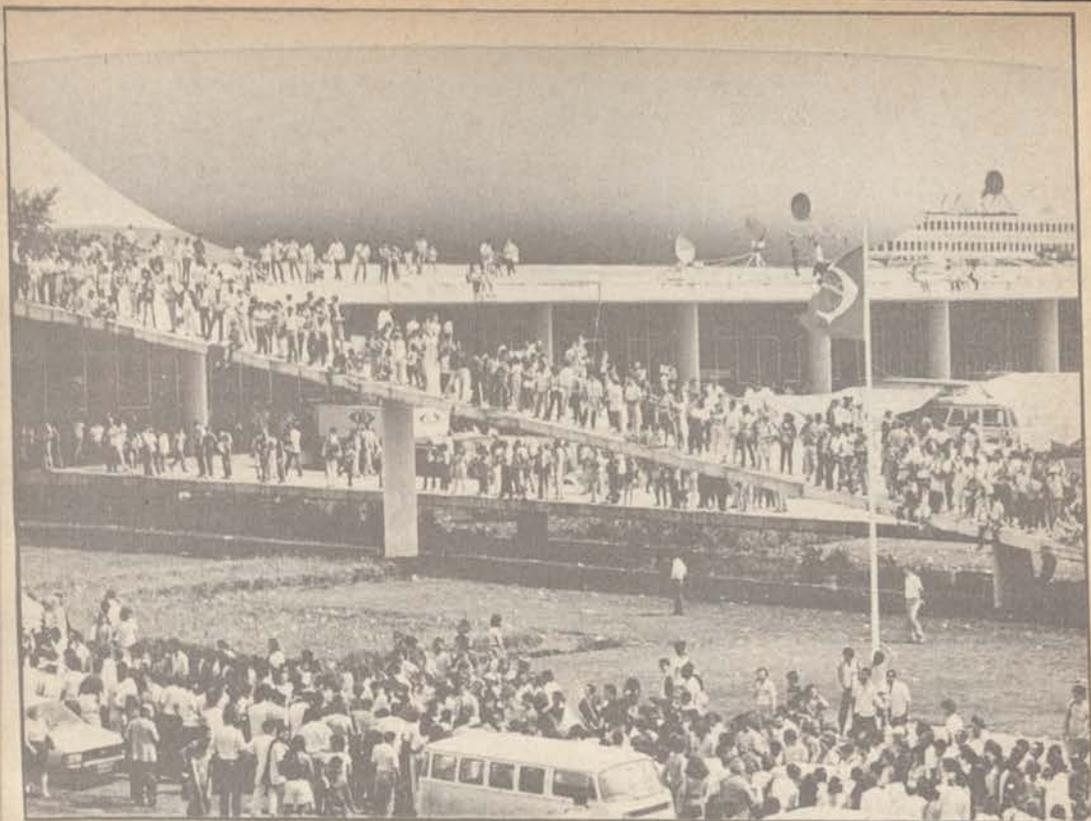
La autenticidad amenazada

A partir de ese momento, la transición tuvo que pasar por el cernidor de esa escisión y todo el proyecto político de cambios concebido por la oposición habría de experimentar un progresivo proceso de deshidratación que modificó fundamentalmente su autenticidad.

Eso explica como, en una suerte de pase de magia, el presidente del PDS, José Sarney, que en la víspera juraba fidelidad al presidente João Figueiredo y dirigía en el Parlamento la lucha contra las elecciones directas, resurgió como uno de los líderes de la redemocratización y pasó a ser el candidato a la Vicepresidencia en la fórmula de la oposición acompañando al Dr. Tancredo Neves.

La candidatura del senador José Sarney, más que un exitoso proyecto personal de corte oportunista, representa la inserción en el centro mismo de las decisiones de sectores políticos y económicos comprometidos con las concepciones del régimen anterior.

Pero no es un caso aislado, sino que caracteriza



La correlación de fuerzas pudo haber sido otra si la dirección del PMDB hubiera dado otro rumbo a la campaña por las elecciones directas

a todo un amplio espectro de adhesiones del mismo origen. El gabinete ministerial, de acentuado tono conservador y continuista, refleja una correlación de fuerzas que pudo haber sido otra si la dirección del PMDB —apoyada por uno de los mayores movimientos populares en la historia de Brasil— hubiera dado otro rumbo a la campaña por las elecciones directas.

Hoy, un mejor conocimiento de la situación del régimen autoritario en su etapa final permite sacar como conclusión que el gobierno del general Figueiredo no estaba en condiciones de resistir la movilización nacional para el cambio del sistema de elección presidencial.

El hecho es que esa etapa pasó a la historia y debe ser mencionada apenas como una referencia para una evaluación de lo que hoy debe hacerse.

Como resultado de una híbrida composición de fuerzas políticas que reunió en una misma mesa a los proscritos y a los que llevaron adelante las proscripciones, a los que impidieron las elecciones directas y a los que lucharon por ellas, a los que sufrieron la represión y a los que la apoyaron, a los que entregaron las riquezas de Brasil al extranjero y a los que se opusieron a ello, era inevitable que el programa mínimo de la oposición expuesto en

su plataforma electoral no pudiera ser llevado a la práctica como el pueblo esperaba.

La presencia del FMI

Esa realidad se reflejó en las primeras medidas del nuevo gobierno, anunciadas en el discurso preparado por Tancredo Neves y que el Vicepresidente leyó a su gabinete ministerial. El programa es recesivo y recuerda mucho las recetas del Fondo Monetario Internacional. Incluso volvió la sra. Jul, representante del FMI, y como siempre, imponiendo criterios y pasándoles retos a funcionarios recalitrantes. El programa es evidentemente recesivo pese a no tener fuerza para contener la inflación.

Aun cuando resulte difícil que la herencia de la dictadura sea condenada por José Sarney, Aureliano Chaves, Antonio Carlos Magalhães, Marco Maciel y tantos otros exponentes del autoritarismo, el hecho concreto es que es del régimen dictatorial de donde proviene la grave crisis por que atraviesa Brasil. El relevamiento de cifras llevado a cabo por el nuevo ministro de Planificación, João Sayad, es terrible. Los déficits son brutales: 1.600 millones de dólares en el presupuesto fiscal; 2.400 millones de dólares en el funcionamiento de las empresas es-



La composición del gobierno no atrae la movilización del pueblo para los sacrificios que serían necesarios.

tales; 1.600 millones de dólares en seguridad social y un desfasaje de 1.800 millones en la previsión del financiamiento de la zafra. Una sumatoria de 7.400 millones de dólares, 11,5% de la deuda externa brasileña.

La reducción del gasto público en el presupuesto de la República de casi 400 millones de dólares y las medidas complementarias de congelación de nuevas inversiones de los bancos oficiales contribuyen a paralizar la vida económica y llevar a la quiebra a no pocas empresas.

¿De dónde va a obtener el gobierno esos inmensos recursos? Seguramente no será de los grandes empresarios. Ellos son ministros, altos funcionarios o están amparados por el apoyo de los disidentes del PDS (el Frente Liberal) dentro del que casi todos militan. Tampoco podrá obtenerlos del superávit de la balanza comercial. Además de ser muy inferior a lo que Delfim Netto prometió al FMI —12.700 millones de dólares— el superávit está totalmente empeñado para el pago de los intereses de una deuda externa que supera los 110.000 millones de dólares.

Soluciones audaces

Los recursos rutinarios serán insuficientes para enfrentar ese déficit colosal. Los países de magia comunes al régimen anterior ya no hay cómo repetirlos, y una mayor recesión no solo ampliará las áreas de hambre sino que también aumentará la presión de la desesperación social.

La impresión más precisa que nos deja este cuadro es que no se trata de corregir errores y deficiencias en el funcionamiento del sistema capitalista sino de contenerlo en algunos aspectos, sustituirlo en otros y despegar con soluciones audaces fuera de los moldes fondomonetaristas.

18 - tercer mundo

Eso resulta impensable durante el interinato de José Sarney. Al vicepresidente le falta autoridad política para emprender un cambio de esa magnitud. Pero tampoco sería una situación fácil para el Dr. Tancredo Neves si asumiera en breve el poder. Los factores que levantaron, piedra sobre piedra, ese engendro que es hoy la economía brasileña están anidando en las entrañas de la Nueva República. Y tendrán poder como para dificultar, impedir o sabotear cualquier política que apunte a modificar ese panorama.

Por otro lado, nada podría hacerse sin la participación del país, y la verdad es que el gabinete ministerial, con algunas excepciones, no atrae la movilización del pueblo para una comunión de sacrificios, ya que no existe ninguna seguridad en los cambios que la justifiquen.

Si las fuerzas opositoras que lucharon por el cambio constatan a corto plazo la frustración de sus objetivos, lo más probable es que ocurra una reorganización política que echaría la bases para el surgimiento de una nueva oposición. De suceder así, ese hecho podría marcar el destino del país en las próximas consultas electorales.

La dirección del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) que tiene al frente al diputado Ulysses Guimarães, un líder que en estos episodios ha desempeñado un papel muy importante — teme ser responsabilizada por esa frustración nacional. Tiene conciencia de que podrá enfrentar una disidencia importante a corto plazo, que al escindirse del PMDB se junte a otras fuerzas en la constitución de lo que podría llamarse la *nueva oposición*. Líderes partidarios como Leonel Brizola, Luis Inácio da Silva (Lula) y tantos otros tendrán un papel central en esa recomposición democrática.

Pero ella podrá alcanzar sus objetivos solamente si las nuevas fuerzas protagónicas de la sociedad brasileña —las Comunidades de Base, las asociaciones de barrio o de sectores laborales, los sindicatos, las entidades que nuclean a los profesionales liberales, la izquierda política, los jóvenes, las asociaciones campesinas y otras— pasen a constituir el núcleo de ese inmenso esfuerzo de movilización y participación.

Brasil hoy por hoy, es otro. Si los líderes no lo entienden así están cometiendo errores graves. Con todas sus carencias y frustraciones, el gobierno de Tancredo Neves tendrá un papel importante en esa batalla: asegurar al pueblo los espacios de libertad para que pueda trazar libremente su destino, con mayor claridad ideológica y coherencia política.

¿Podrá hacerlo? Las opiniones vertidas en esta edición —comenzando por la importante entrevista al Dr. Raymundo Faoro— ayudará al esclarecimiento de un cuadro político tan difícil como imprevisible. (Neiva Moreira)



Desde que el presidente Goulart (izq. arriba) fue depuesto en 1964 Brasil ha sido gobernado por regímenes militares. En nombre de la seguridad nacional ellos impusieron un modelo de desarrollo dependiente, volcado hacia el consumo y las exportaciones, en desmedro de las capas más pobres de la población, condenadas al hambre y la desocupación.

En enero de 1985 se realizaron elecciones presidenciales — indirectas — y por primera vez en 20 años un civil resultó victorioso: Tancredo Neves. Pero el destino no permitió que él asumiera. Se discute ahora cómo será asegurada la transición en las actuales circunstancias





Faoro: "Constituyente, ya!"

A partir de 1975, los abogados brasileños comenzaron a movilizarse contra la tortura y las arbitrariedades cometidas por los servicios repressivos del régimen militar. Fue la primera asociación de profesionales liberales que se organizó para la lucha por la defensa de los derechos humanos. La Orden de Abogados de Brasil (OAB) retomó la expresión "sociedad civil" — creada por Jean-Jacques Rousseau — término que pasó a definir a ciertos sectores sociales, profesionales y políticos que discrepaban abiertamente del autoritarismo.

Esa lucha de los abogados fue asumida con responsabilidad por el entonces presidente de la OAB, Raymundo Faoro, originario del estado de Rio Grande do Sul, que se autodefine como liberal. A fines de la década del 70, Faoro fue un personaje clave dentro del movimiento que se insinuaba en la sociedad civil en favor de un restablecimiento de las garantías constitucionales y por el retorno al 20 - tercer mundo

El ex presidente de la OAB evalúa la situación actual y concluye que la dictadura solo acabará con una nueva Constitución

tado de derecho.

Su actuación fue tan destacada que el gobierno militar — en ese entonces cada vez más aislado de los civiles y, sobre todo, de aquellos que hacían de la defensa de la ley su profesión — lo convocó para conversar sobre varios de esos problemas.

El Dr. Faoro asistió a los primeros pasos del proceso que se dio en llamar

"apertura". Diez años después de iniciarse esa articulación, en 1985, el país vuelve a manos de los civiles en medio de un renacer de muchas esperanzas por una redemocratización completa y rápida. Como testigo de algunas instancias críticas de la historia reciente de Brasil, el ex presidente de la Orden de Abogados está en una posición privilegiada para analizar perspectivas institucionales. Es ese el centro de esta entrevista, hecha con un estilo que fue para Faoro, en cierta medida, un desahogo.

¿Cuál es el balance que Ud. hace de la legisla-

ción vigente desde el punto de vista de aquellos ideales anti-autoritarios que Ud. defendió como presidente de la OAB?

— La Constitución actual es, verdaderamente, muy autoritaria. Toda la legislación creada en los últimos años está integrada a esa Constitución. La Ley de Seguridad Nacional fue suavizada dos veces después de 1977, pero todavía es una ley dura, que castiga al disidente político y lo confunde con un sedicioso. En realidad, todavía tiene un efecto inhibitorio muy grande. Si un diario o una revista pueden correr el riesgo de ser sancionados, no tendrán la misma franqueza o la misma libertad para abordar ciertos temas delicados que involucran intereses del gobierno.

La estructura corporativa de los sindicatos será, de aquí en más, el tema que deberá ser discutido con más intensidad. Esa estructura data de la Carta de 1937, pertenece aun al "Estado Novo" que copió la legislación fascista. El sindicato ejerce funciones delegadas por el poder público y el subsidio que recibe proviene de un impuesto que el gobierno recauda. Hay una gran injerencia oficial en la vida sindical. De manera que, sin libertad sindical auténtica ni sindicatos que hagan uso de esa libertad, la que incluye el derecho pleno a la huelga, no creo que la transición que tenemos planteada se consolide democráticamente.

¿Y en cuanto a los poderes de la federación?

— La Constitución de 1967 cambió el nombre del país, que pasó a llamarse *república federativa*. (El nombre era desde 1891, Estados Unidos de Brasil). En realidad, la federación terminó en 1967. Hoy no existe ningún programa estadual que sobreviva autónomamente. Los recursos son siempre transferidos a la Unión. La federación, además de sus ventajas económicas y de su eficiencia administrativa, tiene también una carga y una significación política muy grande, es mucho más democrática.

Los estados podrían contar con recursos de la Unión o tributar a ella, pero el destino de los mismos debería ser de responsabilidad local por un criterio democrático de fiscalización, como es el contacto entre el que realiza la obra y el que resulta beneficiado. Brasil está lleno de obras que la población no ha pedido, mientras muchas cosas que el pueblo pide nunca fueron atendidas.

Una constituyente sobre nuevas bases

¿La solución sería una constituyente?

—Entiendo que ése es el camino. Uruguay no necesitó constituyente ni Argentina tampoco. En ambos países, los militares elaboraron una estructura institucional que no afectó la Constitución y desapareció en determinado momento, permitiendo que la Carta Magna volviera a emerger. En Por-



Raymundo Faoro: "En Brasil no hay otra solución sino una Constituyente"

tugal y en España eso no fue posible, porque la Constitución fue recortada, invadida por la legislación autoritaria, quedando su estructura básica completamente diferente a lo que era. En Brasil también, al punto que no hay otra solución sino una constituyente, no sólo como formalidad jurídica sino para invertir el proceso político, para que exista soberanía popular desde la base.

De acuerdo con su razonamiento, si lo que se busca es asegurar la representatividad, la Constituyente no podría ser elegida a través de la viciada legislación electoral actual..

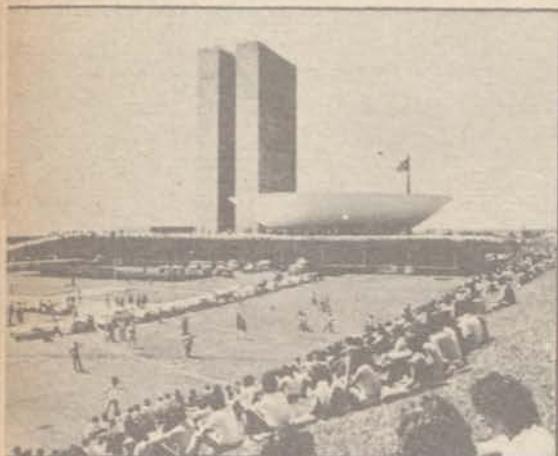
—Exactamente. Suelo pasar por anarquista para muchos sectores de izquierda porque encuentro un absurdo total hacer una constituyente dentro del Congreso. Sin embargo puedo demostrar por qué eso sería una distorsión y una falsedad: el Parlamento, de acuerdo con la Constitución actual y continuando la tendencia que viene de 1934, tiene un componente oligárquico en su representación, pues se establece que cada estado tendrá un mínimo de ocho diputados y un máximo de 60. De esa manera el peso del voto pasa a ser diferente según el estado.

En segundo lugar, infelizmente, el Congreso es casi un brazo del ejecutivo. ¿Cómo llega al Congreso un político? Accede a ese puesto porque se vinculó a un gobernador o a un caudillo local,

quien, en general, es el que logra hacerlo elegir.

Ese sistema de "clientelismo" hace que una constituyente elegida dentro del Congreso sea moldeada por el gobierno.

Esa fue la tragedia de las constituyentes republicanas de comienzos de siglo, hechas por un grupo de poder. Así sucedió en 1891 cuando surgió un federalismo que solo funcionaba para San Pablo y Minas; el resto del país simplemente no existía. El general Flores da Cunha, de Rio Grande do Sul (frontera con Uruguay), fue elegido durante años por el estado de Ceará (en el norte). Murió sin ir a Ceará ni siquiera para ver la cara de sus electores. Esa era la llamada "política de los gobernadores".



"A ese Congreso le llevará de 250 a 280 años eliminar la 'basura' autoritaria dejada por la dictadura"

La constitución de 1934 fue un proceso serio, pero duró poco. En 1946, se hizo una nueva carta con el pretexto de redemocratizar el país. Los interventores de los estados se autoeligieron, eligieron a sus amigos e hicieron la Constitución que, en muchos aspectos fundamentales — como la estructura sindical y la tutela militar — mantuvo el "Estado Novo".

Los militares intervinieron en 1954, 1955 y 1964 porque la Constitución decía que eran sus garantes y, por lo tanto, sus árbitros. Fueron las constituciones republicanas las que, para mantener la situación de privilegio de una clase, pusieron a los militares de árbitros de la situación. Por eso los militares, en verdad, mantuvieron el *status quo*. Las constituciones de 1891, 1934 y 1946 decían que los militares eran quienes "garantizaban" su vigencia. En las constituciones de 1937 y 1967 se decía que los militares son los que sustentan el poder constituido y tanto en 1937 como en 1967, el poder constituido era de ellos. Cuando no son el sustento, son los árbitros. ¿Cómo creer, entonces, que las élites de hoy, solo porque cambió el presi-

22 - tercer mundo

dente de la República y ahora es un civil, van a votar una Constitución que permita, por ejemplo, la autonomía sindical y separe a las Fuerzas Armadas de su papel tutelar?

Antes de ser elegida la constituyente, ¿cuáles son los pasos que deben darse para garantizar su representatividad?

— El voto debe valer aquí, en el estado de Río de Janeiro, tanto como en Maranhão: un hombre, un voto. Debe ser un cuerpo independiente que desaparezca cuando haya terminado su función. La constituyente tiene que salir del movimiento popular.

En cuanto a las medidas previas, he oído hablar que la constituyente será convocada después que haya sido removida la "basura" autoritaria, como le están llamando ahora a toda esa legislación elaborada durante los años de arbitrio. Creo que eso es un sofisma, porque son más o menos 400 leyes a cambiar. Si se modificara una por mes, llevaría 400 meses y sería el Parlamento el responsable por esa tarea. Sin embargo existen en el Congreso 200 proyectos derogando la ley de seguridad nacional. A ninguno se le dio andamio. Hay millares de proyectos sobre la consolidación democrática, pero ninguno caminó. A este Congreso le llevará entre 250 y 280 años eliminar la "basura" autoritaria. Si el pueblo desde abajo no exige la constituyente habrá simples retoques en la Carta Magna pero no va a cambiar mucha cosa.

¿Cuáles serían los puntos fundamentales que deberían ser discutidos por la Asamblea Constituyente?

— La Constitución no debería reglamentar mucha cosa sino básicamente la organización de los poderes, y asegurar las garantías de los derechos (inclusive los sociales que no están previstos, como el derecho de huelga y de reunión). Debe garantizarse la participación popular, la libre existencia de partidos y entidades. Una constitución es para eso: dejar que la sociedad resuelva sus problemas, utilizando todas las libertades, no solamente las tradicionales del liberalismo. Cualquier artículo de la constitución debería ser normativo, es decir, exigir garantías efectivas.

¿Cómo asegurar la participación popular?

— La Constitución debe asegurar el derecho de reunión y de asociación, y la libre organización de los partidos políticos (sin diferencias entre clandestinos o no, pues eso no tiene ningún sentido). Asegurados esos derechos, la sociedad brasileña ya tendría condiciones para organizarse.

El poder económico y el voto

¿No sería necesario incorporar alguna cláusula



"El presidente Tancredo, de cierta manera, fue aceptado por los militares"

en la Constitución, que puna la inferencia económica en la contienda electoral, es decir, que evite la "compra" del voto, tan común en las regiones más carentes del Brasil?

— Este tema es como la cuadratura del círculo. ¿Cómo evitar la influencia del poder económico en las elecciones? El código electoral actual ya establece puniciones a la presencia del poder económico, y sin embargo, está ahí presente. La única defensa contra él es ampliar el voto lo más posible, por ejemplo, otorgando el voto a los analfabetos.

¿Extendería también el voto a los militares?

— Yo no haría restricciones al voto de los militares. Creo que es bueno que la política entre a los cuarteles, de forma que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan asumir su identidad: "soy del PDT, soy del PDS, soy del PMDB, soy del Frente Liberal". ¿Cuál es el problema?

¿Usted coloca entonces a la institución militar en el mismo nivel que otras instituciones?

— Como tal, la institución militar no debe ser partidista. Pero sus integrantes lo son, de hecho. Si no fuera reconocido así constitucionalmente, en la práctica continuarían teniendo sus propias convicciones políticas, pero se valdrían del "apoliticismo" para cubrir muchas aventuras. Creo que toda restricción en ese sentido es mala. A partir de cierto momento, cuando el proceso de apertura política madure más, todos vamos a pertenecer a algún partido. Sea a través de la filiación directa, sea a través de nuestras preferencias políticas. No hay como evitarlo y tal vez ni siquiera sería deseable intentarlo.

Ya que estamos analizando la democratización del voto, ¿cómo ve usted el problema de la supervivencia económica de los pequeños partidos políticos, carentes, en general, de recursos?

— Hay un aspecto muy positivo en la ley electoral actual, que debe ser incluso perfeccionado, que otorga recursos a los partidos políticos. Es necesario evitar que los partidos pequeños desaparezcan por falta de medios económicos.

Y, completando la idea anterior, debo afirmar que, evitar que el elector venda su voto, será en Brasil una verdadera revolución social. Es una tarea educativa de muchos años que supone elevar la conciencia del ciudadano sobre el valor del sufragio, con el que no puede traficar.

La dictadura no terminó

Como jurista, ¿Ud. cree que la dictadura en Brasil terminó, o no?

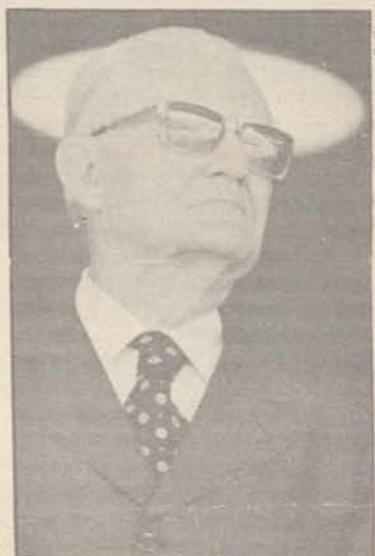
— No, de ningún modo, e incluso entiendo que es peligroso alimentar una expectativa de esa naturaleza. Este nuevo gobierno tiene derecho al decreto-ley y a adoptar medidas de emergencia sin control del Parlamento. Solo porque el presidente es civil, eso no modifica la concentración del poder que él tiene en sus manos. En caso de entenderlo así sería como decir que hay un buen y un mal dictador, la dictadura sería una cosa neutra. Pero la dictadura está ahí, la tutela militar está presente. Que alguien pruebe cambiar más de lo que se pretende, y verá lo que sucede. ¿Por qué fue posible elegir a Tancredo y no a otro? Porque Tancredo, de cierta manera, fue aceptado por los militares. Eso no fue un proceso democrático sino una tran-

sacción, que de algún modo falsificó todo el proceso.

Una elección directa ahora, ¿terminaría con la dictadura?

—Creo que tampoco. Con esta Constitución, un presidente elegido por voto directo no tendría solamente esos poderes extraordinarios sino además una autoridad moral muy grande para hacer uso de ellos. Por lo tanto, sería un dictador mucho más peligroso que aquel que no fue elegido por el pueblo y cuya legitimidad puede ser cuestionada en cualquier momento.

Entonces, ¿la dictadura en Brasil solo terminará con una constituyente y, después, con una elección por voto universal y secreto?



"Geisel pudo hacer ciertas cosas porque era militar"

—La constituyente es fundamental, pero ella podría no optar por las elecciones por voto universal. Cabría la posibilidad de que la constituyente adoptase un modelo parlamentario, del tipo alemán o italiano, donde la elección es indirecta y el presidente de la República no tiene poderes. Eso no significa que el gobierno que resultase de esa constituyente sería ilegítimo.

¿Cuándo cree usted que va a comenzar la transición hacia la verdadera democracia?

—En el momento en que se instale la constituyente. Será el mismo proceso que en Portugal. En ese país, el autoritarismo no terminó con la revolución de los capitanes sino cuando el pueblo comenzó a votar dentro de la nueva Constitución. Lo mismo sucedió en España: la dictadura no terminó con la muerte de Franco sino cuando fue posi-

ble una elección dentro de un marco institucional votado por el pueblo.

Las diferencias con Uruguay y Argentina

¿Existe, entonces, una diferencia bastante profunda entre el proceso uruguayo o el argentino, y el brasileño?

—Entiendo que hay una diferencia tan grande como la que existe entre Argentina y Uruguay, por un lado, y España y Portugal, por otro. Aquí estamos en la línea de estos últimos. Es decir, nuestra transición pasa por una reorganización política que devuelva al pueblo la soberanía popular de la que actualmente carece, y también por una revolución jurídica, por un cambio jurídico sustancial. Antes de que eso se produzca, no solo no tenemos democracia sino que es peligroso alimentar la ilusión de que ya estamos en una democracia. Es tan peligroso como la ilusión que teníamos del régimen de 1946, cuando se suponía que no habría más golpes de estado. En 1954, hubo un golpe de estado, en 1961 se intentó otro y finalmente, en 1964 se instaló un régimen originado en un golpe. Mientras exista ese sistema de tutela, el golpe de estado es un mecanismo previsible. En una democracia no hay golpe de estado.

En el momento actual, ¿de dónde vendría la oposición a una redemocratización real y profunda, del poder militar o del poder civil?

—Creo que ambos están muy próximos, más que hace dos años. Pienso que el poder militar tiene una influencia mayor en el gobierno actual que en el de Figueiredo, pese a que en el de éste era más visible, y afirmo esto por la manera como el gobierno de la "Nueva República" llegó al poder. El general Geisel pudo hacer ciertas cosas porque era militar. Por eso me parece que va a resultar más difícil la lucha de aquí por adelante de lo que fue hasta el momento. Porque se da una ambigüedad: hay mucha gente en la calle diciendo de buena fe que volvió la democracia, lo que es mentira.

La oligarquía política sabe que es una mentira pero mucha gente del pueblo no. Solo lo va a percibir cuando vea desfilar los tanques por la calle, cuando sea disuelta y reprimida una reunión política, o cuando le sea negado el derecho al voto.

La sociedad civil no recupera el poder por el simple hecho que un civil llegue al gobierno. En una democracia un militar puede resultar electo presidente pero el poder continúa siendo civil. El poder actual en Brasil no es civil, porque los militares tienen una influencia tutelar dentro del mecanismo del Estado con la garantía de la Constitución vigente.

¿Cuál es la fecha que usted considera como más

probable para que el gobierno convoque a la constituyente?

—No creo que este gobierno quiera convocar a la constituyente.

Pero se comprometió públicamente a convocarla...

—Hagamos una lectura atenta de lo que el presidente Tancredo Neves prometió. En su discurso del 15 de enero pasado, por ejemplo, habla del "poder constituyente"; de diputados constituyentes. La conclusión que saco es que quiere darle al Congreso lo que éste ya tiene. El Congreso actual, como cualquier otro, puede modificar la Constitución. Por la carta vigente es necesaria una mayoría de 2/3. Parece que el gobierno actual pretende realizar simples cambios en las mayorías, es decir, que la Constitución sea modificada por mayoría simple y, probablemente, fusionando el Congreso en una Cámara sola —Senado y Diputados— lo que es peor, porque desfigura todavía más la representatividad. Eso no es una Asamblea Constituyente.

El grupo que está en el poder, dada su heterogeneidad, va a intentar mantener el poder que tiene. Con la clásica capacidad de maniobras de las élites —unos cambios aquí, otros allá— probablemente van a legalizar a los partidos clandestinos, pero no porque sean fieles a principios democráticos sino porque entienden que pueden vigilarlos mejor fuera de la clandestinidad. A la hora de detenerlos, ya saben la dirección exacta.

Este gobierno tiene una integración empresarial bastante acentuada, lo que me parece todo un símbolo. Por ejemplo, un hombre como Hélio Beltrão, un gran empresario, firmante del Acto 5, dos veces ministro en los gobiernos militares, que va a tener una posición relevante en la "Nueva República", como presidente de PETROBRAS. La composición del nuevo poder sigue más o menos esta línea. Es gente que sabe que si dependiese del voto probablemente serían borrados de la vida pública.

Un neo autoritarismo

¿Cómo definiría usted la alianza política que sustenta el nuevo gobierno?

—Entiendo que el autoritarismo se modernizó. Este es un neo autoritarismo. Se dieron cuenta que ciertas cosas tenían un costo político muy grande, por lo que procuraron una fórmula para que esos costos fueran menores y para que sus posibilidades de supervivencia fueran mayores. Atrajeron como socios, de aquí y de allá, a elementos de izquierda.

Sin embargo, los sectores más auténticamente democráticos se enfrentan a una gran dificultad: la oposición neta a este gobierno proviene por lógica del diputado Paulo Maluf, que fue derrotado en la disputa presidencial indirecta. Los que quieren una democracia auténtica tienen el problema de evitar ser confundidos con la extrema derecha representada por el señor Maluf. Pero no por eso pueden dejar de hacer críticas. La conciliación de las élites



"Cuando el poder popular se fortalece y es autónomo, es imposible que puedan imponerse vetos militares"



"Tengo la impresión que la alianza que llevó a Tancredo Neves a la presidencia no sería capaz de mantener a José Sarney (en la foto, con su señora, saliendo del hospital) en ese cargo"

Ministerio / Ag. O. Lacio

realmente nos dejó en una situación muy difícil.

¿Eso fue algo montado maquiavélicamente o se dio espontáneamente?

—No fue una conspiración. En verdad, se trata de una rutina histórica en Brasil. Aquí, cambio y reforma no quieren decir necesariamente ruptura o transformaciones. Maluf nos obligó a apoyar a Tancredo Neves y a su vice José Sarney. Se produjo una euforia con su triunfo pero me parece que las cosas se van a tornar más claras en los próximos meses.

Dr. Faoro, el agravamiento de la salud del presidente y/o su posible alejamiento de la presidencia por un periodo prolongado que no estaba en las previsiones políticas de los primeros días posteriores a la asunción del Dr. Sarney, genera un nuevo marco institucional. ¿Cómo ve usted esa situación?

—Dividiría la respuesta en dos partes. Por un lado, está el tema constitucional. El texto de la Constitución es claro: mientras perduren las razones de "fuerza mayor", el sustituto del presidente puede permanecer en el cargo.

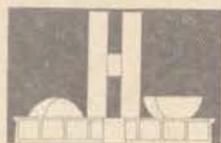
Sin embargo, desde el punto de vista político, las cosas son diferentes. Tengo la impresión que la alianza que llevó a Tancredo Neves a la presidencia no sería capaz de mantener a José Sarney en ese cargo. De ahí que la solución —aunque sé que muchos no piensan así— es la convocatoria a una constituyente y, sobre todo —lo repito una vez más— una constituyente fuera del ámbito del Con-

greso Nacional, elegida exclusivamente para elaborar la nueva Constitución. Ahí deberán plantearse el tema de la duración del mandato presidencial, así como todos los demás problemas constitucionales. No me parece que exista otra fórmula más democrática y conveniente para el Brasil de hoy.

¿Usted cree que habría comprensión de parte de los militares para una salida de este tipo?

—Creo que sí. Entiendo que una constituyente simultánea con una elección directa y la reducción del mandato presidencial *a priori*, podría generar una crisis militar. Sin embargo, no pienso que ello vaya a suceder con la convocatoria de una constituyente este año o, como máximo, a principios del año que viene. Una elección por voto universal se desarrollaría en las actuales circunstancias con candidatos vetados. Sin embargo, no habría condiciones para vetar candidatos si la constituyente fuera elegida, como máximo, a principios de 1986 y fuera ella la que convocara con su legitimidad, a una elección presidencial.

Las elecciones ya previstas para noviembre de 1986 (para gobernadores y diputados) se realizarían de acuerdo con la nueva Constitución. Y en caso que la constituyente lo determine así, se llevarían a cabo simultáneamente con la elección presidencial. Cuando el poder popular se fortalece y es autónomo —y eso sucedería después que el país tuviera una nueva Constitución elaborada conforme a lo que expresé— es imposible que puedan imponerse vetos militares.



El nuevo papel de los militares

René Dreifuss*

El nuevo cuadro político brasileño provocó un debate en los medios políticos, académicos, periodísticos y aun militares sobre un nuevo papel para las Fuerzas Armadas. Pero tal vez no se trate apenas de buscar nuevas concepciones, sino principalmente de recuperar viejos conceptos y funciones específicas que fueron abandonados o disfuncionados por los mandos militares a lo largo de estos últimos 20 años.

Empezaremos por una reflexión sobre los papeles cuya permanencia está siendo cuestionada. Es necesario incluso repensar las aberraciones conceptuales de la institución militar, en particular aquellas vinculadas a la concepción de que existe un "enemigo común" en estado latente. Ello implica también la evaluación de los desvíos funcionales de la institución, o sea el desmantelamiento de la estructura de organismos, servicios y objetivos de información y contrainformación, en fin, del aparato

El cambio de gobierno crea condiciones para rescatar funciones que no fueron cumplidas por las Fuerzas Armadas y devolver a la sociedad la última palabra sobre seguridad nacional

represivo que se justificó al estigmatizar diabólicamente a un sector de la ciudadanía. Pero básicamente se trata de cuestionar el autoconcedido "derecho" al golpe que los militares se asignaron a lo largo de los años.

Entre los derechos de la sociedad civil está el de no ser golpeada impunemente por quien eventualmente tiene el

poder de las armas. La sociedad civil desarmada no puede vivir a merced de decisiones tomadas por grupos o "mandos" militares. La ciudadanía no puede exponerse a acciones originadas en la interpretación de escenarios políticos hecha dentro de los cuarteles, sin su sanción. Los ciudadanos desarmados deben tener el derecho y la autoridad de crear dentro del ejército, la marina y

* Político, profesor adjunto de la Universidad Federal de Minas Gerais, investigador visitante de la COPPE/UFRJ y autor del libro "1964, la conquista del Estado".

la aeronáutica mecanismos capaces de neutralizar y erradicar cualquier tipo de tentación golpista. Para lograr esos objetivos es necesario una profunda reforma interna de las Fuerzas Armadas, así como de los procedimientos y normas de control sobre su actuación.

Si esas reformas no surgen por iniciativa propia de los oficiales ellas deben y pueden ser exigidas por los civiles como una legítima reivindicación de la sociedad. En ese caso será una exigencia fundada en el principio de que dentro de esta sociedad todos son iguales ante la ley; el poder emana del pueblo y por lo tanto la "corporación" (o "mandos y grupos" dentro de ésta) no pueden siquiera plantearse el uso de la fuerza que les fue confiada para imponer su voluntad sobre los demás.

En la futura asamblea constituyente que esperamos sea formada brevemente, uno de los primeros puntos a discutirse debe ser la prohibición constitucional del golpe de estado y que quienes lo insuflén, instiguen, planeen, ejecuten o colaboren en él sean debidamente juzgados. Es evidente que ese dispositivo constitucional por sí solo no será capaz de impedir aventuras inconstitucionales. La ley no es una garantía absoluta, pero en el momento en que ese dispositivo sea incluido en el temario de las discusiones de la próxima constitución nacional, amplios debates sobre el tema han de generar una reflexión pública que contribuirá, por sí sola, al proceso de reeducación de la oficialidad.

El vicio de la ruptura institucional y la violencia contra la ciudadanía desarmada no pueden ser encarados como "deber de conciencia" y actos políticos legítimos que deben ser implementados en circunstancias "excepcionales". Se debe cuestionar radicalmente el derecho autoconcedido de intervención. El golpe de estado debe ser encarado en sí mismo como una monstruosidad política y no un acto juzgado según la oportunidad. O sea, el golpe de estado no puede ser asimilado por las fuerzas ar-

"La corporación no puede plantearse el uso de la fuerza para imponer su voluntad"



madas como recurso político *latu senso* y del cual, por añadidura, los militares tienen la exclusividad.

El monopolio de la fuerza —concepto tan difundido en la teoría política— pasó a ser resumido y puesto en práctica bajo esta óptica perversa como una especie de privilegio y deber militar. Así, el golpe de estado es dado cuando las circunstancias "lo exigen". Esto es, en realidad, la subversión del concepto de monopolio de la fuerza. Ese monopolio deja de ser prerrogativa del Estado para convertirse en recurso de la "corporación", por el uso discriminatorio de los "mandos" enquistados en el Estado, con autonomía *de derecho y de hecho* para destrozar la ley y anteponerse a la ciudadanía.

Definiciones en la Constitución

Al ser incluida en el texto constitucional la prohibición expresa de golpes de estado y al poner en marcha los mecanismos de control de la institución militar, ese ítem pasa a ser fundamental en el proceso de formación y capacitación de un oficial. El dispositivo constitucional será un punto de referencia mayor. Desde su ingreso a la carrera como cadete, el oficial pasará a concebir su función específica como la componente militar del poder público y civil, y no como un poder autónomo. Como miembros de una institución del Estado los oficiales serán educados pero jamás se plantearán objetivos políticos, porque ello estará fuera de sus funciones y atribuciones. Pero, en tanto que individuos y ciudadanos los miembros de esa institución tendrán preocupaciones y posiciones políticas legítimas, inherentes al pluralismo ideológico, cultural y vivencial de la sociedad. La institución militar en la que funciona una parte de la sociedad no es representativa de ésta, sea cultural, regional, social y, mucho menos, políticamente. Para ello existen el Congreso y otros organismos y entidades asociativas. El oficial deberá ser formado para entender que la institución militar no puede actuar como "corporación", o sea con prerrogativas para embestir contra un sector de la sociedad, contra sus instituciones o contra la comunidad como un todo, a través de los instrumentos específicos de función (las armas).

De nada valen los argumentos de que las Fuerzas Armadas han avanzado siempre sobre la sociedad atendiendo los llamados del "pueblo", citando a las mujeres que salieron a la calle en las manifestaciones "con Dios, por la familia y la propiedad" (las *marchadeiras*) y otras movilizaciones supuestamente populares que, anticipándose al golpe de estado de 1964 lo habrían legitimado.

No se trata solo del desconocimiento del último grado de manipulación y del verdadero trabajo de ingeniería política que fue desarrollado entre bambalinas para organizar esas manifestaciones

No se trata solo del hecho que esas manifestaciones no tuvieron carácter de plebiscito ni el aval de la nación para desencadenar un golpe de estado aunque así fuesen interpretadas por los golpistas, desconociendo la ley.

Ese razonamiento fue definitivamente sepultado durante la campaña por las elecciones presidenciales (*Directas Já*), que llevó a la calle a 10 millones de brasileños y a favor de la cual se pronunció 90% de la población. En esa campaña apareció bastante claro el deseo profundo del pueblo —este sí de carácter plebiscitario— de poner fin a 20 años de arbitrio y prepotencia. Pero por eso las Fuerzas Armadas se pronunciaron a favor de la campaña o encaminaron el proceso de elecciones presidenciales por voto universal, dejando al descubierto dos pesos y dos medidas.

Los mandos militares no pueden ser encarados como cargos o funciones políticas sino técnicas. La creación de un Ministerio de Defensa que neutralice las ilegítimas aspiraciones políticas de las Fuerzas Armadas, que anule la visión "corporativa" de la institución militar del Estado e impida que mandos militares de carácter técnico se conviertan en "mandos" personalizados y de peso político, es una necesidad urgente sentida por amplios sectores sociales y políticos.

Del propio uso de los términos "corporación" y "mando" para designar respectivamente a una instancia del Estado y un cargo público, ya surge la impresión de que lidiamos con lealtades menores, que se sobreponen en su función organizativa al propio concepto de ciudadanía. Es en este contexto que los "mandos" conculcan la libertad de expresión, atribuyéndose la función de portavoces de la "corporación" para asuntos que escapan al campo bélico, es decir, para asuntos políticos, sociales, ideológicos, religiosos, económicos y culturales.

Al hacerlo, los "mandos" desconocen el derecho a la divergencia en todos esos grupos de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas, que están limitados de hacer uso de sus derechos como ciudadanos. Los mandos, al negar las individualidades y anular el pluralismo político de la institución, apoyados para ello en una base político-ideológica excluyente, reniegan de la pluralidad inherente a la sociedad. Y al hacerlo, afirman y confirman la existencia de una jerarquía politizada e identificada selectivamente con un modelo político, social y económico determinado. La jerarquía se presenta así sólidamente anclada en una autoimagen de razonamiento "impoluto", básicamente "sano" en sentido de vida "natural" y "obviamente cierto". Solo así es posible que los mandos de una institución pública como las Fuerzas Armadas, transformados en "mandos" de una "corporación", sean capaces de estigmatizar conciudadanos —que podrían ser sus adversarios políticos o ideológicos

a título individual— en enemigos de la patria, del Estado y en consecuencia, blancos de la institución militar.

Escenarios político-militares

La usurpación del espacio político por las Fuerzas Armadas ha sido justificada como misión de salvación, de la que el militar estaría investido y motivada por el sentimiento del derecho de hacer política como "corporación", pero siempre a través de los "mandos" y con los recursos propios de una institución preparada para lidiar con el conflicto bélico. A partir de esa situación los mandos militares ciertamente visualizan escenarios socio-políticos como escenarios político-estratégicos, o sea objeto de acción estratégica. En este pasaje del escenario socio-político al escenario político-militar se encuentra el nudo gordiano de la formación de las Fuerzas Armadas. Y esa deformación se transformó reiteradas veces en el componente militar de una maniobra política que terminó en un golpe de estado, originando posteriormente un poder militar autónomo o tutelar. La lógica de las ar-



Un Ministerio de Defensa podría neutralizar las aspiraciones políticas ilegítimas de los militares

mas, de la organización y de la mente militar, como ley de hierro de la violencia, se impone sobre el cuadro político y civil; la dictadura emana de la transgresión primordial y el despotismo se impone.

La educación militar

La educación y formación de los oficiales es, por todo lo que ha sido señalado, otro aspecto crucial que debe ser incorporado al análisis de las nuevas perspectivas. La idea de golpe de estado debe ser erradicada de las reflexiones del militar en cuanto funcionario público armado.



Agencia O. Globo

El golpe de 1964: después de 20 años, se impone una reorientación y redistribución de los recursos militares

La noción de que un golpe de estado es un dato de la política nacional y las discusiones de los militares en torno del tema sintetizadas en la frase estereotipada "volvería a hacer lo mismo en las condiciones de la época", reflejan una falla gravísima en la formación de la oficialidad y en el funcionamiento de la institución. Este es uno de los puntos en que la estructura antigua debe ser modificada.

La negación de la alternativa golpista —una virtual prohibición para que salidas inconstitucionales encuentren acogida en las Fuerzas Armadas— debe tener en la formación de la oficialidad un peso aún mayor que las nociones de disciplina y obediencia. El oficial debe adquirir una "voz de mando moral" que le impida contemplar la posibilidad de un golpe o participar en las discusiones sobre una eventual solución de fuerza para problemas institucionales, políticos o socioeconómicos. Esta es por cierto una tarea educativa lenta y de medio plazo y, por lo tanto, una responsabilidad fundamental para el Congreso (éste sí representativo de las aspiraciones nacionales), para las propias Fuerzas Armadas y para su comandante en jefe, el pre-

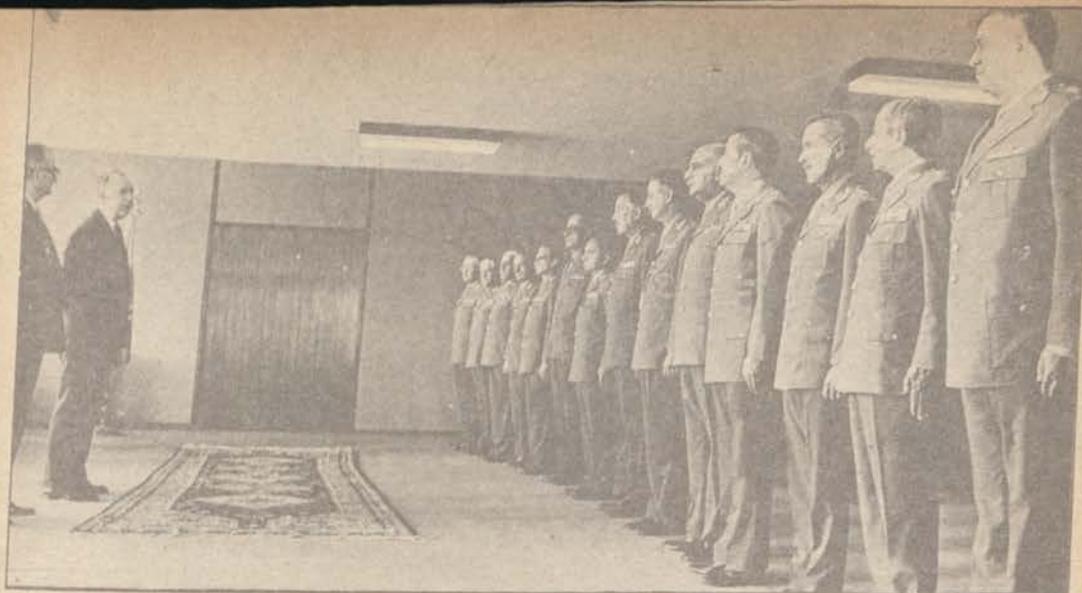
sidente de la República, quien deberá encaminar en forma adecuada al comienzo de su gestión.

Es cada vez más clara la necesidad imperiosa de deflagrar un amplio y profundo proceso de reeducación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en todos los niveles. Ello debe ser instrumentado a través de una reformulación de las instancias educativas y formativas del oficial. Tanto los programas de estudio como el sistema de valores y normas de la institución que inciden en la capacitación, en el desempeño, en el acceso a los cuadros superiores y en la postura de los militares deben ser modificados. Es necesario también revisar la conciencia toda la legislación militar actual que rigió la vida profesional de las Fuerzas Armadas. Ello incluye un análisis criterioso de las normas, atribuciones del Consejo de Justificación y Consejo de Disciplina, del Estatuto de los Militares, del Código Penal Militar y del Código de Proceso Militar y Reglamentos Disciplinarios, la Ley de Ascensos y la Legislación de las Escuelas Militares, a todos los niveles.

Es necesario reflexionar incluso sobre algunos de los puntos básicos en los cuales reposan las distorsiones funcionales de las Fuerzas Armadas en el plan nacional. La desatinada noción de "seguridad" (que confundió la dimensión nacional, interna y militar) fue convertida en uno de los principios básicos que orientan la conducta y la mente militar. El compromiso de la oficialidad con la seguridad interna está relacionado con varios factores: la formulación estratégica y la ubicación de las Fuerzas Armadas en los escenarios regional y mundial; la percepción militar existente de lo que es un proceso político y cuáles son los límites del pluralismo que la institución es capaz de soportar en los moldes de su actual matriz formativa. En el plan estratégico es necesario formular una nueva concepción, capaz de sustentar la capacidad de Brasil de producir iniciativas geopolíticas eficaces y acordes con sus necesidades de desarrollo y con sus responsabilidades diplomáticas. Esa nueva concepción exigirá la reorientación y redistribución de los recursos militares entre las tres armas y la rearticulación espacial, principalmente del ejército, cuya principal preocupación ha sido la neutralización del "enemigo interno".

¿Quién es el enemigo?

Antes que nada las Fuerzas Armadas tienen que definir al enemigo y las variables que lo potencializan, así como sus vulnerabilidades. Solo entonces se podrá pensar en términos de operacionalidad de acción estratégica. Como ejército de defensa territorial es legítima la definición y caracterización del enemigo, cuando se trata de tornar operativa una posición asumida a nivel político por el gobierno.



17/4/73: Emilio Garrastazu Médici recibe en el Palacio del Planalto a los nuevos generales: uno de los periodos más duros del autoritarismo

de la nación contra un agresor.

Sin embargo, en los últimos años al aplicar este razonamiento en el plano interno es que las Fuerzas Armadas fueron obligadas a tomar partido en las divergencias políticas de la ciudadanía. Y al oponerse a algún sector de la sociedad, lo concibieron como enemigo y por lo tanto, objeto de su acción estratégica (violenta). El escenario político, en razón de la lógica militar, se convirtió así en escenario militar en el que las Fuerzas Armadas se tornaron guardias pretorianas y tutelares.

Con el pasar de los años, y en la lógica insana de los bloques, la Unión Soviética fue definida como el enemigo, y caracterizada como amenaza principal. En función de esa definición, se modelaron las mentes de los oficiales y se trató de adecuar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Pero era fácil constatar la ineficacia de las Fuerzas Armadas de la periferia del bloque, dada su falta total de posibilidades de participación efectiva en conflictos de cierto porte en el plano de las superpotencias, y de sustentar iniciativas político-estratégicas que por ventura los gobiernos trataran de llevar adelante para asegurar la autonomía del país.

Ello dejó al descubierto otro problema. La autojustificación de la dimensión tradicional de las Fuerzas Armadas estaba siendo minada. Había un enemigo, pero no existía capacidad estratégica para enfrentarlo ni un escenario posible para esas fuerzas.

Pero al traer al enemigo de "fuera para dentro" de nuestras fronteras, por un malabarismo discursivo —y la variable pasó a ser entonces el "Movimiento Comunista Internacional" (MIC)— fue posible crear escenarios de enfrentamiento y actua-

ción, justificando la acción de las Fuerzas Armadas. También fue posible "hacer la guerra" con los limitados efectivos locales. La noción de seguridad interna tan de moda fue la intermediaria en la sustitución de los tradicionales escenarios externos por internos. Ahora, había un enemigo sobre el cual actuar. En esta lógica militar, la propia sociedad pasó a ser dividida entre amigos y enemigos.

La inseguridad nacional

La reformulación antigolpista de las Fuerzas Armadas exige, por lo tanto, la eliminación de la seguridad interna como foco referencial de la lógica militar y de su radio de acción. La seguridad interna debe ser colocada en el lugar que le corresponde y que es el Ministerio de Justicia. En un sistema donde existe la amenaza de que conflictos políticos y crisis institucionales puedan ser dirimidos por intervención militar, se vive ahí sí, en un estado de total inseguridad nacional.

Por otra parte esta confusión entre la seguridad interna y la seguridad nacional merece un análisis más detallado. La seguridad de la nación no es otra cosa sino el bienestar y la tranquilidad de la población y no solo en el plano político institucional. Para tener una nación segura hay que satisfacer las demandas sociales de alimentación, de servicios médicos, de habitación, vestuario, educación, desarrollo científico y esparcimiento, en condiciones dignas, así como la inmaculada probidad en la conducción de la cosa pública, lo que ningún régimen militar logró llevar a buen término.

Esas son las verdaderas razones de la seguridad nacional, desvinculadas *a priori* de la necesidad de



El ciudadano puede concluir que las trasnacionales son más nocivas a la seguridad nacional

imposición o tutela militar. La seguridad de la nación pasa asimismo por el enfrentamiento político abierto, por la confrontación de ideas, por la libre organización de los ciudadanos de acuerdo con sus convicciones y sus propuestas de cómo administrar y estructurar la sociedad. Las Fuerzas Armadas como institución o como corporación, nada tienen que decir.

El punto básico pasa a ser, por lo tanto, el grado, la calidad y el sentido de la seguridad a que el ciudadano aspira. La ciudadanía decide lo que desea y cómo esas cuestión será encaminada. Cabe a los ciudadanos decidir qué tipo de seguridad desean. Por eso en el proceso de la elección de la constituyente —que figura en los compromisos del gobierno brasileño actual— es necesario desatar un gran debate nacional sobre la noción y el problema de la seguridad.

Redimensionar las Fuerzas Armadas

En el momento en que el Brasil pretende iniciar una democratización de sus actividades políticas y de su funcionamiento institucional, la ciudadanía puede llegar a la conclusión de que la miseria generalizada (más de 60% de la población), la vigencia de estructuras productivas y sociales arcaicas, la falta de respeto a la ley y a los derechos elementales de la persona humana, son amenazas o agresiones de primera magnitud a nuestra seguridad nacional. Y más aún, que el altísimo índice de inseguridad, de deficiencia alimentaria, sanitaria, habitacional, ambiental, educacional, cultural y científica del Brasil no tiene nada que ver con el Movimiento Comunista Internacional. O concluir que las empresas o los grupos trasnacionales son más nocivos para la seguridad de la población que los "enemigos" impuestos durante estos 20 años.

Circunstancias muy específicas hacen que, fe-

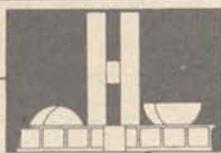
lizmente, Brasil viva en paz con sus vecinos. Ante la ausencia objetiva de amenazas fronterizas la oficialidad acaba siendo puesta a prueba en los cursos y en el campo de maniobras, en la rutina de la vida y en los cuarteles y en la máquina burocrática militar y estatal. Es justamente esa rutina y la falta de objetivos concretos que llevan a las Fuerzas Armadas a tener tiempo y capacidad ociosa para adquirir una proyección inusitada en las actividades del gobierno y de la administración pública.

Para interrumpir ese proceso, tal vez sea necesario redimensionar las Fuerzas Armadas y disminuir su peso específico. Habría que establecer un número de efectivos compatible con sus funciones de defensa territorial, en una nación como Brasil, de dimensiones continentales y sin problemas fronterizos desde comienzos del siglo. Además de una reformulación estratégica adecuada a la defensa territorial se hace necesario redistribuir y reordenar a las Fuerzas Armadas, desplazándolas de los grandes centros urbanos hacia las áreas periféricas. Si la función debe ser en la frontera, el servicio militar también.

Pero dentro de esas perspectivas surgen otros problemas.

Tal vez sea necesario pensar en la adaptación de modelos militares que exijan y destaquen la participación social en las Fuerzas Armadas a través del servicio militar prestado en áreas de colonización agrícola y en servicios de utilidad pública, donde paralelamente al trabajo productivo, el ciudadano pueda ser habilitado en el manejo de las armas. Y más aún, se podría tal vez pensar en una fuerza armada de civiles, que participen ocasionalmente en tareas militares dirigidos en su formación técnico-militar por un cuerpo de oficiales de carrera.

Una ventaja de ese sistema es la pluralidad, ya que las Fuerzas Armadas pasan a estar integradas por ciudadanos que van y vuelven a sus casas y a sus tareas normales. Al impedir la segregación corporativa, la formación del *esprit de corps*, y reforzando el *esprit de nation* este sistema traería aparejado el remedio eficaz para ímpetus golpistas. Al eliminar las posibilidades de crear tendencias corporativistas o una visión compartimentada de las cuestiones política, económica, social, cultural, científica, etcétera, el nuevo sistema acabaría con la tropa sin conciencia política, siempre disponible para los generales golpistas. En una reforma de este porte desaparecería la dicotomía entre uniformados y civiles y los comandantes abandonarían la peligrosa idea de corporación, dejando de alimentar conflictos entre uno y otro sector de la población. Esas nuevas fuerzas armadas no tendrían dificultades para asimilar la deseable pluralidad política de una sociedad abierta, donde la defensa, como se sabe, es una tarea de todos y no solo de algunos.



La encrucijada económica

Ladislau Dowbor

Tras veinte años de autoritarismo otro ciclo militar de los varios que dominaron el continente latinoamericano en las últimas décadas llega al fin. Brasil comenzó 1985 bajo el signo de la renovación.

Pero la primera comprobación que se impone es que los cambios fueron significativos aunque no de fondo. Tras algunas manifestaciones de alegría se comprueba que muchas de las figuras del nuevo gobierno ya son viejas conocidas, como el propio Presidente en ejercicio, José Sarney (que viene de una fulminante carrera política durante los años de régimen militar). La deuda externa está en torno de los cien mil millones de dólares —800 dólares per cápita— reconocida por el nuevo gobierno antes incluso de la toma de mando.

Y más, el país enfrenta este hecho terrible: 10% de su población consume 50% de todo lo que se produce, un nivel de concentración del ingreso

Sumergido en la peor crisis de su historia, Brasil enfrenta ahora la necesidad de democratizar su economía cerrada y elitista

comparable al de Haití, Nepal u Honduras. Entre 1970 y 1980, el 5% más rico de la población rural aumentó su participación en el ingreso de 23,7 a 44,2%, un aumento de 86,5% en diez años. Mientras tanto, la mitad más pobre de la población rural disminuía su participación en el ingreso nacional de 33,5% para menos de 15%.

Las consecuencias de la centralización

Durante los años de autoritarismo se fortaleció significativamente el poder del gobierno central (federal), en desmedro del buen funcionamiento y del equilibrio de la federación. La devolución del poder a los gobiernos locales —reivindicación de amplios sectores de la población— enfrenta, como era previsible, toda clase de resistencias de la máquina tecnocrática que en estos años se acostumbró a mandar sin consultar.

Con decisiones centralizadas se promovieron

con relativa facilidad proyectos como la represa de Itaipú (una empresa binacional, con Paraguay) o la central nuclear de Angra dos Reis, sin mencionar el gigantesco aunque discreto programa de fabricación de armamento.

Como es fácil imaginar, un gobierno de estas características no creó condiciones para el desarrollo de millones de pequeños proyectos necesarios a la comunidad y que constituyen el tejido de sustentación de la economía brasileña.

Uno de los más importantes obstáculos para poder llevar adelante las transformaciones estructurales que el Brasil necesita está representado en los intereses extranjeros organizados dentro del país. No debe olvidarse que la esencia del "milagro" brasileño fue la penetración de empresas transnacionales en las áreas de producción y servicios, y que el modelo militar aseguró la organización de grandes intereses de grupos económicos nacionales en torno a los grupos extranjeros.

Brasil concentra hoy casi 25% de la producción industrial del Tercer Mundo y constituye una potencia económica. Pero debe recordarse —aunque en Brasil muchos lo han olvidado— que la producción industrial del conjunto de los países subdesarrollados (incluyendo a gigantes como el propio Brasil, India, Argentina, México, Corea del Sur, Indonesia, Taiwan, etcétera) no llega al nivel de la producción industrial de un único país del Norte, Alemania Federal.

Con estos datos en la mano es imposible ignorar quién manda realmente en la economía internacional o negar la profunda integración de la economía brasileña moderna con los intereses de las empresas transnacionales, que reduce enormemente el espacio de maniobra y de decisión del nuevo gobierno instalado en Brasilia.

La máquina económica transnacional implantada en Brasil —los bancos, la electrónica, las industrias farmacéutica y automovilística— constituye una extensión de los aparatos productivos de los países ricos. Responde, pues, a padrones de producción y de consumo de una población con una renta *per cápita* entre 15 y 20 veces más elevada que la de la mayor parte de la población brasileña. Por eso es que toda la máquina económica montada en Brasil depende vitalmente de la orientación del régimen instalado en 1964 y ahora presiona para que esa política sea mantenida. Pregúntesele a la *Ford* o a la *General Motors*, fuertemente interesadas en el proyecto brasileño de producción de alcohol a partir de caña de azúcar (para usar como sustituto de la gasolina) cómo reaccionarían frente a una política oficial que impulsara para el Nordeste una agricultura de producción de alimentos con salarios rurales más elevados, en detrimento del cultivo de la caña.

Otra limitación del poder de decisión del nuevo

gobierno proviene de los intereses extranjeros propiamente dichos. Se trata sin duda, en buena medida, de intereses cercanos a los grupos transnacionales instalados en Brasil, pero no idénticos. Los millones de depositantes y las centenas de organismos financieros extranjeros que se preocupan por la deuda brasileña tienen más tendencia a impulsar a través del gobierno norteamericano y del FMI una política que responda a sus intereses de corto plazo, que una que apunte a lograr el equilibrio económico de las empresas instaladas en Brasil.

Reformas postergadas

En las últimas cuatro décadas, los sucesivos gobiernos fueron postergando las reformas estructurales. Durante ese periodo, las condiciones de producción de bienes y servicios evolucionaron significativamente. No hay ningún mérito destacado en ello, ya que fue llevado a cabo a través de grupos extranjeros. Los países del Norte exportan unos 100 mil millones de dólares en bienes de producción para los países subdesarrollados, y venden esos productos —a veces fábricas enteras— hasta en países que no los desean. El mérito está en adaptar esa tecnología a las condiciones reales del país y hacer que la economía responda efectivamente a las necesidades de la población. Ello implica impulsar las reformas estructurales necesarias para asegurar la asimilación productiva de los aportes venidos del exterior.

Estas reformas no fueron llevadas a cabo. Hace cuarenta años que se están aplicando nuevas técnicas, sin las correspondientes reformas, y así Brasil desarrolló un aparato productivo que ya no cabe dentro de su camisa institucional.

¿Ejemplos? Una importante capacidad de producción de equipos agrícolas, y casi 300 millones de hectáreas de tierra improductiva, además de 10 a 15 millones de trabajadores rurales parados, porque algunas decenas de miles de propietarios les niegan participación en la producción. (Brasil cultiva menos de 50 millones de hectáreas de tierra).

El aparato industrial, que se desarrolló en función de una élite de gran poder adquisitivo, se encuentra estrangulado, preso entre la distribución del ingreso que le impediría colocar los productos de lujo, y el mantenimiento de la situación que limita su mercado a algunos millones de consumidores.

En el Nordeste, la población fue expulsada de las áreas fértiles. El último censo agropecuario constata la producción, en 5 estados del Nordeste, de 45 millones de toneladas de caña contra un millón de toneladas de mandioca, el principal producto alimenticio local. De esa manera, el Nordeste exporta alcohol e importa alimentos.

El desafío de la Nueva República

La Nueva República enfrenta básicamente cinco grupos de problemas: inadecuados instrumentos de intervención del Estado en la economía, deformación de las reglas de juego en el área de la producción de bienes y servicios, agotamiento del ciclo de desarrollo generado en torno al automóvil y los electrodomésticos, profundización de los desequilibrios regionales y un *impasse* en las relaciones económicas con el exterior.

En Brasil no existe ni la planificación de los países socialistas ni la participación democrática de los países industrializados: la apertura llegó, cuando mucho, a algunos sectores de la clase media. El resultado es la ausencia de instrumentos de distribución racional de recursos. Los gigantescos proyectos aprobados son resultado de la presión de los contratistas, de los grupos financieros y de las empresas multinacionales, sin que haya ningún mecanismo capaz de conciliar los intereses privados y el interés público.

Una de las primeras iniciativas en esa área será la de organizar la información capaz de orientar las decisiones de política económica del gobierno. El Banco Mundial relata "el triste cuadro del modo de realización de las cuentas brasileñas: no hay información directa disponible sobre inversiones, y las estimaciones provienen de la contabilidad de algunas grandes agencias y de cifras preliminares sobre importaciones. El consumo es una cifra residual; el producto interno bruto, de acuerdo a lo informado, no es producto sino ingreso; los términos de intercambio externo implícitos no son proporcionados (y no pueden deducirse); y no hay contabilidad suficiente por sectores públicos". (*The World Bank, Long Term Changes in Economic Structure*, Washington, 1979, p. 5).

Descentralizar las decisiones

No hay posibilidad de reducir gradualmente el desorden generalizado en la utilización de los recursos públicos y de los préstamos extranjeros si no se organiza su rigurosa contabilización y la evaluación sistemática de sus efectos económicos.

Por otro lado, el gobierno deberá emprender la profunda descentralización de la gestión económica del país, atribuyendo amplia iniciativa a los municipios y a las diferentes regiones sobre las realizaciones que puedan ser decididas localmente. Esta descentralización es indispensable no solo para devolver un mínimo de racionalidad a la gestión económica del Estado, sino para modificar las actitudes frente al desarrollo.

Finalmente, el gobierno deberá promover modificaciones profundas a la política tributaria para que los municipios y las regiones tengan los re-



"Hay de 10 a 15 millones de trabajadores desocupados por culpa de algunas decenas de miles de propietarios"

curso para sus propias iniciativas.

La gran alternativa actual no es entre estatización y privatización sino entre el gigantismo del complejo constituido por el gobierno central y los grandes grupos económicos, financieros, industriales y agrícolas, y las iniciativas descentralizadas tanto públicas como privadas de los municipios y de la pequeña empresa.

El servilismo de los gobiernos militares a las presiones de las grandes empresas contratistas y transnacionales, determinó gigantescas transferencias de recursos del Estado hacia particulares, bajo la forma de subvenciones simples, de préstamos subvencionados, de exenciones fiscales o de garantías públicas a préstamos exteriores. Sectores enteros se acostumbraron a evitar cualquier racionalidad económica gracias al amplio apoyo financiero logrado de esa manera.

Muchos de ellos se encuentran casi totalmente monopolizados, con tres o cuatro empresas por sector que se permiten controlar los mercados y bloquear el surgimiento de nuevas empresas. El sistema de precios hoy representa menos el valor de un producto y el esfuerzo de quien lo produjo, que la capacidad de control de los circuitos comerciales y financieros de determinados grupos. El resultado, en términos económicos, es simple pero desastroso: la remuneración no corresponde a la participación real en el esfuerzo productivo del país.

Reducción del sistema de subvenciones

Cuando un sistema capitalista deja de remunerar el esfuerzo productivo, el conjunto de las reglas de juego tiene que ser revisado. Ya no vale la pena favorecer al capital para que pueda invertir. Una mayor concentración de la riqueza se traduce en actividades especulativas que desorganizan la economía y, apenas marginalmente, se canaliza hacia nuevas unidades de producción.

Las líneas de acción que deberían ser adoptadas son claras: elevados impuestos a la tierra impro-

ductiva, al capital inmovilizado, liquidación o transformación de los "depósitos" de capitales adormecidos (conformes, títulos y otros oasis financieros improductivos), revisión drástica del conjunto del sistema de subvenciones y exenciones, y una eficaz redistribución del ingreso, favoreciendo al trabajador de las áreas productivas destinadas al mercado interno.

La reducción de la inflación es normalmente el resultado de un conjunto de acciones: todas las alternativas económicas terminan reflejándose en los precios, y de manera general es insuficiente la intervención puramente administrativa y de control. El gobierno deberá actuar sobre las causas en el área del Estado: utilización irresponsable del presupuesto monetario, endeudamiento interno y externo, política de subvenciones a sectores privados, relaciones entre el Banco Central y los bancos privados. Y deberá intervenir sobre una serie de elementos inflacionarios del área privada: tasa de intereses, intermediarios financieros y comerciales, monopolización de ciertos sectores, orientación de la economía para la exportación y otros.

No es políticamente viable confiscar la riqueza de quien la adquirió por lo menos dentro del actual equilibrio de fuerzas. Lo que sí es viable es modificar la participación de cada grupo social en el nuevo ingreso producido, favoreciendo a los productores y a los sectores hasta ahora explotados.

Responder a las necesidades básicas de la población no exige divisas. Los productos básicos utilizan tecnologías ya dominadas por el país, y el parque productivo de bienes de capital es ampliamente suficiente para dinamizar ese sector industrial.

La definición de un nuevo eje de desarrollo podría adoptar la siguiente forma:

- en el área industrial, prioridad a los bienes de consumo popular, con fuerte impulso a la descentralización de actividades;

- en el área agrícola, prioridad para los productos alimenticios y reforma agraria;

- en el área de bienes de producción, prioridad para la fabricación de equipamiento agrícola adecuado a la pequeña y mediana propiedad, para asegurar la base técnica de la reforma agraria;

- a nivel de la infraestructura, aprovechar los gigantescos gastos que ya fueron realizados en el área hidroeléctrica y desarrollar un amplio programa de infraestructuras de transporte electrificado. La creación de una amplia y moderna red ferroviaria nacional, por ejemplo, permitiría reducir radicalmente los costos de transporte, ampliar la frontera agrícola y dinamizar el conjunto del parque siderúrgico, metalúrgico y mecánico ya instalado.

El equilibrio regional no pasa tanto por los subsidios y proyectos de desarrollo que ayudan a los latifundistas y a las grandes empresas a colocar di-

nero en San Pablo, sino por dos medidas fundamentales: primero, la reforma agraria, destinada a asentar a las poblaciones y tornar productiva la tierra, y segundo, por la descentralización, que permite la multiplicación de las unidades industriales productivas y de servicios en torno a la dinamización agraria en cada municipio.

Las relaciones con el exterior

La etapa que se inicia exige también una nueva definición de las relaciones económicas con el exterior, y en particular con los países del Norte. El primer paso de esa redefinición es precisamente la reorientación del aparato productivo interno y no un puñetazo en la mesa en Washington, política en la que varios gobiernos fracasaron. Al reorientar la industria hacia bienes de primera necesidad, Brasil reducirá drásticamente la dependencia (y costos) vinculados a la transferencia de tecnología; al aumentar la producción agrícola alimenticia, reducirá los gastos tan frecuentemente olvidados de la importación de alimentos; al dar prioridad a la pequeña y mediana propiedad agrícola, reducirá la dependencia de una mecanización agrícola excesivamente sofisticada y dependiente de los grandes fabricantes internacionales; al optar por el transporte ferroviario movido por hidroelectricidad, movilizará sectores ya maduros tecnológicamente pero subutilizados y reducirá gradualmente la dependencia respecto de la industria automovilística transnacional y de la importación de petróleo, además de prepararse para la fase post-petróleo que los países desarrollados ya estudian activamente hace más de una década.

Los militares no tomaron el poder solos. Fueron presionados, sirviendo como instrumento de intereses sólidamente organizados. Ahora los militares salen de escena, por lo menos parcialmente, pero los intereses que los pusieron en el poder se mantienen y buscan hacer sentir su presión.

Frente a esas fuerzas, la oposición está gradualmente reconstituyendo mecanismos democráticos. Pero es evidente que la democratización que acompaña el reflujo de los militares solo se consolidará si hubiera una amplia organización de la participación política y económica de todas las capas de la población, para contrarrestar la fuerza de los grupos privilegiados.

En estas condiciones, las transformaciones económicas esperadas solo pueden avanzar junto a las transformaciones políticas. Perder la iniciativa de las transformaciones económicas privará al gobierno del apoyo necesario para las transformaciones políticas, en tanto las propias transformaciones económicas dependen de una firme profundización y refuerzo de los mecanismos democráticos. ●

Africa

Camerún

Las tensiones dentro del gobierno Biya

Luego de dos años y medio en el poder y pese a las reformas liberales que promovió, el presidente Paul Biya todavía no logró eliminar totalmente la influencia de su antecesor, Ahmadou Ahidjo

Carlos Castilbo

En abril de 1984, luego de un fracasado intento de golpe de estado, que dejó un saldo de 500 muertos, el presidente Paul Biya anunció que la derrota de los conspiradores apoyados por el ex presidente Ahmadou Ahidjo marcaba una ruptura total con el régimen dictatorial que imperó en la República del Camerún durante 22 años. Un año después, siguen sin concretarse las grandes esperanzas cifradas por los partidos de izquierda. El esfuerzo del gobierno por crear una imagen reformista chocó con el mantenimiento de políticos del antiguo régimen en cargos oficia-

J. C. Francolon / Gamma



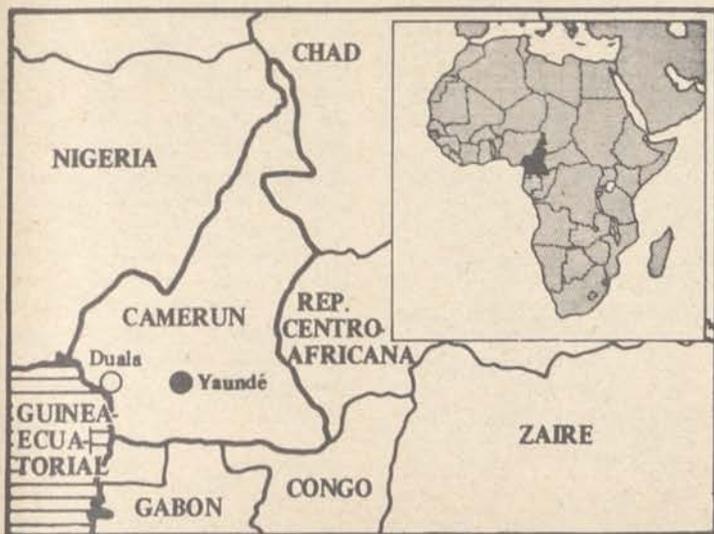
Biya: ruptura total con el régimen dictatorial

les y con la continuidad de viejas prácticas económicas. El resultado generó escepticismo en la mayor parte de la población, la que esperaba mucho más del presidente que llegó sorpresivamente al poder en 1982 (ver *Guía del Tercer Mundo 84/85*, p. 70).

Paul Biya, 51 años, un abogado católico que pertenece al grupo étnico *beti*, fue un discreto primer ministro durante los últimos años del gobierno de Ahmadou Ahidjo. En 1982, Ahidjo —un político ambicioso de origen islámico, nacido al norte de Camerún— renunció sorpresivamente a la presidencia sin que hasta el momento hayan sido aclarados los motivos de su alejamiento del poder luego de dos décadas de autoritarismo. En forma oficial, Ahidjo calificó su retiro como un paso inicial para la normalización institucional del país, pero la hipótesis más probable es que haya sido consecuencia de un examen médico realizado en París que diagnosticó cáncer.

Para atender su salud el presidente habría decidido traspasar el poder a Biya, pero mantuvo la presidencia del partido único Unión Nacional de Camerún (UNC) y el control de todo el dispositivo militar del país.

Meses después, versiones oficiales indicaban que el diagnós-



tico había sido modificado pues los médicos constataron que el cáncer no era incurable. Mientras tanto, Biya también había comenzado a ir colocando discretamente hombres de su confianza en los puestos claves del gobierno. No demoró mucho el surgimiento de un conflicto entre ambos. Ahidjo quería continuar controlando el gobierno al igual que lo hiciera desde la independencia en 1960, con el apoyo del ejército y de la influyente burguesía islámica del norte. Por su parte Paul Biya se mostró sensible a las presiones de los sectores intelectuales, de los productores y empresarios sureños, en particular de los residentes de la antigua parte inglesa de Camerún. El conflicto agrió las mutuas relaciones y la tensión estalló en 1983, agudizándose en abril de 1984, cuando estuvo a punto de romperse la unidad nacional mantenida a sangre y fuego por Ahidjo.

La lucha por la unidad

Las dos décadas de autoritarismo y arbitrariedad así como la amplia movilización popular en favor de una democratización, tienen antecedentes históricos muy definidos en Camerún. Durante el periodo colonial, el país fue dominado nada menos que por tres potencias europeas. Primero fue Alemania, luego Francia e Inglaterra. Los franceses se establecieron en la parte norte y en la región oriental y los ingleses en el sur, lo que hizo que existan hasta hoy dos idiomas oficiales, además de sectores que todavía hablan alemán, y de los 250 idiomas o dialectos africanos.

La Unión de los Pueblos de Camerún (UPC) comenzó la guerra contra los colonos europeos en 1948, cuando un grupo de nacionalistas liderados por el funcionario autodidacta Rubem Um Nyobe divulgó un manifiesto afirmando que el país no era una colonia sino un territorio ocupa-

do ilegalmente por Francia, que recibiera de la ONU un mandato provisorio de tutela. Los miembros de la UPC advirtieron que era necesario crear una situación revolucionaria similar a la que se dio en Vietnam y Argelia, para obligar a la ONU a que presionara a los franceses para que negociaran la independencia. La guerra fue violenta, pero los cálculos políticos de Rubem Um Nyobe no fueron correctos. Las Naciones Unidas fueron impotentes y Francia reprimió violentamente la rebelión, a tal punto que los principales cuadros de la UPC fueron obligados, con el correr del tiempo, a refugiarse en la parte inglesa de Camerún.

La guerrilla continuó hasta 1960 cuando la burguesía nativa, surgida al amparo de la presencia francesa, resolvió fundar la Unión Nacional de Camerún, reuniendo a la élite empresarial de origen islámico cuyo líder era Ahmadou Ahidjo. Poco después, Francia otorgó la independencia y fue acompañada casi enseguida por Inglaterra. En 1961, las dos ex potencias coloniales y sus aliados locales promovieron un plebiscito que aprobó la unión de la parte inglesa y francesa formando una república federal.

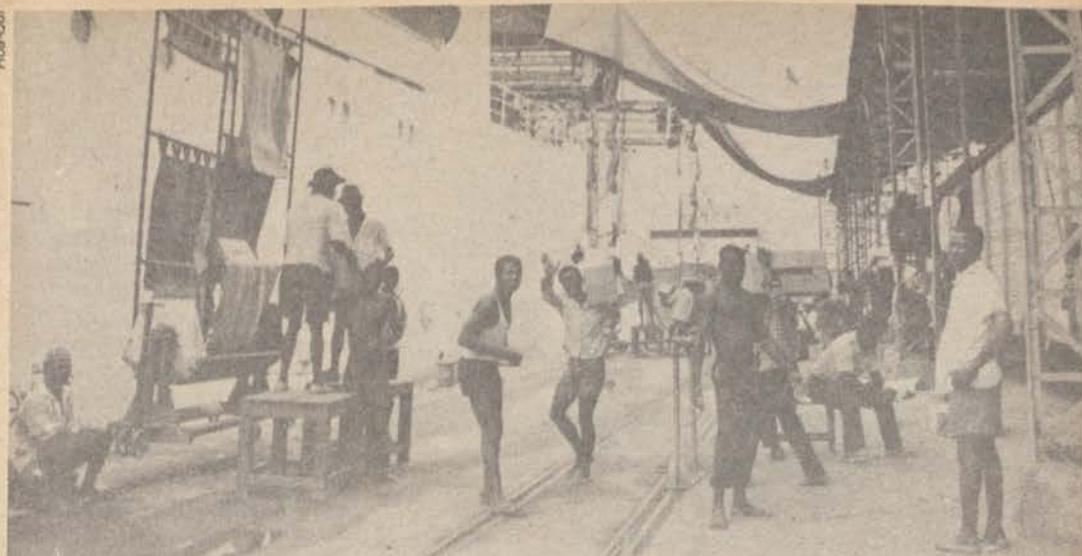
Para consolidar su espacio de poder, ambas burguesías hicieron de la UPC su enemigo común, desatando una represión brutal contra todos los simpatizantes y militantes de la guerrilla. Rubem Um Nyobe fue asesinado y decenas de dirigentes rebeldes fusilados por orden directa de Ahidjo, cuya policía secreta terminó transformándose en una de las más sanguinarias de África Occidental. En 1972 fue proclamada la República unitaria, que marcó la preeminencia de la burguesía francófila sobre la de origen inglés. El sueño nacionalista fue aplastado por la represión luego que el gobierno se apoderó de la bandera de la unidad nacional. Ahidjo implantó también un poder personalis-

ta basado en la sumisión de los jefes regionales dispuestos a cualquier cosa con tal de usufructuar las ventajas de la protección oficial. Como consecuencia de ello, Camerún pasó a ser considerado en Occidente como un modelo de estabilidad, a través de una publicidad destinada a atraer inversionistas extranjeros.

Políticamente, la UNC se transformó virtualmente en un partido único y todos los que se opusieron a ella eran catalogados como traidores porque pasaban a ser sospechosos de atentar contra la unidad nacional. En varias partes del país surgieron siniestras prisiones donde los detenidos simplemente desaparecían de circulación. En las penitenciarías de Yoko, en la región central, en Rocholliré, en el norte, y en Kondengui, en el sur, los detenidos recibían solamente una comida por día compuesta de maíz o mandioca. Se dio el caso, también, de 200 estudiantes capturados cuando distribuían volantes en favor del pluripartidismo, los que fueron reclusos en prisión desde 1976 a 1982 sin juicio previo.

El renacer de las esperanzas

Pero si, por un lado, los partidos de izquierda y en particular la UPC se debilitaron a causa de la represión y de la pérdida de una bandera política tan importante como la de la unión nacional, por otro, las dos décadas de arbitrariedad provocaron un cambio importante de actitudes entre la juventud y en algunos sectores de la clase media, principalmente en la parte inglesa del país. Cuando Ahidjo anunció que dejaría el poder, las esperanzas renacieron de golpe. Yaundé y Duala, las dos más importantes ciudades del país, fueron sacudidas por un inesperado reacomodamiento de políticos, movimientos civiles y organizaciones sindicales. Para muchos que habían vivido durante años aplasta-



La extrema dependencia de las exportaciones provocó el aumento de la especulación financiera

dos por la presencia opresiva de las fuerzas de represión y por la arbitrariedad del gobierno, los cambios hacia una democratización parecían estar de pronto al alcance de la mano.

El sector que más rápidamente pasó a la ofensiva política fue el de los estudiantes, quienes en su mayoría habían nacido luego de la rebelión de Rubem Um Nyobe, y crecieron bajo un régimen dictatorial sin haber nunca experimentado un clima de libertad. Más de la mitad de la población de Camerún tiene menos de 35 años, y durante el periodo de la dictadura de Ahidjo los jóvenes solamente tuvieron como única opción participativa la práctica de deportes. Entre 1972 y 1980, el gobierno realizó un intenso esfuerzo para difundir el fútbol destinando rubros importantes a clubes y universidades en procura de formar atletas. El esfuerzo dio algún resultado porque la selección de fútbol de Camerún se convirtió en la mejor de Africa negra y llegó a disputar la Copa del Mundo de España en 1982.

Pero el deporte fue dejado en segundo lugar rápidamente, después que Paul Biya asumió el po-

der, cuando grupos estudiantiles y universitarios animados por la prédica reformista de intelectuales como Marcién Towa y Jean Marc Ela, pasaron abiertamente a exigir cambios estructurales. La lucha por la apertura política unió desde grupos de tendencia marxista vinculados a la UNEK (Unión Nacional de Estudiantes de Camerún) hasta la Juventud Estudiantil Católica. Además de las reivindicaciones democráticas, hubo otro problema que estimuló la movilización: el desempleo entre los jóvenes. Cuando Biya asumió la presidencia había un millón y medio de jóvenes sin trabajo. El nuevo gobierno prometió dar ocupación a 500 mil pero poco hizo en el curso de los años siguientes, lo que agravó la rebelión casi estructural dentro de la universidad.

A pesar de todo eso, fueron los estudiantes los que salieron a las calles en defensa del nuevo gobierno, cuando militares y políticos vinculados a Ahidjo intentaron un golpe en agosto de 1983. La conspiración fracasó, pero la simiente de la desestabilización no pudo ser eliminada. Biya continuó insistiendo en evi-

tar cambios radicales tanto en el gobierno como en el partido oficialista, la UNC. El sistema económico siguió intocado y la extrema dependencia del país en relación a las exportaciones tuvo como consecuencia inmediata el aumento de la especulación financiera en lugar del fortalecimiento de la inversión productiva, especialmente en el área de la agricultura para el consumo interno.

La nueva desilusión de los sectores reformistas tuvo lugar en enero de 1984 cuando Paul Biya resolvió realizar comicios presidenciales anticipados en un intento por consolidar su poder, frente a las amenazas de los que añoraban la era Ahidjo. Dividida verticalmente entre simpatizantes y críticos del nuevo régimen, la UNC casi no participó en la campaña electoral y se limitó a promover la figura de Paul Biya, al mismo tiempo que el gobierno intentaba eliminar a la derecha condenando a muerte al ex presidente Ahidjo bajo la acusación de organizar el fracasado golpe de Estado de 1983. La condena tuvo un efecto más psicológico que práctico porque el ex presidente ya había huido a Francia



El fenómeno más inquietante es el resurgimiento de divergencias entre grupos étnicos

en julio de 1983.

El culto a la personalidad de Biya durante la campaña irritó a la izquierda que vio en ese episodio un triste recuerdo de las cinco veces que Ahidjo se reelegió usando el mismo sistema. Como era de esperar, el resultado fue ampliamente favorable al nuevo presidente, pero salió desgastado de la campaña. Las dificultades impuestas al retorno de los exiliados perseguidos por Ahidjo y el rechazo a reconocer el papel pionero de Rubem Um Nyobe en la lucha por la independencia, hicieron que los sectores de izquierda siguieran desconfiando.

Por eso, en abril del año pasado no se produjo la misma movilización estudiantil que en agosto de 1983 cuando una columna de tanques intentó ocupar el palacio presidencial por la madrugada. El golpe fue dominado más por la debilidad y vacilación de los conspiradores que por la fuerza del apoyo popular a Biya. Fue un acto desesperado de la otrora poderosa Guardia Presidencial, formada básicamente por militares de origen musulmán del norte de Camerún y que gozaban de un buen nivel de vida desde el periodo Ahidjo. Todos los jefes de la conspiración eran hombres de confianza del ex pre-

sidente, quien a esa altura ya había sido amnistiado de su condena a muerte.

El intento de golpe y los sangrientos conflictos que se produjeron durante las 24 horas siguientes dejaron en el ambiente inquietantes dudas sobre la solidez del dispositivo político-militar de Paul Biya. Luego de ese nuevo intento golpista, el presidente anunció una profunda reorganización de los cuadros administrativos y militares, con el objetivo de aumentar su vínculo con las bases del poder y, de esa manera, tener contacto directo con todo lo que estuviese sucediendo. Pero durante las semanas siguientes los cambios se produjeron a un ritmo mucho más lento y en general beneficiaron a los jefes políticos pertenecientes a la etnia *beti*, la misma de Biya. A muchos de los nuevos integrantes del segundo y tercer nivel gubernamental se les consideraba inexpertos o tenían evidentes lazos con el antiguo régimen. También fue modificada la dirección de la UNC en su nivel superior, pero los nuevos miembros no lograron fortalecer la tendencia a romper radicalmente con el pasado.

Para reducir el peso político de la región norteña, poderosa

durante la era Ahidjo, Biya creó nuevas provincias lo que originó inmediatamente la protesta contra un hipotético "ascenso étnico de los grupos sureños". Lo cierto es que en los medios políticos de Yaundé pronto comenzaron a surgir comentarios sobre la conducta del presidente quien, según algunos círculos, estaría mostrando mucha vacilación frente a acontecimientos cruciales. Muchas de esas afirmaciones eran simplemente rumores, pero fue evidente que a partir de fines del año pasado comenzaron a crecer las presiones ejercidas por intereses antagónicos tanto dentro del gobierno como de la UNC.

El vacío político

El fenómeno más inquietante es el resurgimiento de las divergencias entre grupos étnicos, y una todavía velada nueva rivalidad entre el sector francófilo y el anglófilo. El debilitamiento de la UNC pasó a ser evidente en momentos en que la vieja cúpula del partido, casi toda ella comprometida con el periodo dictatorial, toma los puestos de dirección. Los nuevos tecnócratas nombrados por Biya para cargos gubernamentales carecían de bases políticas propias, y los sectores más jóvenes preferían no vincularse directamente con una estructura históricamente ligada al periodo Ahidjo.

La realidad es que Paul Biya gobierna hoy prácticamente sin partido, pese a sus esfuerzos para revitalizar la UNC en el 5º Congreso de esa organización. El panorama también es bastante difícil fuera de la UNC. La UPC realizó hace poco un congreso clandestino en Camerún en el que abandonó parte de su plataforma política radical de la época guerrillera de Nyobe, pasando a adoptar una posición más flexible. Pero a pesar del papel histórico del partido en la lucha por la independencia, tiene pocos cuadros vin-

culados directamente a las bases. Los largos años de represión castigaron duramente a los políticos más veteranos, mientras la mayoría de la juventud era obligada a exiliarse. Desde 1982, la UPC hizo un gran esfuerzo para volver a asumir el liderazgo del movimiento en favor de cambios estructurales profundos y de una clara opción socialista.

Otro movimiento de izquierda, la Organización Camerunense para la Libertad y la Democracia (OCLD) también padece de problemas idénticos, mientras el centrista Movimiento Camerunense por la Democracia y el Progreso (MCDP) está prácticamente inactivo luego que su líder, Abel Eyinga, volvió del exilio y cambió la militancia política por una clínica médica. Las demás organizaciones tienen sus raíces en las comunidades de exiliados, principalmente en Francia. Entre ellas se encuentran el Colectivo de los Grupos de Reflexión, el Partido Demócrata Camerunense, el Colectivo Horizonte 85 y el Movimiento por la Democracia Popular. Incluso ellos padecen de una situación ambigua porque no hubo hasta ahora una amnistía general para los exiliados, lo que dificulta el esfuerzo por establecer bases populares propias.

El problema económico

A ese panorama se suma la inquietud de los empresarios del sur y del oeste de Camerún, donde se concentra la mayor parte de los ocho millones de habitantes de lengua inglesa. La región siempre fue discriminada durante el periodo Ahidjo, pero adquirió importancia económica a partir del final de la década de 1970, cuando se descubrieron grandes yacimientos de petróleo cerca de la frontera con Nigeria. La empresa estatal petrolífera SNH (*Société Nationale des Hydrocarbures*) sigue siendo administrada directamente por el presidente

de la República, el que centraliza las decisiones. A fines del año pasado, una misión de alto nivel del gobierno camerunense estuvo en Inglaterra tratando de neutralizar los reclamos de los empresarios de lengua inglesa y de buscar nuevos inversores extranjeros para Camerún.

El esfuerzo por obtener nuevas inversiones se hizo necesario después que aparecieron indicios de la caída de las exportaciones de petróleo, responsables hasta ahora de la relativa estabilidad económica del país. La deuda externa es pequeña para los pa-

beral en relación al capital externo, con mayores facilidades para las empresas petrolíferas y mayores ventajas para los inversores extranjeros, además de rígidas medidas para reducir el número de funcionarios públicos y desactivar las empresas estatales consideradas improductivas. Todas esas medidas corresponden a la clásica receta del FMI, y una vez más entran en choque con las aspiraciones de buena parte de la población de Camerún que esperaba días mejores a partir del fin de la dictadura.

La suma de todos estos facto-



El petróleo es responsable de la relativa estabilidad económica de Camerún

rones africanos, pero tiene tendencia a aumentar en la medida en que los principales productos exportables como el cacao, el café y el algodón están con precios en baja en el mercado mundial. Al mismo tiempo, cayó la producción interna de alimentos básicos y se hizo necesario importarlos. En los medios económicos de Duala, la capital financiera del país, existe la impresión de que los "buenos tiempos" están con los días contados y que una crisis solo podrá ser evitada en el corto plazo si el presidente Biya adopta un nuevo modelo económico.

Según los medios bancarios ese modelo tiene que ser más li-

res indica que el país está en medio de una etapa crítica. Biya intenta mantenerse en el gobierno sin hacer cambios radicales, pero al mismo tiempo alterando sus bases de poder para no tener que enfrentar una tercera conspiración golpista. Es una etapa de estudio, en la que cualquier imprevisión política puede tener consecuencias trágicas. A pesar del escepticismo de los movimientos populares y partidos de izquierda, todavía sienten que es prematura toda hostilidad frontal al régimen. Pero hay un clima de expectativa en Yaundé, porque mucha gente cree que el tiempo está corriendo contra Paul Biya.

La lucha de los mineros negros

Una declaración del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (SACTU) revela los antecedentes del enfrentamiento entre el Sindicato Nacional de Mineros y el Régimen de Pretoria*

Una fuerza en crecimiento, el movimiento sindical de los trabajadores negros de Sudáfrica constituye una de las herramientas fundamentales en la lucha popular contra el régimen racista del *apartheid*. Un millón y medio de trabajadores negros sindicalizados expresa esa fuerza que representa a 15% de toda la clase trabajadora en ese país. Su

* El presente texto es la transcripción de los principales tramos de la declaración del Sactu, aclarando la posición de los mineros negros y sus problemas gremiales.

combatividad también puede medirse en cifras: 489 huelgas durante 1984 con la participación de 200.000 trabajadores, 279 juicios laborales contra patronales y 399 negociaciones en la órbita judicial. El año pasado, muchos de esos sindicatos negros se unieron al boicot contra las elecciones para la formación de las cámaras parlamentarias destinadas a mulatos y asiáticos, y participaron activamente en las movilizaciones de protesta. En esta nota se analiza, en particular, la movilización de los mineros.



Los mineros negros viven en condiciones inhumanas de higiene y seguridad

El reciente movimiento huelguístico de los mineros negros de Sudáfrica debe ser encarado a la luz de los acontecimientos anteriores y en el contexto más amplio de las actuales maniobras de los gerentes de las minas y del propio sistema de *apartheid*.

En julio de 1981, el régimen acató la recomendación de una comisión creada especialmente para ese fin, llamada Comisión Wiehahn, en el sentido de modificar la Ley de Minas y Obras. Las recomendaciones de la comisión apuntaban a permitir el ingreso de los negros a varios puestos de trabajo que todavía le estaban vedados.

Los mecanismos recomendados por la Comisión contenían veladas cláusulas de garantía para los trabajadores blancos y una explícita declaración de que deberían ser implementados únicamente por los trabajadores blancos y por los propietarios de las minas. Sin embargo, la actitud intransigente de los capitalistas de los sindicatos blancos ante toda posibilidad de avance gremial de los negros, impidió el cambio de la situación. Y la intolerancia se daba a pesar de que las recomendaciones incluían también mecanismos destinados a mantener el control del régimen sobre los sindicatos negros militantes y sobre las actividades gremiales (tanto desde el punto de vista de su estructura y financiamiento como de los consejos de negociaciones industriales). La comisión había recomendado también ciertos medios para presionar a aquellos sindicatos que se negasen a registrarse de acuerdo a los términos de la enmienda.

El principal objetivo de la Comisión Wiehahn era poner fin a la tensa situación derivada de la insatisfacción de los mineros negros con respecto a sus salarios extremadamente bajos, y con las condiciones inhumanas de higiene y seguridad, además de la discriminación laboral. Ya en 1982, era evidente que tal objetivo no

había sido alcanzado. Había transcurrido un año durante el cual el régimen de *apartheid* había acatado las recomendaciones de la Comisión, cuando una ola de agitación se extendió por el país afectando las minas de oro, carbón y platino.

Un aumento de 12% fue ofrecido a los mineros negros, que ganaban salarios muy bajos, mientras que los trabajadores blancos recibieron el mismo porcentaje pero sobre salarios mucho más altos.

La furia de las protestas

Los mineros negros acusaron a la Cámara de Minas de mantener bajos sus salarios para disipar los celos del Sindicato de Mineros blancos, cuyos miembros intentaban mantener sus privilegios.

Como resultado de ello, más de 30 mil mineros negros dejaron sus herramientas de trabajo y exigieron aumento salarial. Denunciaron que se les impidió formar su sindicato y que fueron privados del derecho a negociar con sus patrones. En muchas minas, los trabajadores negros dieron rienda suelta a su rabia y frustración causando daños a las propiedades de los dueños de las minas. Las demostraciones de protesta fueron brutalmente reprimidas por la policía de las minas y por las autoridades de seguridad estatal y, en ciertos casos, hasta por la policía paramilitar. Por lo menos diez trabajadores murieron y muchos fueron deportados.

Como consecuencia de los temores de los dueños de las minas y por las insistentes exigencias de los mineros negros, en 1982 se formó el Sindicato Nacional de Mineros (NUM), que recibió autorización para realizar la afiliación de sus miembros en los propios lugares de trabajo. Pero como consecuencia de la política asumida por las patronales que apunta a dividir lo más posible a



La policía del *apartheid* reprime violentamente los movimientos negros que luchan por mejores condiciones de trabajo

los trabajadores, otros sindicatos recibieron permiso para hacer afiliaciones en las minas, y fueron registrados como entidades negociadoras en favor de los mineros negros.

NUM: surge un gran sindicato

Los otros sindicatos autorizados por la Cámara de Minas fueron tres: el Sindicato de Mineros Negros (BMWU), el Sindicato de Mineros y Trabajadores de Túneles (afiliado al Sindicato de Trabajadores Negros Unidos) y el Sindicato Federado de Empleados que trabajan con Explosivos

y Productos Químicos en las Minas.

Ante esa situación, el Sactu alertó a los mineros que no hicieran el juego a los patrones y al régimen. Insistió en que formasen un sindicato único, democrático y fuerte, capaz de servir como portavoz de las necesidades de los trabajadores en problemas como aumentos de salarios, libertad de ir y venir y de escoger el lugar de residencia,¹ seguridad en el trabajo e indemniza-

¹Estos no son derechos reconocidos a todos los negros por el régimen del *apartheid*.

ción por daño físico o muerte en el trabajo.

El NUM creció rápidamente. Apenas un año después de su creación, ya era uno de los dos mayores sindicatos nuevos, con 40 mil afiliados, casi 10% de todos los mineros negros. A fines de 1983, el número de afiliados ya había subido a 70 mil y los líderes sindicales iniciaron firmes negociaciones con la Cámara de Minas, no solo sobre el tema salarial sino también sobre aspectos relativos a higiene y seguridad en los locales de trabajo. Además, el NUM dejó bien en claro su posición en el sentido de que la existencia de un número demasiado grande de sindicatos tendía a dividir a la clase trabajadora y debilitar la unidad de los mineros negros.

Insensible desprecio por la vida humana

El 14 de setiembre de 1983, una explosión de metano mató a 65 trabajadores de la mina de Hlobane. El secretario general del NUM, Cyril Ramaphosa, dijo en el funeral: "Quiero alertar al gobierno que los trabajadores habrán de reaccionar con rabia y nadie podrá controlar la situación". Agregó que el desastre de Hlobane demostraba que las leyes de seguridad de Sudáfrica debían ser reformuladas, y acusó a los dueños de las minas de mostrar un desprecio insensible por la vida humana.

Luego del desastre, se registraron violentas amenazas de huelga. El NUM denunció que los contralores de escapes de metano, exigidos por ley, no habían sido llevados a cabo en la mañana de la explosión; convocó a una discusión sobre la estrategia a adoptar y exhortó a la paralización del trabajo en recuerdo de los que habían muerto. Más de 30 mil trabajadores interrumpieron sus actividades durante media hora, mientras otros miles guardaron un minuto de silencio.



En diez años murieron en accidentes más de 8.200 mineros

En setiembre de 1983, 60 mineros negros de la mina de oro de West Driefontein fueron amenazados de despido por negarse a trabajar, temerosos de un desmoronamiento de las galerías. Habían oído rumores de un derrumbe en el 149 nivel y se negaban a trabajar en esa área peligrosa. El NUM, que los representaba, no estaba reconocido en aquella mina y, por lo tanto, no tuvo acceso a la administración.

Estos hechos y muchos otros accidentes no fatales que pasan desapercibidos o no son registrados, ilustran sobre las alarmantes condiciones de higiene y seguridad de los mineros sudafricanos, y sobre la indiferencia de los propietarios de las minas. Cifras oficiales proporcionadas por el Departamento de Asuntos Mineros y Energéticos indican que por lo menos, dos trabajadores mueren diariamente y 50 sufren heridas en accidentes en las minas. De acuerdo a esas mismas cifras oficiales, más de 8.200 personas murieron en las minas en los últimos diez años y unas 230 mil resultaron heridas.

Teniendo en cuenta esa terrible situación, especialmente en lo que se refiere a los mineros negros, el NUM levantó una serie de exigencias: el derecho de los trabajadores negros a tener su propio representante de seguridad; a negarse a trabajar en condiciones consideradas insalubres,

inseguras e ilegales; a exigir la inspección gubernamental siempre que existan sospechas de que las reglamentaciones están siendo violadas; a ejercer derechos en favor de la seguridad y la salud de otros trabajadores; a promover juicios y en ellos testimoniar sin interferencias o intimidaciones; a acompañar las inspecciones del gobierno, sin pérdida del salario; a participar en el desarrollo de planes para métodos de extracción de minerales; a poder contar con un entrenamiento adecuado en el área de normas de salud y seguridad; a ser protegidos contra abusos cometidos por ejercer sus derechos estatutarios.

Victoria significativa

En enero de 1984, el NUM alcanzó una significativa victoria al suscribir tres acuerdos más con empresas mineras, totalizando 14 acuerdos de esa clase. Los últimos acuerdos preveían la representación de los trabajadores no sindicalizados de los hospitales de las minas; Ramaphosa afirmó que el sindicato estaba también negociando una licencia por paternidad para la mayoría de los trabajadores inmigrantes (teniendo en cuenta que solo con un permiso expreso, los mineros podrían disponer de los días necesarios para ir al lugar donde residen sus familias y conocer a sus hijos recién nacidos).

El año pasado, 450 trabajadores comenzaron una huelga en la mina de vanadio de la *Union Carbide*, en Brits, Bophutatswana, luego que la empresa se negó a reconocer al NUM. La misma tuvo lugar después que el "gobierno" de Bophutatswana mandó una circular a las empresas que operan en ese bantustán, sugiriendo que no negociasen con los sindicatos ubicados fuera del mismo. El NUM que, como todos los sindicatos progresistas, no reconoce a los bantustanes ni a sus "gobiernos", inició un ju-

cio contra el "gobierno" de Boputatswaná y la *Union Carbide*, dado que la legislación del Consejo Industrial Sudafricano continúa rigiendo en el bantustán. Sin embargo, Boputatswaná pretende aplicar leyes que proscriben a los sindicatos ubicados fuera de su territorio.

También durante el año pasado, mil miembros del NUM fueron despedidos por la *Impala Platinum Refinery* por haber ido a la huelga pidiendo el reintegro de siete trabajadores que habían sido despedidos luego que se negaron a trabajar en virtud de la agresión e insultos recibidos por supervisores blancos. También entraron en huelga trabajadores afiliados al NUM de la mina de carbón de Rietspruit, cerca de Witbank. La huelga fue provocada por una "medida disciplinaria" tomada contra un trabajador que había participado en una interrupción del trabajo luego de la muerte de un obrero.

Poco después, 10 trabajadores murieron y se produjeron daños por millares de rands en un enfrentamiento en la mina de oro angloamericana de Geduld, próxima a Welkom. De acuerdo con un portavoz del NUM, el problema se produjo por la muerte de un minero víctima de los malos tratos infligidos por agentes de seguridad de la mina.

Como consecuencia de todos esos disturbios, la Cámara de Minas aceleró las discusiones para implementar las recomendaciones de la Comisión Wiehahn y así terminar con la restricción de empleos. Pero como Cyril Ramaphosa, presidente del NUM, no fue invitado a participar en esas discusiones, el NUM decidió que no participaría del Consejo Industrial propuesto, a no ser que la restricción de empleos fuese completamente eliminada.

Condiciones inaceptables

Ramaphosa dio a entender que sería convocada una confe-

rencia nacional especial del NUM a fin de discutir las medidas a adoptar por el sindicato. Agregó que la Cámara de Minas estaba ofreciendo un aumento menor que el de 1983, lo que evidentemente era inaceptable. La conferencia sería parte de la implementación de una resolución adoptada durante la 2ª Conferencia Nacional del NUM, en diciembre de 1983, cuando se decidió que las negociaciones se realizarían en mayo de cada año y terminarían el 19 de junio, dándole a los mineros un mes de plazo para reflexionar, antes de la fecha habitual de vigencia de los aumentos que era el 19 de julio.



Solo un movimiento negro organizado podrá eliminar la discriminación y la explotación

Las paralizaciones del trabajo continuaron en varias minas en Goedehoop y Kriel, en Transvaal Oriental, en las instalaciones Douglas de la *Rand Mines* cerca de Witbank, en Rietspruit, y en las minas de carbón de *Vryheid Coal and Rail Company*. En Durban Deep, los mineros tuvieron choques con la policía, en los que se registraron 111 heridos. La huelga era por aumento de salarios y en solidaridad con el NUM. Más de ocho mil mineros adhirieron. Los mineros entraron también en huelga en las empresas *Wester Holdings Division*, *Welkom Division* y en la mina "Presidente Brand" de la

Anglo. La policía reprimió, con un saldo de 250 heridos.

Los movimientos de los mineros se realizaron dentro del contexto de continuos disturbios que han sacudido Sudafrica en los últimos meses, forzando al régimen a abandonar su fachada "reformista" y a recurrir a la represión. (Ver Nota de Tapa de *Cuadernos* N° 73).

Sin medios de expresar su rechazo a las inaceptables ofertas salariales, sin derecho a negarse a trabajar en el subsuelo, los trabajadores negros se enfrentan a pocas opciones debido a las inhumanas condiciones de vida y de trabajo en las minas. La fuerza necesaria para eliminar la discrimi-

minación y la explotación solo puede surgir del movimiento sindical organizado.

Es por eso que existe una presión creciente para restablecer una organización inspirada en el ejemplo del Sindicato de Mineros Africanos del "tío" J.B. Marks. Gracias a su movilización en 1946 fue posible reunir y organizar cien mil trabajadores en más de 21 minas. En aquel entonces, sus reivindicaciones eran los principios elementales que los mineros continúan exigiendo hasta hoy: el derecho a organizarse, el fin de la segregación racial y la concesión de aumentos salariales. ●

Asia

India

Bhopal: lecciones de una tragedia

El escape de isocianato de metilo de la planta de la Union Carbide pone en evidencia los riesgos de una industrialización "a cualquier precio", donde los más pobres son "carne de cañón"

Claude Alvares



Los juicios iniciados contra la Union Carbide parecen haber quedado relegados a un segundo plano

La fábrica de pesticidas de la Union Carbide en Bhopal, escenario de la espantosa tragedia del pasado mes de diciembre, está hoy cerrada. Luego de los sucesos, todo volvió rápidamente a la rutina de siempre en la ciudad y en el resto del país. Los que habían abandonado Bhopal, algunos llevando sus cabezas de ganado, volvieron a la ciudad. Los científicos hindúes que controlaron la utilización del resto de isocianato de metilo (MIC) que quedó en los tanques de almacenamiento regresaron a sus laboratorios pocos días después. Pese a que continúan aparecien-

do esporádicas noticias en la prensa hindú sobre el mortífero gas, las investigaciones orientadas a determinar a quién corresponde la responsabilidad por el accidente y los juicios iniciados por abogados norteamericanos en favor de las víctimas contra la Union Carbide en los tribunales de EE.UU., parecen haber quedado relegados a un segundo plano.

Todo indica que las lecciones de Bhopal ya están siendo rápidamente olvidadas, a pesar que sigue sin ser reparado el sufrimiento causado por el accidente. De acuerdo con las cifras más

recientes, murieron tres mil personas y millares más fueron afectadas, muchas de ellas condenadas a una muerte prematura. Desaparecieron familias enteras. Jefes de familia que ganaban el pan para su gente fueron diezmados. Muchos perdieron sus medios de subsistencia, incluyendo el ganado.

Pese a ello, no hay planes concretos para una reparación a las víctimas. Hace poco, el gobierno del estado de Madhya Pradesh decidió donar tres kilos de cereales por persona a los afectados, lo que no puede considerarse una ayuda adecuada. Fue nombrada una comisión para registrar los nombres de las víctimas, pero no existen perspectivas de una indemnización para los que quedaron desamparados. El ofrecimiento de diez millones de dólares hecho por la Union Carbide como ayuda inmediata fue altivamente rechazado por el gobierno del Estado, argumentando que va a entablar juicio a la empresa con el fin de recibir una indemnización mayor. En las últimas semanas, el gobierno decidió iniciar un juicio colectivo en EE.UU.

Pero los que conocen de cerca la burocracia hindú saben muy bien que aun cuando los tribunales norteamericanos decidan con-

denar a la *Union Carbide* —lo que probablemente suceda—, la mayor parte del dinero de la indemnización, tarde o temprano, irá a parar a los bolsillos de algunos centenares de poderosos víctimas. Por ejemplo una semana después del accidente, los funcionarios encargados de prestar ayuda fueron vistos exigiendo recibos de mil rupias por cada 100 entregadas. La codicia de los burócratas de Bhopal se sirve de varios métodos tradicionales, dentro de los cuales el sufrimiento humano es solo una vía para acumular riqueza.

Siempre que se plantea una gran operación de ayuda durante alguna creciente importante o una sequía, buena parte de los recursos desaparecen y van a parar a las manos de quienes no corresponde o de los poderosos. La actitud de la élite en relación a las condiciones de vida de las clases más pobres es simplemente cruel. En el caso de Bhopal, las cosas no serán diferentes. Los tiburones e intermediarios que van a embolsar la indemnización argumentarán que los pobres, al final de cuentas, no necesitan tanto dinero.

Investigaciones sobre guerra química

Sin embargo, existen también algunas dificultades de índole técnica. Más de 500 víctimas fueron enterradas o incineradas en los tres primeros días de la tragedia sin que se expidieran partidas de defunción. En cuanto a los incinerados, naturalmente no puede pensarse en una autopsia. Para que la indemnización no se vea reducida a niveles insignificantes, solo hay una alternativa: formar una comisión no gubernamental compuesta por ciudadanos imbuidos de un espíritu nacional para la difícil e ingrata tarea de la investigación de los derechos de las víctimas. Ya se instaló otra comisión no

gubernamental pero su objetivo es otro: investigar exactamente lo que la *Union Carbide* estaba haciendo en Bhopal cuando sucedió el accidente. En un informe preliminar, la comisión señala haber encontrado indicios de que la firma probablemente estaba realizando investigaciones sobre guerra química y bacteriológica en sus laboratorios de Bhopal.

Hasta entonces, los responsables del accidente y de la tragedia seguirán impunes como en el pasado. Los modernos procedimientos económicos permiten

maniobras destinadas a impedir el desastre financiero.

Maniobras de la *Union Carbide*

Desde el comienzo, los dirigentes de la compañía en Bhopal hicieron todo lo posible por ocultar las noticias en torno a los escapes del MIC. Hasta las primeras horas de la mañana del 3 de diciembre (el gas mortal había comenzado a escapar a las 11 horas de la noche anterior), ninguna de las autoridades de Bhopal sabía lo que estaba pasando, pese a los repetidos mensajes de



Dean Cayle



"Boicot a la *Carbide* Asesina", dice el afiche de protesta. A la izq. el director de la trasnacional, Warren Anderson

una indemnización en dinero por crímenes que deberían ser castigados con la muerte del culpable. Hubo un momento en que la tragedia y sus consecuencias jurídicas parecían destinadas a hacer estallar una reacción en cadena, capaz de provocar la quiebra de la trasnacional. Los accionistas comenzaron a vender sus acciones, temerosos de que la compañía tuviese que pagar una imprevisible indemnización. Pero pese a que ello le significó grandes pérdidas, la situación volvió a estabilizarse; aun así, a la empresa le demandará meses recuperar el terreno perdido y modificar su estrategia de producción. Enfrentada a una crisis inmediata, la *Union Carbide* logró poner en práctica una serie de clásicas ma-

la policía enviados a la sala de control de la planta. Más tarde, los dirigentes informaron a los médicos que el gas no era venenoso. Después pasaron a difundir noticias a través de los medios de comunicación sobre que el problema había sido provocado por un escape de fosgenio y no de MIC.

Generalmente, las trasnacionales basan su estrategia de producción mundial en un pequeño número de productos químicos fundamentales. En el caso de la *Union Carbide*, se trata del MIC, que es el elemento clave de una serie de famosos pesticidas "biodegradables" conocidos por el nombre de *carbaril* (marca registrada: *sevin*). De esta manera, la reacción instintiva de la trasna-

cional fue preservar a cualquier costo la imagen pública del MIC. Sin embargo, en esa oportunidad la táctica fracasó porque los científicos lograron identificar la causa a partir de los síntomas, y ninguno correspondía al envenenamiento provocado por fosgenio. Difundida la noticia de la toxicidad del MIC a nivel internacional, varios países devolvieron embarques de ese producto químico a Estados Unidos. Para empeorar la situación, la planta de la *Union Carbide* en West Virginia, EE.UU., fue cerrada como consecuencia de la presión del público norteamericano. Sin embargo, la compañía no perdió las esperanzas: en la última semana de diciembre pasado, la prensa hindú publicó un reportaje intentando presentar una imagen benigna del MIC sugiriendo que ese producto químico había ayudado a salvar buena parte de la producción de alimentos en el mundo.

Los rumores de que el gas que había escapado era fosgenio tuvo funestas consecuencias. Muchas de las víctimas murieron porque los médicos les prescribieron un tratamiento para el envenenamiento por fosgenio y no por MIC; tratados los síntomas y retirada la víctima del local contaminado, se recupera rápidamente sin mayores consecuencias. Cuando los médicos advirtieron que la culpa del accidente provenía del MIC, se produjo una discusión entre ellos en relación a si existía o no un antídoto. El MIC penetra en la corriente sanguínea: el cuerpo asimila el gas, descomponiéndose en cianurato y en otros tóxicos. Se necesita aplicar un antídoto que elimine la toxina de la sangre. En caso contrario, la toxina continúa atacando con efectos duraderos y mortíferos, provocando incluso una parálisis cerebral.

Por un lado, los médicos hindúes y un toxicólogo alemán, el Dr. Daunderer, propusieron como antídoto al tiosulfato de so-

dio. Se trata de un producto químico inofensivo que, de acuerdo al científico alemán, probó ser eficaz en más de 100 casos. Por otro lado, un equipo médico dirigido por el Dr. K. W. Jager, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no estuvo de acuerdo con el tiosulfato de sodio y continuó con su tratamiento de síntomas e infecciones secundarias. Mientras seguía la discusión, muchos más murieron. En ningún momento la *Union Carbide* participó en las discusiones aportando información que poseía respecto del MIC.

Al regresar a EE.UU. el director de la *Union Carbide*, Warren Anderson (quien durante su visita a la India había sido detenido por un breve lapso), la compañía distribuyó a la prensa una copia del informe de evaluación de la planta de Bhopal redactado por sus propios ingenieros en 1982, el que señalaba que la fábrica carecía de varios dispositivos de seguridad. Se trataba de una nueva táctica por parte de la trasnacional, destinada a recuperar la simpatía de la opinión pública, haciendo recaer la culpa del desastre en los hombros de sus gerentes hindúes. La prensa hindú reaccionó y no aceptó la versión. En primer lugar, la mayor parte de las acciones de la fábrica de Bhopal todavía es de propiedad de la *Union Carbide* norteamericana (51% del capital). En segundo lugar, la firma no se mostraba dispuesta a cerrarla, incluso ni siquiera luego de saber que la planta no era segura. Por el contrario, continuaba normalmente procediendo a remesas de ganancias y *royalties*.

No cabe duda, también, que la *Union Carbide* transfirió hacia la India una tecnología de pesticidas obsoleta, que exige el almacenamiento del MIC en tanques (el proceso más moderno no requiere ese tipo de almacenamiento). La fábrica de MIC en West Virginia también exige almacenamiento, pero tiene un sis-

tema de seguridad comandado por un computador instalado en la planta desde los años de la década del 70. Operar la fábrica hindú sin ese sistema de seguridad era un crimen.

La responsabilidad del gobierno

Sin embargo, si la *Union Carbide* no logra salir impune de ese gran desastre, tampoco deberán quedar exentos de culpa los gobiernos de Nueva Delhi y Bhopal. Resulta obvio que una inversión de tal magnitud hecha por la *Union Carbide*, en un área crítica de la estrategia de la "revolución verde" en ese país, no habría sido posible sin la aprobación y conocimiento del gobierno de la India. Siempre que suceden transferencias de tecnología de esa clase, el gobierno examina todos los aspectos de la transacción a través de comisiones técnicas.

Especialmente comprometido está el gobierno de Madhya Pradesh. De hecho, el gobierno estatal siempre defendió la fábrica y su ubicación en una populosa zona pese a los cuestionamientos sobre su inconveniencia planteados por la asamblea estadual. En 1975, el alcalde de Bhopal, M. N. Buch, fue trasladado de su cargo por exigir que la fábrica fuese localizada en otra parte, fuera de los límites de la ciudad. En 1982, después que el mencionado informe interno de la *Union Carbide* llegó a ser conocido por los medios de comunicación de Bhopal a través de un periodista de la región, el ministro de Industria volvió a defender a la fábrica, señalando que no se trataba de una simple piedra que podía ser sacada de un lugar y trasladada a otro. Además de eso, se sabe en Bhopal que la lujosa casa de huéspedes mantenida por la *Union Carbide* en la ciudad estaba siempre a disposición del ministro, de los miembros de su gabinete y de sus amigos. Parientes

de importantes políticos y burócratas integraban la nómina de sueldos de la empresa. De ahí que la posición del gobierno de Madhya Pradesh sea precaria en cualquier acción jurídica, por lo que resulta totalmente ilegítimo todo sentimiento de indignación que las autoridades vengan a formular ahora.

Sin embargo, la magnitud del desastre fue tan grande y su impacto en el mundo tan inmediato e impresionante, que las autoridades hindúes —hasta hace poco responsables por abrir aun más las puertas a las transnacionales— encontraron oportuno enfrentar públicamente a la *Union Carbide*. Explotaron así la natural antipatía de todo el mundo hacia el poderío de las grandes empresas con el fin de salvar su piel. Esa actitud de santa superioridad no se justificaba.

De hecho, la gran indignación manifestada por las autoridades oculta la prosaica realidad de la mayoría de los programas de industrialización del Tercer Mundo. A través de ellos, poblaciones indefensas son obligadas a someterse a los riesgos laborales y a ambientes contaminados en el lugar de trabajo y fuera de él, porque los regímenes que los gobiernan continúan asegurando que la tecnología y los métodos occidentales son la única solución para sus necesidades básicas. Esa orgullosa indignación sirvió también para distraer la atención sobre el hecho de que muchas *Union Carbide* que operan en el mundo actúan en el vacío: encuentran cómplices dóciles en el Tercer Mundo que prefieren aceptar la corrupción a proteger a la población contra riesgos cada vez mayores.

Protección al medio ambiente versus desarrollo

El *Wall Street Journal*, en un editorial sobre el accidente de Bhopal, afirmó que a pesar de tales contingencias, la transfe-

cia de tecnología debe seguir. Para ese diario, "el desarrollo es más deseable que la seguridad". De igual modo, esa es también la opinión oficial de muchos regímenes del Tercer Mundo. Fue Brasil el que dijo a Estados Unidos una vez: "queremos esa contaminación de ustedes"¹. ¿Cuántos procesos industriales peligrosos fueron trasladados al Tercer Mundo como consecuencia de esa continua fascinación por la tecnología occidental? El famoso *slogan* político continúa en pie: "la protección del medio ambiente es irrelevante; la pobreza es nuestro mayor peligro ambiental". Esa fue la consigna de la fallecida Indira Gandhi.

Y no solo de ella, sino de

en vías de desarrollo". Las medidas propuestas por la OIT, dijo el ministro, no deberían perjudicar o tener un efecto contrario al desarrollo económico de los países en vías de desarrollo ni causar presiones indebidas a sus sistemas sociales. Luego del seminario, todos los principales sindicatos incluso uno afiliado al oficialista Partido del Congreso, plantearon grandes reservas a ese tipo de enfoque y exigieron que el gobierno ratificase los convenios de la OIT sobre salud y seguridad de los trabajadores, independientemente de sus costos.

Una de las principales orientaciones de la política estatal, incorporada a la Constitución hindú, exige que el Estado tome



En el Tercer Mundo poblaciones indefensas son obligadas a someterse, a riesgos laborales y a ambientes contaminados

toda la clase dominante de la India. En octubre de 1984, durante un seminario en Nueva Delhi en el que se discutían importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el fallecido ministro de Trabajo de la India, Dharam Vir, sugirió que la OIT debería reorientar sus métodos de formulación de patrones laborales para tener en cuenta "las realidades existentes en muchos de los países miembros, especialmente de aquellos

medidas para garantizar que "la salud y la resistencia de los trabajadores no experimenten abusos (...) y que los ciudadanos no sean obligados, por necesidad económica, a asumir actividades inconvenientes para su edad y resistencia física". El principio jamás fue respetado en la práctica, no solo en el sector moderno controlado por transnacionales, tales como el de productos químicos y farmacéuticos como tampoco en las ocupaciones más elementales que no tienen ningún tipo de conexión con los grandes monopolios. La siguiente nota fue publicada por el *Times of India* con fecha 6 de

¹Declaración del entonces gobernador de Goiás (Brasil) Ari Valadao, refutando críticas de ecologistas en 1982.



La ayuda externa, frecuentemente, no respeta los derechos más elementales de las poblaciones necesitadas

agosto de 1983:

"Reunidos hoy, los ceramistas de Gujarat adoptaron por unanimidad la resolución de no reactivar los hornos de ladrillos en caso que los gobiernos central y estadual no les concedan exenciones relativas a la ley de seguridad social, la de salarios mínimos, las leyes laborales y de migración de trabajadores. (...) La asociación de ceramistas presentó un cheque de 1.100 rupias para que se sume a los rubros del primer ministro con destino a operaciones de ayuda a las poblaciones necesitadas".

La Suprema Corte de la India tuvo que intervenir para proteger a los trabajadores pobres y a los zafrales de los hornos, cañteras y otras actividades, porque la máquina administrativa común destinada a controlar los abusos de los patrones entró en colapso o, simplemente, no existe. Y no se trata que la culpa sea solamente del capital privado, local o transnacional. En 1982, la Corte Suprema tuvo que obligar al gobierno de la India a respetar sus propias leyes laborales en el caso de obreros de la construcción que trabajaban en obras estatales.

Carne de cañón

La modalidad del desarrollo económico es la que impone y legitima esas actividades contrarias a los trabajadores. La trans-

ferencia masiva al Tercer Mundo de equipos y procesos peligrosos deriva de que, simplemente, las compañías no quieren respetar ni a la clase trabajadora ni al mundo desarrollado. Prefieren transferir a ceder. El obrero tiene que ser tratado como carne de cañón, usado y explotado hasta que muera.

El volumen de la mano de obra en la India alcanza a 230 millones de personas, incluyendo los trabajadores del campo. De acuerdo a estimaciones del Instituto Hindú de Tecnología de Nueva Delhi, 100 mil personas mueren anualmente como consecuencia de accidentes de trabajo, lo que equivale a tres veces el número de muertos en Bhopal. Esa cifra no incluye fallecimientos derivados de enfermedades o de las condiciones ambientales del lugar de trabajo: tuberculosis, bronquitis, cáncer, mal funcionamiento orgánico o disminución de la longevidad. La seguridad laboral es generalmente considerada como una cuestión de importancia secundaria: los trabajadores son enviados a cursos de capacitación, se cumple religiosamente con los informes sobre asistencia a los mismos y con todas las demás formalidades. Nadie verdaderamente se beneficia, pues las reales condiciones de trabajo contribuyen a que los conocimientos adquiridos sean inútiles.

Naturalmente, existen leyes contra tales abusos. Por ejemplo, la Ley de Fábricas, aprobada por la administración británica en 1848, pero totalmente anticuada. Existen las nuevas reglamentaciones de Control de Contaminación del Agua y el Aire, recién aprobadas, pero que están sistemáticamente a la defensiva de cualquier tipo de quejas, así como casi siempre dispuestas a defender los intereses de las empresas (y del desarrollo económico en general), pues la industria destructiva funciona en base a vidas de personas inocentes.

Finalmente, los órganos de control y fiscalización creados por esas diversas leyes no suelen contar con el personal necesario para su funcionamiento. En esas condiciones, los inspectores de trabajo, de fábricas y de manipulación de fármacos viven de propinas o sobornos. Existen también un Instituto Central del Trabajo, un Instituto de Enfermedades Laborales y un Departamento del Medio Ambiente. Ninguno de ellos tiene la fuerza necesaria. Son organismos normativos y de investigación, con una incidencia marginal en las condiciones reales del trabajo. En suma, los trabajadores hindúes como el resto de los ciudadanos, están bien protegidos en la teoría pero, en la práctica, continúan muriendo y sufriendo accidentes por millares.

La tragedia de Bhopal no logró que volviera a examinarse la decisión del Tercer Mundo de continuar el desarrollo a cualquier precio ni la estrategia de industrialización adoptada. Mucho menos, llevó a un cuestionamiento del proyecto hindú de "revolución verde", sobre la base del empleo creciente de pesticidas y de un grave desequilibrio ecológico. La legitimidad del inadecuado sistema industrial permanece intacta, intocable. Esta es una tragedia todavía mayor que la del domingo negro del 2 de diciembre de 1984.

Medio Oriente

Libano

El diálogo imposible

El líder druso y presidente del Partido Progresista Socialista Libanés, Walid Jumblatt, acusa al presidente Amin Gemayel de conducir el país al caos total

Alberto B. Mariani

Un año después de la Conferencia de Reconciliación Nacional Libanesa realizada en Lausana, no es posible afirmar que la guerra civil que desde 1976 viene lacerando ese país ubicado en el epicentro de la crisis del Medio Oriente haya realmente terminado.

Los enfrentamientos no cesaron ni siquiera después de la instalación de un gobierno llamado de "Unión Nacional", presidido por el cristiano falangista Amin Gemayel y en el que están representadas las principales comunidades político-religiosas libanesas. Israel continúa ocupando el territorio del sur y bombardea periódicamente Beirut, varias regiones del país, los campamentos de refugiados palestinos y hasta zonas muy próximas al ejército sirio estacionado en el Líbano, lo que hace que continúe latente el peligro de una generalización del conflicto.

En Beirut, Trípoli, Tiro, Sidón y otras ciudades libanesas, se suceden los atentados en una secuencia ininterrumpida y sangrienta, que causan centenares de víctimas de todas las tendencias políticas.

Amin Gemayel no gobierna, prisionero de las contradicciones propias de la constitución de su equipo ministerial. Un año después de la partida de los palestinos, hoy está demostrado que la

solución a los problemas que agobian al país no radicaba en la salida de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) del territorio libanés. El drama de este país es intrínseco a los conflictos políticos, sociales y religiosos que experimenta esa sociedad, exacerbados por la vecindad y la ocupación israelí y por los intereses estratégicos de los Estados Unidos en esa región.

En la entrevista que nos concediera con exclusividad Walid Jumblatt, líder máximo de la importante comunidad drusa y presidente del Partido Progresista Socialista Libanés, ministro de Transporte y aliado de los pales-

tinios, queda claro que el Líbano está en un *impasse* dramático cuya solución es imprevisible.

Un año después de la Conferencia de Reconciliación Nacional Libanesa de Lausana, la situación en el Líbano no parece estar en vías de mejorar...

—La situación es mala, tanto desde el punto de vista político como económico. En el plano político, hasta ahora no se puso en práctica ninguna de las resoluciones adoptadas en aquella conferencia. En el plano económico, el país está al borde de la quiebra. Ya no se produce nada y las reservas monetarias se en-



Gemayel y Reagan durante el reciente encuentro en Washington



Jumblatt: "Gemayel quiere dividir a los musulmanes xiítas y sunitas"

cuentran al nivel más bajo de nuestra historia.

¿Cuál es la causa de esa situación?

—A pesar de las resoluciones de Ginebra y Lausana del año pasado, Amin Gemayel decidió simplemente ignorar todos los acuerdos. Continúa llevando adelante su política hegemónica, que provoca el retiro de apoyo por parte de la mayoría del pueblo libanés.

Usted acusa al presidente Gemayel. Sin embargo, desde el gobierno lo acusan a usted de trabajar una solución para el problema libanés, al no permitir que el ejército regular se instale en la zona bajo su control.

—Eso ya no está en juego. Lo que importa ahora es quién va a controlar el territorio del sur del país después de la evacuación de las fuerzas israelíes. Todos estamos de acuerdo en que el ejército libanés debe instalarse en esos territorios. Sin embargo, una vez más, la pregunta que se plantea es si hay un ejército libanés capaz de controlar algo en el Líbano.

Usted debería contestar esa pregunta, ya que es ministro del actual gobierno.

—Formo parte de este gobierno para no agravar una situación de por sí precaria. El día que yo renuncie, el gobierno se desmorona y recomenzarán las hostilidades.

Ultimamente, circulan insistentes rumores de que usted está en vías de renunciar.

—Por ahora no. Antes de tomar una decisión de ese tipo, es necesario analizar otras alternativas, saber dónde mi presencia puede ser más importante y útil. En todo caso, quiero decir una cosa: ese gobierno que llaman de "Unión Nacional" no es bajo ningún concepto lo que pretende ser. Es cierto que aglutina a cierto número de tendencias político-militares del país, pero ¿qué ha hecho hasta ahora? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el "compromiso político" que debería haber logrado?

"La política de Gemayel es un desastre"

¿Por qué no se alcanzó ese compromiso?

—No creo que pueda llegarse a ningún compromiso mientras el partido falangista esté en el poder. Se requieren otras fórmulas, más moderadas, más aceptables, más democráticas. Con

Amin Gemayel y los que lo rodean; se hace imposible arribar a una solución.

¿Usted vuelve a poner en tela de juicio la legitimidad del presidente Gemayel?

—No se trata de cuestionar su legitimidad. Simplemente, constaté que su política demostró ser un desastre. Después de su llegada al poder, los cañones no enmudecieron más. Advierta la serie infinita de atentados y asesinatos que todos los días ensangrenta a nuestro país. Vea el caos y la anarquía que reina en Beirut.

¿Quién sería, en su opinión, el responsable de este estado de cosas?

—Personalmente, acusé a los servicios de informaciones de Amin Gemayel de estar en el origen de esos atentados y asesinatos. En cuanto a la explosión de ciertos vehículos, cargados de dinamita, tengo hasta la prueba formal de lo que estoy afirmando.

¿Por qué motivo Gemayel apoyaría esas acciones criminales?

—Pienso que intenta desestabilizar todas las regiones del país, sembrar la confusión entre las comunidades libanesas para que nos enfrentemos unos contra otros. Sobre todo, volcar a los musulmanes xiítas contra los musulmanes sunitas. Esa es la nueva "jugada" que se está preparando, una jugada por cierto muy peligrosa.

"El Líbano continúa hudiéndose"

¿Cuál sería el objetivo de esa "estrategia"?

—Amin Gemayel está convencido de que, dividiéndonos, puede reinar mejor. Pero será el Líbano todo el que no demorará en hundirse. El presidente no se da cuenta del mal que está haciendo

a nuestro país. El Líbano continúa precipitándose en el caos, la anarquía y el desastre económico.

¿Se va hacia una división o hacia una explosión del país?

—No habrá división entre libaneses. Israel es el que va a aprovechar ese estado de cosas. Israel va a establecerse firmemente en la región al sur del río Litani y, en cuanto el resto del país, solo quedará su recuerdo.

¿Además de Israel, quiénes más se benefician de este estado de cosas?

—Por cierto no serán los libaneses, ni tampoco Amin Gemayel.

¿Qué habría usted hecho en lugar del presidente?

—En primer lugar, habría sellado un pacto sólido, claro y limpio con los sirios. En segundo lugar, habría puesto en vigencia las resoluciones de Lausana y, finalmente, habría establecido un verdadero diálogo político con todas las facciones del país, en lugar de dirigirles bombas y vehículos cargados de explosivos.

¿Cómo están encaminadas las negociaciones con los israelíes?

—Está todo trancado. Israel continúa pretendiendo que las fuerzas de las Naciones Unidas se asienten al norte del río Litani, en la región de Sidón, algo que los libaneses no podemos aceptar.

La retirada israelí de la zona de Sidón parece haberse concretado. ¿Qué prevé para esa región en el corto plazo?

—La retirada es un hecho consumado. Pero sólo Dios sabe lo que podrá suceder allí. Recomenzaron los atentados con bombas. Entre los blancos preferidos figuran los dirigentes del movimiento nacional libanés, como Mustafá Saad, uno de los personajes más notables del sur del Líbano.



Milicias drusas, lideradas por Walid Jumblatt



La desesperación del pueblo libanés, el país está siendo destruido

“La OLP era importante en el Líbano”

Nueve años de guerra no consiguieron destruir la espina dorsal de la economía del país. Nueve meses de “paz” parecen haber reducido casi todo a la miseria. ¿Cuáles son las causas económicas del actual descalabro?

—En primer lugar, el enorme presupuesto militar. En los últimos tiempos se gastaron cifras astronómicas en la compra de armas, cañones y municiones. Entiéndase bien, hablo de los gastos efectuados por el Estado libanés. Luego se produjo la salida de la OLP de Beirut. La presencia de la OLP significaba un factor económico muy importante para nuestro país. Además de eso, nunca apareció la ayuda prometida por los países árabes y los

emigrantes dejaron de enviar su dinero al Líbano porque ya no tienen confianza en su país.

¿Cómo está la actividad comercial?

—Todo terminó. La burguesía libanesa ya no invierte en el país, porque no nos tiene más confianza. Prefiere mirar las cosas desde lejos, desde París o Londres. ¿Qué es lo que nos queda?: la pequeña burguesía que se empobrece lentamente hasta niveles de miseria. Es un síntoma muy grave para un país como el nuestro advertir la situación de miseria en que se encuentra la pequeña burguesía, que era tan próspera.

¿Cómo se puede salir de esa situación?

—No hay solución mientras los falangistas continúen en el poder.

¿Pero cómo pensar en excluirlos del gobierno, si pese a todo representan una de las más importantes comunidades del país?

—¡Ese es el gran error! Los falangistas no representan de ningún modo a la comunidad cristiana. Llegaron al poder gracias a los blindados de Israel. Los falangistas son una cosa y la comunidad cristiana otra. Estamos prontos para dialogar con los maronitas pero no con el partido falangista.

Los primeros meses de Sanguinetti

El amplio respaldo político a la gestión del nuevo presidente no impidió ciertas tensiones con los militares, molestos con algunas de las medidas iniciales del gobierno civil

Carlos Núñez

Toda coyuntura política novedosa genera naturalmente su propio lenguaje, su específico sistema de referencia, su incanjeable esquema simbólico y gestual. Los uruguayos, que debieron pasar 12 años leyendo entre líneas, especulando a partir de medias palabras o interpretando —tratando de interpretar— las toscas reacciones viscerales publicitadas por quienes detentaban el poder, tienen hoy vista y oídos finísimos para entender qué hay detrás de cada episodio cotidiano, por nimio que pueda parecer a primera vista.

El domingo 31 de marzo, exactamente un mes después de que Julio María Sanguinetti asumiera la Presidencia de la República, la apacible ciudad de Treinta y Tres, a orillas del río Olimar, llegó así sin mayor asombro a ser escenario de un acontecimiento inédito en la vida del país: con el pretexto de asistir a un festival folclórico, coincidieron allí los máximos dirigentes de los cuatro partidos políticos uruguayos. Nadie pudo equivocarse: si la sola presencia conjunta del propio presidente Sanguinetti, del nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, del fren-



Sanguinetti historió las conquistas democráticas alcanzadas en el primer mes de gobierno

teamplista Liber Seregni y del cívico Humberto Ciganda, no resultara suficientemente indicativa, las manifestaciones públicas de esos mismos dirigentes arrojarían suficiente luz sobre el significado y los alcances de tal coincidencia.

Sanguinetti historió expresamente las conquistas democráticas (libertad de prensa, de expresión, de práctica política, liberación de presos, reposición de destituidos por razones políticas o gremiales, entre otras) alcanza-

das en un mes de gobierno; "no es todo —dijo—, pero es bastante". Paralelamente, el líder del mayor partido de oposición, Ferreira Aldunate, brindó el eco esperado a las palabras presidenciales comprometiendo taxativamente el respaldo de los partidos a Sanguinetti "como presidente de todos los orientales", sobre todo "como comandante supremo de las Fuerzas Armadas".

Esta última fórmula resulta especialmente significativa. Porque, obviamente, tras este —más

que simbólico, expreso— “cerrar filas” de los políticos en torno a las potestades del gobierno hay algo más que un mero afán retórico o una muestra de civilizada buena voluntad (el mismo Ferreira, apenas salido de prisión, había adelantado que facilitaría a Sanguinetti la “governabilidad” del país). Es que, aunque interpretables de diversa manera, varios factores parecerían cruzarse en el camino de la consolidación democrática en el Uruguay.

El “malestar” militar

En los primeros días siguientes a la asunción presidencial, se llevó a cabo por lo menos una reunión entre Sanguinetti, su ministro de Defensa Juan Vicente Chiarino y los oficiales generales de las tres armas. Nada se supo oficialmente entonces de lo allí tratado, y ni siquiera de la misma realización de esa reunión. Pero un par de datos elementales habían llegado a trascender previamente: el nombramiento en un puesto administrativo clave en el Ministerio de Defensa de un coronel pasado a retiro por los conductores del “processo” —porque el referido oficial no gozaba de su “confianza ideológica” —había provocado el “malestar” de los altos mandos militares.

Ese disgusto habría sido comunicado al Ejecutivo por el comandante en jefe del ejército, teniente general Hugo Medina, pero el nombramiento había sido ratificado. Consecuentemente, como expresión de “protesta”, el jefe de la poderosa División de Ejército I, general Julio César Bonelli (caracterizado como un “duro”, allegado al expresidente Gregorio Alvarez), había solicitado su pase a retiro. El gobierno nombró entonces en su reemplazo —el mismo 19 de marzo— al general Carlos Berois, designación que no hizo sino aumentar el “malestar” militar. En su momento, el episodio fue in-



El pueblo uruguayo recuperó sus libertades democráticas tras once años de autoritarismo

terpretado por los observadores como una muestra de la firmeza de Sanguinetti en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y como un paso adelante en la ocupación de algunos espacios de poder en el área castrense.

Igualmente firme, aunque en otro sentido, se mostraría Sanguinetti en la resolución de otro tema que también despertaba más de una suspicacia —y ciertamente un considerable “malestar”— entre los militares. Pese a un previo pronunciamiento parcial del Parlamento en favor de una amnistía “general e irrestricta” para los presos políticos (aprobada por estrecho margen en la Cámara de Diputados), el Ejecutivo logró imponer una fórmula transaccional en esa materia, que recogía de la propuesta oficialista la distinción entre los “presos de conciencia” o “por sus ideas” de aquellos que hubieran participado en “delitos de sangre” (concretamente, los imputados de “homicidio” en sus diversos grados).

No obstante, de hecho, esa fórmula —aprobada por amplio margen a nivel parlamentario y promulgada de inmediato por el Ejecutivo— determinaba igual-



General Hugo Medina, comandante en jefe del ejército

mente la libertad efectiva de todos los presos. El 14 de marzo, fueron liberados los últimos 47 prisioneros, entre ellos los ocho “rehenes” sobrevivientes de la dirigencia del Movimiento de Liberación Nacional—Tupamaros (MLN—T).

La concesión de una amnistía había sido cuestionada por los militares en diversos tonos y con diversos alcances. Desde el punto de vista castrense, el aspecto más urticante del tema sería expresado sin tapujos por el propio co-

mandante en jefe Medina, en unas intempestivas declaraciones pronunciadas el día de la renuncia de Alvarez a la Presidencia: "Si hay presos políticos que tienen nueve o diez muertes en su haber y van a salir en libertad a breve plazo —adujo Medina en esa ocasión—, no veo por qué se va a juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas por haber cometido tal o cual desmán". El rechazo a un tal "revisiónismo" —vale decir: a la investigación y eventual sanción de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por militares y policías durante la dictadura— se encuentra en el centro mismo de las inquietudes de los mandos, que cobrarán nuevos bríos en las horas previas a la "coincidencia de Treinta y Tres".

La reunión del Centro Militar

Trascendidos en la prensa indicaron, en la última semana de marzo, que "un grupo de oficiales retirados —presumiblemente vinculados al general (Esteban) Cristi (que, como jefe de la División I, había tenido activa participación en los alzamientos militares)— habían sido convocados a una reunión en el Centro Militar", para "evaluar políticamente la situación y trazar un balance de la primera etapa del gobierno democrático". Esta información —no confirmada ni desmentida por los interesados— se prolongaba con el subrayado de que "existía malestar en el Poder Ejecutivo dado el carácter no profesional de la reunión".

Paralelamente, un rumor crecientemente daba cuenta de que estaría circulando entre la oficialidad del ejército un documento atribuido al teniente general Medina en que se anatematizaba la amnistía y se alertaba sobre todo eventual brote de "revisiónismo". Entre tanto, una fuente gubernamental adelantaba *off the record* que "sólo se había comprobado la existencia de una reu-



Chiario, Ministro de Defensa

nión en el Círculo Militar 'General Artigas', entidad de mucho menor dinamismo que el Centro Militar", que reuniría a los militares "de mayor edad" y que, estatutariamente, contaría con el propio Sanguinetti como "presidente honorario" en su carácter de primer mandatario. En todo caso, tal cúmulo de informaciones derivó en una convocatoria al ministro Chiario por parte de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, durante la cual saltó una información adicional: ciertas dependencias militares habían solicitado a algunas emisoras versiones grabadas de declaraciones formuladas por dirigentes políticos (incluido el propio ministro Chiario), sin que el titular de la cartera tuviera conocimiento del hecho.

Tan confuso panorama se oscureció aun más con la publicación —por el semanario *Opinar*, fundado por el hoy vicepresidente Enrique Tarigo— de un documento atribuido a dependencias castrenses en el cual se hacía un relato de la jornada parlamentaria de la que había surgido aprobada la ley de amnistía y refería presuntos altercados producidos a propósito de la misma en el seno de un plenario del Frente Amplio. En rigor, este último

punto —desmentido por los supuestamente implicados en él, Alba Roballo y Hugo Batalla parecía ser el único objetivo de esa relación.

Pero aun cuando el "documento" hubiera sido elaborado sobre hechos falsos y con propósitos diversionistas, su eventual carácter real estaría revelando que los aparatos castrenses de inteligencia —hay oficialmente cuatro "servicios" de esta naturaleza en el marco de las Fuerzas Armadas— continuarían actuando impunemente en el terreno de la vida política, lo que constitucionalmente les está vedado.

Esta extremadamente fluida situación no se agota en los hechos reseñados. A ellos cabría agregar aun la designación de los nuevos integrantes del Supremo Tribunal Militar (cuyos anteriores miembros renunciaron en las horas previas a la liberación de los últimos presos políticos, en un vano intento de obstaculizar la medida), la proposición del Partido Nacional de restituir a los militares destituidos por el "proceso"¹ y el ascenso del coronel Daniel Legnani para ocupar la vacante producida en el generalato por el retiro de Bonelli. Esta posibilidad fue manejada, al parecer, por Sanguinetti. El presidente había desestimado la designación al efecto del coronel Hugo Bértola, también propuesto por el ejército.

"Revisiónismo" y pacificación

La misma problemática del "revisiónismo" ha sido manejada con gran cautela por el presidente Sanguinetti. En sus viajes como presidente electo —a Venezuela y Argentina—, había adelantado públicamente que los

¹Esta medida, en caso de aprobación, podría alterar la correlación de fuerzas dentro de la institución y seguramente provocar más de un roce personal, sin contar con las dificultades jurídicas que acarrea su implementación.

militares responsables por violaciones de los derechos humanos serían juzgados por tribunales civiles. Una vez asumida la presidencia, durante su viaje a Brasilia para asistir a la frustrada asunción de Tancredo Neves, Sanguinetti planteó una formulación más elaborada sobre el punto. Ella parecía implicar la eventualidad de que algunos de esos casos recayeran en la órbita judicial castrense. Por otra parte, en declaraciones a la prensa extranjera, el jefe de estado aseguró que el gobierno no promovería tales juicios, lo que no obstaría —añadió— a que los mismos se llevaran adelante por iniciativa de "algunos ciudadanos" (quienes, en todo caso, no contarían con las mismas posibilidades de reunir pruebas que las que tendrían en sus manos los poderes de gobierno).

La Cámara de Diputados ha designado una comisión para investigar los casos de personas detenidas-desaparecidas. Los familiares de éstas, por su parte, reclaman la integración de una comisión bicameral al efecto. En los partidos de oposición —particularmente en el Frente Amplio— parece primar la opinión de que sin "revisiónismo" no habrá de lograrse efectivamente la "pacificación".

La cautela del presidente en

este terreno está lejos de ser objetable: la consolidación de la democracia exige andar con pie de plomo. Exige también otra cosa, que Sanguinetti ha llevado adelante sin tardanza: recurrir a la solidaridad de los restantes partidos, que se juegan tanto o más que el oficialismo en el éxito de esa consolidación.

Sindicatos, deuda y Tupamaros

Pero la consolidación democrática no depende sólo —aunque sí esencialmente— de la medida en que se ponga coto a la intervención militar en la vida política. (Aunque eso conlleva inevitablemente a desarticular el aparato de poder de la dictadura, y en particular sus cuerpos semiclandestinos de "inteligencia", algo mucho más difícil por cierto que reunir a los dirigentes políticos en una ciudad del interior.) Depende también de reparar los graves daños que el período precedente ha infligido a nivel social y económico. Los ministros de Sanguinetti han alcanzado en este sentido algunos éxitos significativos. (El presidente, con habilidad indesmentible, ha procurado, y en buena medida logrado, que su figura se muestre "más allá del bien y del mal", para jugar con aun mayor peso sólo en los momentos y en los

terrenos más críticos de la acción política.)

Al cabo de un largo período de contradicciones y divergencias —que, entre otras cosas, impidió la integración del Frente Amplio en el gabinete de "entonnación nacional" procurado por Sanguinetti—, los economistas de los cuatro partidos lograron un acuerdo transaccional en torno al documento que establece las líneas básicas de la política económica a ser aplicada por el gobierno. En tal sentido, uno de los reclamos de los partidos opositores —el privilegiar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, como forma de reparación social e instrumento de reactivación del mercado interno— comenzó efectivamente a implementarse. Ya fue concedido un incremento de los sueldos del sector privado al que deberá seguir un ajuste en el presupuesto de los funcionarios públicos. Las medidas fueron acordadas por representantes sindicales y empresariales con decisiva participación del Ministerio de Trabajo. Un conflicto —el de los trabajadores textiles— no directamente relacionado con esas tratativas pero ciertamente de gran entidad, pudo ser solucionado mediante gestiones también decisivas del gobierno, justo a tiempo para evitar un paro general que



La Cámara de Diputados designó una comisión para investigar los casos de personas detenidas-desaparecidas

habría constituido el primer balón en la gestión económico-social del gobierno Sanguinetti. Para los observadores, la actitud gubernamental frente a los sindicatos parece resultar en los hechos mucho más flexible que lo vaticinado por algunas destempladas declaraciones de ciertos políticos colorados en las semanas previas a la asunción presidencial. Ciertamente, resta aún un conflictivo rabo por desollar: el problema de la desocupación, que afecta actualmente a más de 15% de la fuerza de trabajo. Pero existe un consenso en el sentido de que eso no se resuelve en 30 días, ni mucho menos.

El problema de la enseñanza incluía desde el pique aristas quizá más filosas; entre otras cosas porque la ley precedente en la materia, acusada desde casi todos los sectores como de carácter represivo, había sido elaborada precisamente por Julio María Sanguinetti cuando se desempeñara como ministro de Educación y Cultura del gobierno de Juan María Bordaberry. Ese problema resultó menor a la postre, pero no era el único, ni el de más difícil solución (la restitución de los destituidos, que en esa rama comprendía a un alto número de casos, aun a fines de marzo parecía resuelto sólo a medias).

Otro indudable dato a favor: el retorno de Uruguay a una línea de política exterior independiente, que incluye opciones como el decidido apoyo al Grupo de Contadora, el establecimiento de relaciones a nivel de embajadores con Nicaragua —la invitación a asistir a la asunción de Sanguinetti y la gestión de éste para concretar una entrevista entre Daniel Ortega y George Shultz ha sido reconocida por Managua como una efectiva ruptura del aislamiento diplomático en que Washington pretendía sumir al gobierno sandinista—, la posibilidad, al parecer considerablemente próxima, de un restablecimiento de relaciones diplo-

máticas (y comerciales, lo que puede redundar en obvio beneficio mutuo) con Cuba, la promoción de políticas de interés común con Argentina y Brasil, y, en este mismo terreno, una efectiva vuelta a los lazos con los gobiernos democráticos de América Latina. En este sentido, la figura del contador Enrique Iglesias, su larga y reconocida gestión previa como secretario ejecutivo de la CEPAL y su carácter de interlocutor válido a los más altos niveles diplomáticos conforma sin duda una carta de triunfo para la administración Sanguinetti.



El gobierno ha sido flexible con los sindicatos

El mismo carácter de economista ostentado por el canciller, y su dominio de los datos que configuran la estructura de las economías latinoamericanas, habrá de ser obviamente un elemento de considerable peso en lo que hace a un problema que angustia tanto al Uruguay como al resto del continente: la deuda externa del país ha superado ya largamente los cinco mil millones de dólares, y la suma a pagar este año por concepto de servicios de esa deuda resultaría inalcanzable para el actual volumen de ingresos de divisas por exportaciones.

Un informe de la CEPAL que el propio ministro Iglesias debe

conocer bien (seguramente participó en su elaboración) ha despertado en dos reputados economistas locales comentarios como éste: "La apuesta al crecimiento pasará necesariamente por una rápida definición del endeudamiento interno y externo. Sin ésta no habrá programa sostenible. Si el ajuste recesivo llegó a su máxima tolerancia social, sin crecimiento no habrá democracia estable. Una vuelta atrás del tipo de distribución del ingreso interno y con el exterior, es en definitiva lo que está en juego. Del nuevo conflicto distributivo, el país y sus sectores sociales tienen un menguado control. El crecimiento exportador y la re-negociación de la deuda superan la autonomía nacional".

Esta última anotación conduce a la consideración de un tema que hoy por hoy aparece indisolublemente ligado al de la deuda externa: su politización, y las posibilidades que América Latina tiene o no de llevar adelante negociaciones conjuntas con los acreedores. El punto ha ameritado, precisamente por eso, definiciones singularmente cautelosas, tanto por parte del canciller como por parte del ministro de Economía y Finanzas, contador Ricardo Zerbino, quien a fines de marzo emprendió una gira que lo llevaría a establecer contactos con el BID, con empresarios alemanes y con autoridades del FMI (aunque, aclaró expresamente, no entraría aún en el tema de la renegociación de la deuda).

En recientes declaraciones periodísticas, Iglesias explicó, no obstante inscribirse en el espíritu del Grupo de Cartagena, que "América Latina está trabajando a tres niveles. Por una parte, continúa con el diálogo bilateral para resolver sus problemas de deuda, según pautas que han sido impuestas en la negociación internacional en todos los casos. En segundo lugar, participa activamente en los foros mundiales

como el Fondo (Monetario Internacional) y el Banco (Interamericano de Desarrollo) con alto nivel y dándole a esos foros la importancia indiscutible que tienen. Y por último aspira a un diálogo bilateral por cuanto considera que hay aspectos especiales del tema en América Latina que trascienden al problema de la deuda aunque lo comprenden. Se trata de la retomada del crecimiento en todos los planos y es a eso que queremos comprometer los esfuerzos de cooperación y diálogo con nuestros socios de los países industriales". En todo caso, éste es, y seguirá siendo, un tema abierto al debate, y probablemente a la polémica.

EL MLN

La última quincena de marzo, por lo demás, puso sobre el tapete del gobierno de Julio María Sanguinetti un ingrediente especialmente ácido: la liberación de los dirigentes históricos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y sus primeras declaraciones, entre las cuales una carta firmada por Raúl Sendic (impedido de hablar por secuelas de la herida que recibió al ser apresado) que propone un plan llamado "Por la tierra y contra la pobreza". El plan está basado en tres medidas, una de las cuales tiene precisamente relación directa con el tema antes reseñado. La propuesta de Sendic plantea no pagar la deuda externa contraída por la dictadura. En declaraciones a un periodista extranjero, algunos de cuyos pasajes fueron reproducidos por la televisión local, Sanguinetti tildó a los planteos del dirigente tupamaro como "poco serios" e "ingenuos"; algunos días después, por otra parte, lanzó al MLN lo que un observador calificaría como "bofetada histórica", al decretar que el 14 de abril fuera declarado "Día de los caídos en defensa de las instituciones". Esa fecha —hasta ahora



La liberación de los últimos presos políticos en la segunda quincena de marzo: escenas de emoción

llamada por los militares como "de los caídos en la lucha contra la subversión"— marca el aniversario de una acción armada de los tupamaros, que el 14 de abril de 1972 ejecutaron a un subcomisario de policía, un ex subsecretario del Ministerio del Interior y un capitán de navío de la Armada, a quienes sindicaba (en base a testimonios obtenidos del funcionario policial Nelson Bardsio, secuestrado e interrogado por la organización) como promotores e integrantes del llamado "Escuadrón de la Muerte"—o "Comando Caza Tupamaros"—, grupo parapolicial responsable por el asesinato de varios militantes de izquierda. Obviamente, de esta imputación a la de "defensa de las instituciones" media un abismo.

Desde otro punto de vista, empero, es de señalar que, una vez liberados, los dirigentes del MLN ratificaron su propósito —adelantado ya desde el Penal de Libertad— de actuar políticamente en el marco de la legalidad vigente, en un momento y un ámbito que ellos mismos califican de "democracia primaveral". Resta definir, sin embargo, las formas y el marco de relaciones políticas que habrá de adquirir la organización en este nuevo periodo, para el cual los esquemas previos, dependientes de

una estructura clandestina, resultarían por lo menos inadecuados. Asimismo, esos esquemas parecen hacer extremadamente difícil el aglutinamiento, la reagrupación de militantes y simpatizantes, así como el funcionamiento interno, la definición de opciones político-partidarias y la designación de autoridades. Los "dirigentes históricos" actúan momentáneamente como "dirección provisoria", que cumpliría una función de "coordinación" para el debate entre los integrantes, que eventualmente conduciría a la realización de una "convención nacional".

Desde el primer momento, entre tanto, han surgido grupos discrepantes con la posición y los pronunciamientos de la "dirección provisoria", planteando que los ex militantes de la organización deben simplemente, en esta nueva etapa, integrarse individualmente al Frente Amplio. Pero el hecho es que, de una u otra manera, la reaparición de los tupamaros se impone desde ya como un hecho insoslayable en la vida política uruguaya.

Una vida política que busca empeñosamente la consolidación del sistema democrático y que, por ese camino, debe aún reaprender a desarrollarse en el disenso sin apelar a la destrucción. ●

PRESOS POLITICOS LIBERADOS PIDEN LA ENTREGA DE UNA CARCEL

□ El 16 de febrero último, preso aún en el Penal de Libertad, el dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro escribió una carta al entonces presidente electo del Uruguay, Julio María Sanguinetti. Pese a que cumplía estrictamente con las condiciones del reglamento impuesto a la correspondencia de los reclusos, la carta le fue devuelta al remitente por las autoridades del tristemente célebre penal uruguayo. Días después, ya asumida la presidencia por Sanguinetti, su ministro de Defensa, Juan Vicente Chiarino, realizó una visita a la cárcel de Libertad, oportunidad en que Fernández Huidobro le solicitó fuera portador de su carta al mandatario; Chiarino rehusó hacerlo.

Tras su liberación, a mediados de marzo, Fernández Huidobro logró finalmente hacer llegar la carta a su destinatario, accediendo previamente a permitir la publicación de su texto en cuadernos del tercer mundo. La siguiente es copia fiel de dicha carta:

Libertad, 16 de febrero de 1985

Sr. Presidente de la República:
Dr. don Julio María Sanguinetti

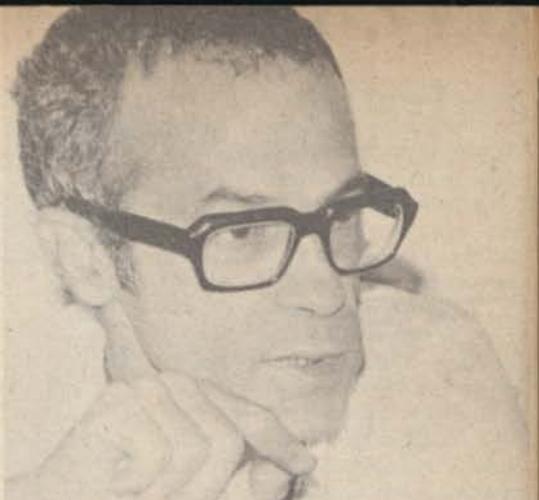
De mi mayor consideración:

Esta cárcel se está vaciando. A veces cuesta acostumbrarse a su silencio nuevo; en especial a presos que, como yo, la conocimos llena de mameucos y ruidos y vimos a los presos chapaleando barro para llevar a las barracas repletas de invierno los tachos con la comida.

Dicen, las radios por los parlantes dicen, que pronto va a quedar vacía... Y uno piensa en las chiracas que terminarán tapando las huellas... No; no puede quedar así.

Por eso, Señor Presidente, en nombre nuestro y en el de todos los compañeros, por intermedio de esta carta, se la venimos a pedir. Queremos de todo corazón y con toda el alma hacer un huerto enorme en Libertad y, si usted lo tiene a bien, nos ofrecemos para poner manos a la obra. Acá hay galpones, hay maquinaria, hay tierra, hay recuerdos que nos son sagrados.

Donde tanto se sufrió tienen, por fuerza tienen, que brotar bien las flores. Usted lo sabe bien. Si fuera otra cosa, no se la pediríamos, pero como se nos han quedado acá, para siempre, muchos compañeros, tenemos que pedirselas.



Fernández Huidobro:
"hay recuerdos que nos son sagrados"

En estos momentos el drama de la prisión está siendo sustituido por el drama de una libertad llena de zozobras en lo económico. Ha habido suicidios por esa causa... Esto podría ser un hermoso barrio de la hermosa ciudad de Libertad y, por añadidura, le podríamos borrar al mapa la cárcel de Libertad.

Acá podría haber una colonia agrícola, una escuela agrícola, talleres, pequeñas agroindustrias, fuentes de trabajo... Ya hay una cierta infraestructura. Esto está cerca de Montevideo... Nosotros tenemos compañeros capacitados para soñar qué es lo mejor que podría cultivarse acá y todos estamos dispuestos a trabajar para que ese sueño se haga realidad.

No tengo más remedio que firmar personalmente esta carta para cumplir los reglamentos, pero mi compañero de celda, Jorge Zabalza, está de acuerdo, y José Mujica, con quien pude hablar en el recreo, tuvo la misma idea, y Jorge Manera también...

Con los demás no puedo hablar. No me dejen. Pero yo conocería demasiado mal a mis compañeros todos, los insultaría, si no estuviera seguro de que ellos también están de acuerdo. Que están de acuerdo Sendic y Engler y Marenales y Rosencoff y los del segundo piso y los del tercero y los del quinto, y los que se han ido y los que ya no están. Yo estoy seguro.

Pero para no hablar por otros, le pido eso: que me deje hablar con los compañeros. Tenemos que discutir un jardín. Así que le pido dos cosas: la voz de mis compañeros, para hablar con ellos; y la cárcel para un proyecto.

Sin otro particular y a la espera de su respuesta, saludo a usted muy atte.

Eleuterio Fernández Huidobro (Nº 787)

Impugnación a la Doctrina de Seguridad Nacional

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, analiza la coyuntura argentina y latinoamericana, preocupado con la persistente violación de los derechos humanos en la región

Horacio Verbitsky

La agresión a los pueblos centroamericanos, el delicado proceso de paz que impulsa el grupo de Contadora, la deuda externa de los países latinoamericanos y la situación interna de la Argentina, son los temas que toca en este reportaje el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, coordinador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) en América Latina.

La agresión a Centroamérica

Usted dedica una gran parte de su tiempo a Centroamérica.

— Son pueblos hermanos latinoamericanos que sufren todo tipo de agresiones. Hay países que padecen una masacre infernal, como Guatemala, y en la prensa internacional ni se los menciona. Estuve en la selva del Petén con monseñor Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, en los campamentos de refugiados guatemaltecos y soy uno de los jueces permanentes del Tribunal de los Pueblos constituido para tratar el caso de Guatemala. También he visto la agresión contra Nicaragua, para la que se utiliza a los pueblos hermanos de Costa Rica, Honduras o El Salvador, en el intento de la administración

Reagan por destruir el proceso revolucionario nicaragüense. En mis viajes no me limito a tomar contacto con el gobierno. En Nicaragua también me reuní con Pedro Joaquín Chamorro y con su madre Violeta Barrios, con la Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa, con Antonio Cruz y, en Honduras, con el FDN.

¿Con los somocistas?

— Sí. Con Edgard Chamorro y Porfirio Rodríguez, a pedido de la propia cancillería hondu-

reña. Es decir que recorrí un espectro muy amplio, sin preconceptos. Miro a Nicaragua con sus aciertos y con sus errores.

¿Cuáles serían, en su opinión, esos aciertos y errores?

— Nicaragua recibió el premio de la UNESCO por haber destruido el analfabetismo, y eso es algo que se trata de ocultar. Lo mismo en el campo de la salud. La gente vive humildemente pero con dignidad. Y los errores son ellos los primeros en reconocerlos y tratar de enmendarlos, como el caso de la amnistía dictada para los miskitos. Yo asistí a reuniones del gobierno con dirigentes miskitos para tratar de solucionar el problema de la costa Atlántica.

¿Usted cree que Reagan quiere invadir Nicaragua?

— En un momento quiso. Ahora ha optado por una guerra de desgaste, una agresión permanente que cree problemas internos a Nicaragua. Cuando estuve en Honduras me alojé en el Hotel Internacional. Allí vi más de mil asesores militares norteamericanos. Ocupaban todo el hotel. No podía ver televisión en castellano, todas las emisiones que se recibían en el hotel eran en



Pérez Esquivel: "Nicaragua ganó el premio de la UNESCO y eso lo tratan de ocultar"

inglés. Hay una intervención abierta económica, logística, estratégica, militar, y una evidente agresión, con las maniobras militares que realizan muy cerca de la frontera con Nicaragua. En la zona de maniobras conjuntas con el Ejército de Honduras debe haber en este momento cerca de 10 mil soldados norteamericanos. También minaron los puertos de Nicaragua, a lo cual respondimos enviando el Barco de la Paz, en el que llegué junto con otros premios Nobel.

Hace pocos días lo discutí en Washington con la embajadora Kirckpatrick. Dijo que estaba de acuerdo con el derecho de los pueblos latinoamericanos a la autodeterminación. Entonces por qué intervienen, le pregunté. Porque la URSS también interviene, me contestó. Para justificar la agresión a Nicaragua, tratan de globalizar el problema. Esa es la política que siguieron con todo el continente.

El problema actual de Centroamérica no es ajeno a lo que sucedió en el resto del continente, donde una típica problemática Norte-Sur fue encuadrada en la problemática Este-Oeste. La ideología de la Seguridad Nacional aplicada en Sudamérica se deriva de la globalización del conflicto Este-Oeste, una concepción simplista de blanco y negro, en la que todo adversario del régimen es denunciado como subversivo o comunista. Tenemos que ser solidarios con Nicaragua porque allí se juega el destino del resto del continente. El problema de Nicaragua no se agota en sus fronteras.

El caso Urbina Lara

¿Los países de América Latina están a la altura del desafío?

— Muchos gobiernos no, pero en los pueblos cada vez es mayor la solidaridad con el pueblo agredido. Este sentimiento despertó durante la guerra de las Malvinas. A Cuba hace 25 años la echaron

de la OEA, a Nicaragua hoy no pueden. Claro que tampoco hubo sanciones para Estados Unidos por haber apoyado al enemigo extracontinental desconociendo sus compromisos en el TIAR. Esos son mecanismos que no sirven porque responden a requerimientos de la política de Estados Unidos pero no de los países latinoamericanos, como quedó demostrado cuando entraron en abierta contradicción.



El presidente Monge

Es un hecho invaluable que países latinoamericanos como los de Contadora hayan asumido la responsabilidad de actuar ante la agresión a países hermanos. Pero también es cierto que Contadora surgió porque no actuaron otras instancias a las que les correspondía, como la OEA durante la gestión de Orfila. En estos días tuve que actuar intensamente frente a un intento de utilizar a Costa Rica, con el caso Urbina Lara. Fui a visitarlo junto con el comandante Tomás Borge y con dos diputados socialdemócratas de Alemania Federal, Hans Jürgen Wisniewsky y Hans Mathoffer, para que nos explicara cómo fue que lo sacaron de la embajada de Costa Rica. Incurrió en muchas contradicciones, hasta que por último reconstruyó los hechos en una forma muy distinta a la que había de-

nunciado. Contó que estaba comiendo un pollo y tomando unos tragos de whisky con una amiga, dentro de un auto, para lo cual abandonó el asilo en la embajada. Cuando quiso volver a entrar y la policía trató de impedirsele él les lanzó el auto encima.

¿Qué ocurrió luego?

— Viajé a San José y le transmití al presidente Luis Alberto Monge mi convicción de que ese joven no había dicho la verdad cuando denunció que fue sacado por la fuerza de la embajada de Costa Rica en Managua. Le dije que ese incidente se estaba usando para que Costa Rica abandonara su neutralidad, rompiera con Nicaragua y formara un Ejército. Ya era muy fuerte la presión de sectores empresarios y políticos para bloquear las negociaciones de Contadora. Le ofrecí que tres o cuatro premios Nobel de la Paz podíamos interceder para que Nicaragua lo dejara en libertad y saliera a un tercer país.

Monge tuvo la suficiente serenidad como para aceptar, pese a la presión que se ejercía sobre él. Hasta desfilaron mujeres frente a su casa con un pantalón en alto, para decirle que no era suficientemente hombre como para romper con Nicaragua.

En casa de Francisco Barahona, presidente de la Universidad Internacional de la Paz, de las Naciones Unidas, les expliqué los hechos a sectores políticos de Costa Rica. Tomás Borge me había dicho que por cuestión de principios Nicaragua no podía ceder al chantaje y aceptar como cierta una mentira. Hablé por teléfono con Daniel Ortega desde Costa Rica y aceptó dejarlo salir a Colombia. Cuando llegó a Bogotá, Urbina Lara dijo que lo quisimos sobornar con cien mil córdobas. Es ridículo. Lo están usando. Lo más grave es que en la Argentina hubo muchos medios que publicaron esa versión calumniosa, pero solo

un canal de televisión y un diario reprodujeron mi desmentida.

Los que alzamos la voz para defender la dignidad del pueblo nicaragüense somos silenciados. Tratan de desprestigiarnos usando a gente de baja catadura, como ese joven que no se asiló en la embajada de Costa Rica por razones políticas sino porque era un desertor del servicio militar, a pesar de lo cual Nicaragua lo dejó en libertad, como una contribución más al proceso de Contadora.

¿Confía en lo que pueda lograr Contadora? Ese proceso parece muy trabado.

— La solución del problema depende de la actitud de Estados Unidos, que presiona a los gobiernos de Honduras, Costa Rica y El Salvador, como también presionó al gobierno argentino cuando otorgó un crédito a Nicaragua. Creo que si Estados Unidos ve peligrar sus posiciones en la región invadirá El Salvador antes que Nicaragua. La solución centroamericana debe ser global, para toda la región, incluyendo a Guatemala.

El frente interno norteamericano

¿Qué se puede esperar del frente interno norteamericano que usted conoce bien?

— La desinformación del pueblo norteamericano es sorprendente. Cada vez que hablo en una universidad y cuento en qué cosas se involucra el gobierno de ese país, hay gente en el público que llora, porque no lo sabía.

Sin embargo, diarios como el Washington Post o el New York Times objetan la política de Reagan y revelan los planes intervencionistas.

— Pero no muestran la gravedad del problema. El pueblo norteamericano no conoce los hechos. No sabe nada sobre Gua-



La situación de Guatemala, así como de otros países de la región es desconocida para los norteamericanos

temala, y muy poco sobre El Salvador. Organizaciones pacifistas e iglesias norteamericanas han organizado brigadas que van a Nicaragua y se colocan en las fronteras para evitar la agresión. Han viajado a Nicaragua técnicos, médicos, cosechadores de café, parlamentarios, obispos católicos y protestantes. Esto genera un nuevo cuadro de la situación.

Organizaciones como WOLA o SEJOURNE hacen lobby en el Congreso norteamericano, informan a los parlamentarios sobre Centroamérica y América Latina en general. También está el fenómeno de los santuarios, las iglesias que reciben a refugiados ilegales de Centroamérica y los van trasladando de santuario en santuario dentro de Estados Unidos para que no sean repatriados porque eso les significaría la muerte.

Las organizaciones populares y no violentas se preguntan qué hacer en caso de invasión militar norteamericana a Centroamérica. Y ya han acordado que ocuparán edificios públicos y el Congreso y se mantendrán en huelga de hambre y movilizados. Por ahora trabajan en informar al pueblo y reclamar el cambio de política norteamericana para la región, transformando la intervención

actual en cooperación. Este movimiento se extiende con fuerza, porque el pueblo de Estados Unidos no quiere otro Vietnam.

¿Y su viaje a Cuba?

— Fui invitado por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, para una reunión cuyo temario incluye los casos de las Malvinas, Puerto Rico y Nueva Caledonia. Previo a mi viaje fue necesario requerir autorización a Gran Bretaña y la Argentina, que la concedieron. El gobierno cubano me informó que podría viajar sin ninguna restricción, ver y hablar con quien quisiera. No olvidemos que Cuba pertenece al continente latinoamericano. Yo estoy abierto a ver, comprender y analizar, como lo hago cuando visito cualquier país hermano.

La deuda latinoamericana

Fidel Castro propuso una moratoria de diez o veinte años para el pago de la deuda externa latinoamericana.

— Me parece correcto. Cuando viajé a Estados Unidos hablé en las Naciones Unidas. Me reuní con funcionarios del gobierno, con legisladores, con la Kirkpatrick, con asesores de Reagan



"Argentina es un país potencialmente rico pero empobrecido, volcado a la especulación financiera"

como Constantin Mengues, con el responsable del Departamento de Estado para América Central, Wayne Smith, como el de Derechos Humanos, Evans. Di conferencias en universidades.

En todos los casos planteé la situación de América Central vinculándola con la de las incipientes democracias sudamericanas y la de la deuda externa. Nos exigen el pago de recursos que nunca llegaron a nuestros pueblos. Los banqueros son responsables de haber sostenido a las dictaduras, les entregaron créditos sin pedirles garantías acerca de en

qué se iban a invertir. Esos créditos no se usaron en beneficio de los pueblos, pero hoy se exige que el obrero, el campesino, el trabajador, los paguen. La deuda es impagable, para la Argentina y para los demás países de América Latina. No estamos en condiciones de pagar con esas tasas leoninas de interés. Las exigencias del FMI conducen a la recesión, a una mayor miseria de los pueblos.

Hay cosas que deben pagarse y otras que no, o buscar a los responsables y reclamarles a ellos los fondos, ya que más de 50% de la deuda fueron recursos desviados fuera del país.

¿Los encuentros de Cartagena, Mar del Plata y Santo Domingo abren una perspectiva seria o son sólo retórica?

— Allí se demostró la preocupación de los países latinoamericanos frente al tema. El continente va recuperando gobiernos constitucionales, lo que puede modificar el tablero de las relaciones internacionales. Esto depende de la voluntad que haya para la integración latinoamericana.

Los gobiernos de Perú, Bolivia y Santo Domingo, por ejemplo, son constitucionales, y sin embargo la crisis económica y la deuda imposible de pagar, los convierte en polvorines sociales.

— Hay que ver la voluntad política de buscar una alternativa latinoamericana.

¿Usted observa esa voluntad en las burguesías latinoamericanas?

— No. Están muy condicionadas a los grandes intereses internacionales. No hay verdaderos procesos de liberación. Un gobierno constitucional debe aprovechar su poder popular para impulsar un proceso de liberación. De otro modo se quedan en democracias restringidas, y ocurre lo que usted señala. Obtener una moratoria para el pago es básico, pero insuficiente. También hace falta ayuda para el desarrollo, que permita salir de la postración.

El caso argentino

¿Y el caso argentino en especial?

— Es un país potencialmente rico pero empobrecido, con capacidad productiva pero volcado a la especulación financiera. Esa fue la política impuesta por los militares y su ministro de Economía Martínez de Hoz, y lamentablemente sigue vigente a casi un año y medio de gobierno constitucional. Siguen cerrándose fábricas mientras proliferan los bancos y las financieras. Seis meses más así no se aguantan. Hay una gran irracionalidad y ausencia total de planes para el desarrollo integral del país.

El gobierno de Alfonsín fue uno de los más firmes objetores de la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

— Pero la Argentina es un país paralizado, y para enfrentar las imposiciones del FMI se necesitaría un proyecto popular con pautas para el desarrollo integral. No se puede enfrentar al FMI diciendo simplemente no pago la deuda. En ausencia de un proyecto de desarrollo, finalmente se terminan aceptando sus recetas recesivas, como vemos hoy en la

Argentina. Supongamos que se consiguiera una moratoria de veinte años. ¿Hay planes para aprovecharla? No. Estamos cansados de discursos bonitos pero irreales.

Los juicios a militares

Los juicios públicos a nueve ex comandantes en jefe de Ejército, Armada e Fuerza Aérea, acusados por torturas y homicidios, no tienen precedentes bajo gobiernos constitucionales en América Latina. ¿No cree que tendrán consecuencias profundas?

— Es un hecho importante, pero todo depende de cómo se realicen. Hasta ahora el gobierno prometió muchas cosas que no se han cumplido en la práctica. Estamos a la expectativa, para que esto no se agote en un hecho espectacular.

En cuanto asumió la presidencia, Alfonsín planteó una estrategia que dividía a los militares en tres categorías: los que dieron las órdenes, los que en su cumplimiento cometieron hechos atroces o aberrantes, y quienes se limitaron a cumplir la orden. Sobre los dos primeros grupos debía caer el peso de la ley mientras que se preservaría al tercer grupo, cuya integración al proceso constitucional debía garantizar su estabilidad. De este modo el gobierno entendía que se produciría una separación entre los ideólogos y jefes de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el resto de los cuadros militares. ¿Cómo evalúa los resultados de esa política?

— Eso no ha ocurrido. Los militares siguen reivindicando en declaraciones públicas la Doctrina de la Seguridad Nacional y pretenden con gran soberbia que el país les debe a ellos la existencia del gobierno constitucional. Esto es falso, porque la dictadura se derrumbó por su fracaso sistemático en todos los planos,



“Ya se cumplieron tres años de la guerra de las Malvinas sin que haya sentencias en esas causas”

incluyendo el militar con el desastre de las Malvinas, y por la lucha popular. El primer error del gobierno de Alfonsín fue pensar que las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a castigar a sus propios integrantes, y en el tiempo transcurrido ya está claro que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sólo buscó ganar tiempo y desestabilizar al gobierno. Lo que debería hacer el Poder Ejecutivo es admitir que se equivocó, y fijarle plazos perentorios al Consejo Supremo.

La Cámara Federal lo hizo en el caso de los nueve ex comandantes, y ante la demora del Consejo le quitó la causa.

— El problema es cuáles son los plazos. Si a casi año y medio recién comienzan los juicios, es evidente que el gobierno calculó mal. Este problema tampoco puede arrastrarse eternamente. Alfonsín dijo en una reunión en la que estuve presente que los juicios iban a ser sumarios. Y se cumplieron tres años de la guerra de las Malvinas sin que haya sentencias tampoco en esa causa. Si el Consejo Supremo no cumple esos plazos, las causas deben pasar a la justicia federal, y ésta debe comprender que se vive una situación de emergencia, y actuar

con la mayor prontitud. De otro modo proseguirá el clima de incertidumbre y cuartelazo. En la última crisis militar el gobierno actuó con energía y pasó a retiro a muchos generales, almirantes y brigadieres que presionaban indebidamente.

Pero el Consejo Supremo dejó en libertad al teniente de navío Astiz, mientras en las cárceles siguen los presos políticos. En Uruguay en cambio no quedó un solo preso político.

¿Usted es partidario de amnistía para los presos políticos? ¿En ese caso, la amnistía no beneficiaría también a los militares acusados por violar derechos humanos?

— Nosotros no somos partidarios de una amnistía, ni siquiera para los presos políticos. Lo que propusimos es que se tomaran en consideración las torturas que sufrieron, las condiciones inhumanas en que cumplieron sus detenciones, de modo que se revisen sus causas, puedan tener un juicio justo, y se les compute triple el tiempo de detención ya cumplido. Pero no una amnistía. Nos opusimos a la autoamnistía que sancionó la junta militar en 1983 y nos oponemos a cualquier nuevo proyecto de amnistía que pue-

da imaginar el actual gobierno. Los secuestros, las torturas, los asesinatos son crímenes que no pueden dejarse impunes.

La información que yo tengo indica que el gobierno no se propone dictar una nueva amnistía, sino reformular el concepto de obediencia debida, de modo de exculpar a todos los militares actualmente en actividad, porque en el momento en que ocurrieron los hechos tenían grado inferior al de coronel. De este modo solo podrían ser juzgados los militares retirados.

— La obediencia debida responde a un concepto de la autoridad encuadrado en principios éticos y jurídicos. La obediencia ciega en cambio se basa en el autoritarismo, que deja de lado esos principios éticos y jurídicos. Lo que aquí se trata de justificar es la obediencia ciega, cuyos mecanismos han llevado a la violación sistemática de los derechos del



"Alfonsín podrá completar su mandato si el pueblo se une contra el golpe"

hombre y del pueblo. No aceptamos ni la amnistía ni la obediencia ciega.

Los problemas que enfrenta el gobierno constitucional hacen

temer a mucha gente que Alfonsín no llegue al término de su mandato constitucional. ¿Cómo ve usted la situación?

— Alfonsín podrá llegar al final de su mandato si el pueblo toma conciencia, se une e impide un nuevo golpe militar. Los militares nunca dieron un golpe solos, siempre necesitaron del consenso de importantes sectores sociales. Muchos políticos fueron a golpear las puertas de los cuarteles.

Los organismos de derechos humanos discrepamos en muchos aspectos de la política de Alfonsín, pero seremos los primeros en defender al gobierno si pelagra. Exigir al gobierno que corrija sus políticas equivocadas, organizar y movilizar al pueblo e impedir que haya sectores civiles que vuelvan a golpear en la puerta de los cuarteles es la garantía de estabilidad constitucional. El futuro depende del coraje que tengamos para construir el presente. ●

Democracia, Constitución y Justicia

El abogado Emilio Fermín Mignone, presidente del Centro de Estudios Legales (CELS), fue viceministro de Educación del Presidente militar Alejandro Lanusse y rector de la Universidad de Belgrano. No era militante de la izquierda ni estaba enemistado con los generales cuando en 1976 fue secuestrada su hija Mónica Candelaria, quien nunca reapareció. A partir de ahí, el doctor Mignone se volcó a una militancia activa en el frente de los derechos humanos, que le valió cárcel y persecuciones. Fue una de las primeras personalidades públicas que enjuiciaron la metodología militar de la "guerra sucia" en carta abierta de 1976, que el tiempo demostró profética.

Este texto es una réplica del

doctor Mignone —sin duda una de las grandes figuras del movimiento argentino por los derechos humanos— a las declaraciones del ministro argentino de Justicia, Carlos Alconada Aramburu, realizado por nuestra colaboradora Ana María Urbina durante un encuentro de Ministros de Justicia en Lisboa, Portugal, a fines del año pasado y publicada en nuestra edición brasileña N° 75.

"He leído en la entrega de febrero de 1985 de la revista *Terceiro Mundo*, una entrevista al ministro de Educación y Justicia de la República Argentina, Carlos A. Alconada Aramburu, que exige, a mi juicio, algunos comentarios.

"Dado que voy a corregir algunas de sus afirmaciones y efec-

tuar críticas a la política de derechos humanos del Presidente Alfonsín, quiero previamente dejar en claro mi posición y la de las organizaciones de derechos humanos de mi país.

"Desde el 10 de diciembre de 1983, fecha en la cual asumí sus funciones el gobierno constitucional, rige en la Argentina el sistema democrático. Los actuales integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la Nación y de las provinciales han sido elegidos por el pueblo de acuerdo con las normas de la Ley Fundamental. Rige el estado de derecho; exige libertad de expresión; funcionan regularmente los órganos e instituciones establecidos por la Constitución Nacional.

"Las organizaciones de los derechos humanos son las primeras interesadas en la consolidación del sistema democrático, que ha sido interrumpido reiteradamente en mi país desde el 1930 por sucesivas intervenciones milita-

res. Y lo son, no solo por la probada convicción de sus miembros sino también por que serían las primeras víctimas en caso de un nuevo golpe de estado.

"Queda claro entonces que las observaciones que paso a formular constituyen un legítimo disenso en el marco de una sociedad democrática y tienen por propósito contribuir a fortalecer el gobierno constitucional y no a debilitarlo."

El Poder Judicial

"De acuerdo con la Constitución Nacional el Poder Judicial posee, efectivamente, independencia y los jueces, que son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, gozan de inamovilidad.

"Lamentablemente el gobierno constitucional ha confirmado a 80% de los jueces, de tal manera que su ideología y su actitud, en los casos de violaciones a los derechos humanos, poco ha cambiado respecto a la época de la dictadura militar. De esta decisión es responsable, en gran medida, el ministro Alconada Aramburu, en cuya cartera se originaron las propuestas.

"Por otra parte la reorganización judicial se realizó con enorme lentitud. Tanto, que aún hoy existen magistrados en la justicia federal —y no solamente en la provincial, como admite el ministro— designados por los militares, que ejercen sus funciones en forma interina."

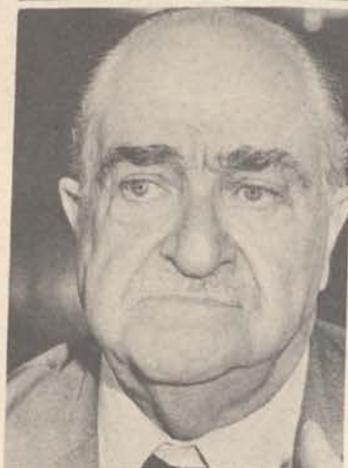
Los tribunales militares

Pero el error más grave del presente gobierno ha consistido en asignar a los tribunales militares la responsabilidad de juzgar a los integrantes de las fuerzas armadas, acusados de gravísimos crímenes contra la humanidad. Con ese propósito el Presidente Alfonsín propició la sanción de la ley 23.049, que así lo dispone.

"El doctor Alfonsín esperaba,



Emilio Fermín Mignone (foto arriba): "En quince meses no hubo un solo condenado", lado, Alconada Aramburu



Los anuncios de amnistía

"Otra nube más oscura todavía se cierne sobre el futuro de la justicia, que la conciencia ética del país exige contra los militares criminales. Debido a una actitud excesivamente complaciente del gobierno con las fuerzas armadas, éstas han ganado espacio en los últimos meses y se muestran cada vez más agresivas.

"Por esa causa en los gabinetes oficiales se está elaborando una legislación, que sería enviada al Congreso inmediatamente después de las condenas contra Videla y sus colegas en virtud de la cual el resto de los oficiales imputados quedarían prácticamente amnistiados. Estas normas están dirigidas a proteger principalmente a los militares en actividad.

"El periodismo está hablando ampliamente del asunto. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran alertas. Y no cabe duda que esta nueva situación dará lugar a otro intenso debate nacional en el cual la actitud del gobierno constitucional recibirá fuertes críticas." (Emilio Fermín Mignone)

probablemente, que las fuerzas armadas sancionaran a algunos de sus miembros para devolver el prestigio a la institución. Como era lógico pensar, esto no ocurrió. Se han perdido quince meses y la causa iniciada por el propio presidente contra los nueve miembros de las tres primeras juntas militares ha debido pasar a la justicia ordinaria por la inacción del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En tal largo periodo no hay un solo condenado.

"Es verdad, como dice Alconada Aramburu, que el poder judicial en las democracias es lento. Pero en este caso la demora no se ha debido a esa despaciosidad sino la política errónea de las autoridades."

La deuda amenaza la democracia

El presidente Daniel Ortega analiza la agresión norteamericana contra la revolución sandinista y defiende la negociación conjunta de la deuda por todos los países del continente

La diplomacia nicaragüense ha estado muy activa en los últimos meses, corriendo contra el tiempo en su empeño de dar a conocer a la opinión pública internacional sus iniciativas de paz. Se pretende dejar bien claro que quien se está oponiendo al diálogo y a la negociación es la administración norteamericana.

Además de la actividad del canciller D'Escoto, de los negociadores que participaron en las conversaciones bilaterales con Estados Unidos en la ciudad mexicana de Manzanillo y de otras autoridades sandinistas que han tenido participación en varios foros internacionales, el propio presidente Daniel Ortega está actuando directamente en el

frente internacional.

Tanto en su estadía en Montevideo, durante la toma de mando del presidente Julio María Sanguinetti, como en su visita al Brasil en ocasión de las ceremonias de cambio de mando, Ortega forzó un diálogo con la delegación de los Estados Unidos, además de las numerosas conversaciones bi y multilaterales con jefes de Estado, de gobiernos y ministros de los varios países que también participaron en esas ceremonias. Las aproximaciones con los norteamericanos tuvieron diferentes resultados en Montevideo y Brasilia. En el primer caso, con el secretario de Estado George Shultz, hubo una entrevista formal y aunque el

diálogo fue frío, se mantuvo una conversación más acabada. No sucedió lo mismo con el vicepresidente en Brasilia. George Bush se negó a mantener una entrevista oficial con Ortega y se limitó a responder en el mismo plenario de la Cámara donde lo interceptara el presidente nicaragüense, con una breve exposición de las condiciones norteamericanas para un diálogo, todas ellas inaceptables pues significarían la renuncia a la soberanía política.

Tanto en Uruguay como en Brasil, el gobierno nicaragüense obtuvo éxitos significativos a nivel diplomático. La propia presencia del presidente Ortega en esas latitudes es un dato concreto de los nuevos espacios políticos de simpatía y apoyo que se abren a la revolución sandinista con la redemocratización en el Cono Sur. Pero más que eso, las entrevistas con Shultz y con Hans Dietrich Genscher, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Federal, la reunión en la sede de la ALADI, en Montevideo y la cita con los cancilleres de Contadora en Brasilia —que reanudó el diálogo después de un cierto estancamiento— además de los contactos mantenidos en Uruguay y Brasil con los integrantes de las diferentes corrientes políticas en cada uno de esos países, demuestran que los objetivos diplomáticos a los que hubieran podido aspirar los dirigentes sandinistas para estas visitas fueron alcanzados.

En todas las ciudades visitadas, el presidente Daniel Ortega concedió amplias entrevistas de prensa que permitieron un abordaje en profundidad de la coyuntura política centroamericana y dieron al jefe de Estado nicaragüense la oportunidad de exponer los puntos de vista y las propuestas de su gobierno ante las presiones diplomáticas y militares que están ejerciendo contra Nicaragua la administración norteamericana y sus aliados de la región.



La acción de Ortega en Uruguay y Brasil reactivó el Grupo de Contadora

Una entrevista exclusiva a cuadernos del tercer mundo estaba prevista en la agenda del presidente para su estadía en Río de Janeiro. Marcada para muy temprano en la mañana de su partida a São Paulo, acabó por ser realizada a bordo del avión presidencial durante el vuelo. Beatriz Bissio y Carlos Castillo acompañaron a la comitiva nicaragüense en el avión charter que los transportó en los vuelos internos (una vez que el avión de *Cubana de Aviación* que los trajo desde Managua—Moscú no obtuvo permiso para desplazarse dentro del país).

Roberto Miranda Milic



La movilización popular en Nicaragua tiene dos objetivos: neutralizar las agresiones externas y aumentar la producción económica

Desde la deuda externa a las cuestiones relativas a las relaciones con los Estados Unidos fueron abordadas en esa conversación, cuyos tramos más significativos reproducimos a continuación.

¿Cómo interpreta la situación de Nicaragua en el contexto latinoamericano actual, cuatro meses después de su elección como presidente de la República y tras la redemocratización en Uruguay y Brasil?

—No hay duda que se vive una situación nueva. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina están entrando en una nueva fase para llegar a la cual hay que mencionar tres elementos de gran trascendencia que se han venido acumulando, y generaron las condiciones que han permitido el cambio.

El primer elemento fue la lucha liderada por el general Omar Torrijos, que colocó a América Latina a favor de la defensa del Canal de Panamá. Desde esta posición latinoamericanista, Torrijos logró comprometer a diferentes países del mundo, y en particular del Tercer Mundo, que se solidarizaron con su causa.

El segundo elemento fue la lucha del pueblo nicaragüense, que generó una convergencia de fuerzas políticas y sociales en favor de la libertad de Nicaragua y

contra la política de intervención que los Estados Unidos siempre impulsaron y ahora se proponen incrementar. En este sentido, julio de 1979¹ marca una nueva etapa en las relaciones de América Latina con los Estados Unidos.

Poco después se produce otro hecho relevante: la guerra de las Malvinas. Ahí, Estados Unidos, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la realidad continental, se definió a favor de una potencia extracontinental que estaba agrediendo a un país latinoamericano. Eso contraría toda la teoría de la seguridad que los propios Estados Unidos forjaron para amoldar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas a sus intereses geopolíticos. Esta actitud dolió en la conciencia de América Latina.

Junto a estos factores hay que mencionar uno más reciente, el proceso redemocratizador que está viviendo América Latina. Este proceso se da por caminos revolucionarios, como en el caso

de Nicaragua, o, actualmente, en la lucha por la democracia en El Salvador, o por otros caminos diferentes, como en los casos recientes de Argentina, Uruguay y Brasil.

Todos esos factores contribuyeron a fortalecer la lucha latinoamericana contra los Estados Unidos y ahora refuerzan la conciencia continental de la necesidad de frenar la agresión contra Nicaragua.

Pero hay otro tema que ha contribuido de forma especial a fortalecer la unidad latinoamericana: es el problema de la deuda, que se relaciona con la lucha de nuestros países por un nuevo orden económico y financiero internacional. La deuda es un problema de fondo común a todos nuestros pueblos. Independientemente de cómo él incida en cada país, es un problema del continente latinoamericano como un todo. Y me refiero en particular al caso latinoamericano porque aquí están los mayores deudores. Pero la deuda también afecta a los países africanos y asiáticos. Por eso no puede haber una respuesta parcial.

¿Cuál sería entonces el camino a seguir en la renegociación?

¹Julio de 1979 es la fecha de la victoria popular liderada por el FSLN contra la dictadura de Anastasio Somoza.

Una moratoria sólo puede ser concebida como medida conjunta, pues bastaría que un país la declarara unilateralmente y en forma aislada para que fuera ahogado económicamente por sus acreedores.

—Nosotros defendemos la moratoria porque consideramos que la deuda es injusta y sobre todo, porque nuestros países simplemente no tienen cómo pagarla. Pero Nicaragua es un país pequeño. La propuesta de una moratoria tiene que contar con el apoyo de los grandes deudores del continente, países como Brasil, Argentina y México, que concentran la mayor parte de la deuda. Lo que nuestro gobierno ha hecho es propiciar la discusión conjunta de este tema. Nuestro

antiguas ya no sirven más.

Estamos caminando hacia una ruptura completa del sistema económico vigente. La propuesta de una moratoria o de una renegociación conjunta no la formulamos con vistas a la quiebra del sistema sino, al contrario, para evitar el colapso total. Es imposible pagar una deuda que crece mucho más rápido que la posibilidad de pagarla.

¿Cuáles serían concretamente los pasos propuestos por Nicaragua?

—No tenemos soluciones a priori. Lo que tenemos que hacer los latinoamericanos es enfrentar el problema en conjunto, para fortalecer nuestra capacidad negociadora.



Un grupo de norteamericanos coopera en la defensa de Nicaragua

papel es ése: estimular el intercambio de ideas para tratar de llegar a un consenso sobre cuáles deben ser los pasos a dar, en forma conjunta.

Lo que estamos constatando es que incluso aquellos gobiernos que han preferido sistemáticamente la negociación bilateral y que no aceptan la moratoria, se ven obligados a renegociar cada vez a menor plazo. Soluciones impuestas a América Latina en el pasado y que se aplicaban repetidamente están fracasando en cada vez más cortos plazos. Lo que demuestra que las recetas

Después de las elecciones de noviembre en Nicaragua, usted afirmó que Reagan tenía dos alternativas: dialogar o invadir su país. Ni una ni otra cosa ha sucedido hasta ahora. ¿Cuál es su visión actual del problema?

—Creo que las dos alternativas siguen en pie. El presidente Reagan está transformando su campaña contra Nicaragua en una cuestión personal. Cuando más avanza la revolución sandinista, cuanto más ella se perfecciona, inclusive con la realización de las elecciones, más aumenta la agresividad de la Casa Blanca. Esta-

mos sintiendo eso desde noviembre pasado. Muchos latinoamericanos están comprendiendo que a cada gesto nuestro corresponde una mayor intransigencia de la administración republicana. Está quedando claro que Reagan no busca ningún tipo de convivencia. Simplemente no acepta que un país pequeño como el nuestro pueda tener éxito en su experiencia revolucionaria y adoptar soluciones propias para sus problemas. Y no nos perdona la derrota diplomática que sufrió Washington con el fallo a nuestro favor de la Corte Internacional de La Haya.

Pero esa actitud del presidente Reagan lo está alejando del Congreso, cuyos miembros son más sensibles a las presiones de la opinión pública norteamericana, que está cuestionando progresivamente la política intervencionista en relación a América Central.

Más de mil norteamericanos visitan mensualmente Nicaragua. Muchos de ellos llegan sin estar de acuerdo con nuestros puntos de vista, pero después de tomar contacto con nuestra realidad acaban por respetar nuestra experiencia. Esto podrá tener consecuencias en la discusión del Congreso sobre ayuda económica y militar a los *contras* instalados en Honduras y Costa Rica.

El Cono Sur

¿Cómo ve la redemocratización en Argentina, Brasil y Uruguay?

—Es necesario fortalecer esos procesos. Por muchos motivos, pero en particular porque gobiernos democráticos pueden jugar un papel mucho más decisivo en el problema de la renegociación de la deuda, que ya mencionamos. Pero consolidar la democracia en esos países implica consolidar su economía, y no se puede sanear la economía sin hacer frente al problema de la deuda. Sin la consolidación de la demo-



A pesar del apoyo masivo norteamericano son crecientes las señales de debilitamiento de los bandos contrarrevolucionarios

cracia no es posible consolidar la economía, pero la inversa también es válida. La deuda es un engranaje infernal que mira a nuestros países y deteriora las condiciones de vida de nuestros pueblos.

Si, como se ha afirmado, el presidente Reagan está interesado en la consolidación de las democracias en Argentina, Uruguay y Brasil, debe propiciar una mejora en sus respectivas economías, presionando a los acreedores para una renegociación con otras bases. Sin una solución al problema de la deuda externa las democracias tendrán dificultades para sobrevivir.

El papel de Contadora

¿Cree usted que el Grupo de Contadora aún tiene condiciones de propiciar un acuerdo negociado entre Estados Unidos y los países involucrados en la crisis centroamericana?

—Contadora sigue siendo fundamental para la pacificación de América Central y para alejar la amenaza de una nueva agresión norteamericana. Pero es necesario complementar ese esfuerzo con un diálogo bilateral entre Nicaragua y los Estados Unidos,

sea por la continuación de las conversaciones de Manzanillo (México) o a través de nuevos contactos, en otras circunstancias.

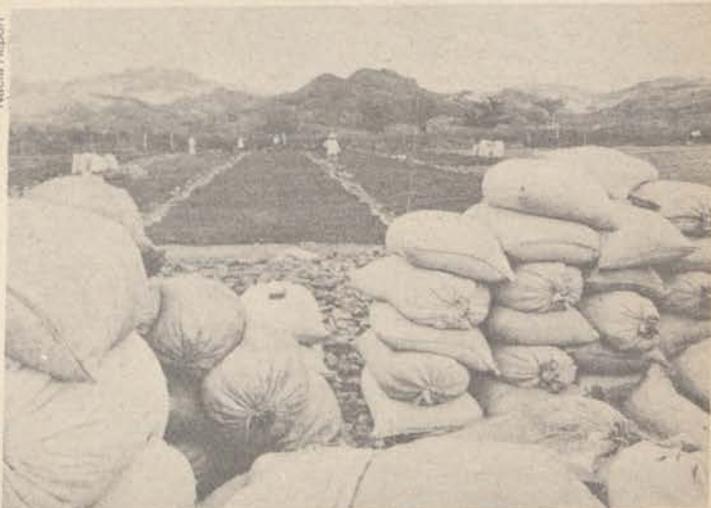
Aquí en Brasil intenté conversar con el vicepresidente Bush, pero él rechazó todo contacto. Esta postura intransigente de la administración republicana está creando problemas para los norteamericanos en general. El sentimiento de rechazo de nuestra gente a todo lo norteamericano

es muy grande y no siempre tiene condiciones de discernir entre lo que es la responsabilidad del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos.

Constatamos que incluso los países europeos están tomando cierta distancia en relación a Washington en la cuestión centroamericana. Reafirmé esa apreciación en Brasil, después de la conversación que mantuve con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Federal, Hans Dietrich Genscher. En Brasilia se decidió que el Grupo de Contadora se reúna el próximo 11 de abril. Será un nuevo intento de romper el *impasse* y reiniciar una negociación que continúa dificultada por la agresividad norteamericana.

Después de asumir la presidencia de la República de Nicaragua, usted anunció un plan de emergencia destinado a enfrentar las dificultades por las que atraviesa su país a raíz de las presiones militares extranjeras y de la difícil coyuntura económica internacional. ¿Cómo reaccionaron los diferentes sectores sociales frente a ese plan?

—Hubo reacciones externas e internas. Las del exterior pueden



El café sigue siendo cosechado en la provincia de Matagalpa, pese a la acción de los contrarrevolucionarios con base en Honduras

evaluarse a partir de la reciente visita a Managua de una misión del Fondo Monetario Internacional. Durante las conversaciones, coincidimos con la mayor parte del análisis hecho por el FMI sobre los indicadores económicos, pero discrepamos totalmente acerca de las medidas a adoptar.

El plan económico de emergencia procura especialmente disminuir los efectos de la agresión militar y compensar los desequilibrios provocados en Nicaragua por el desordenado comercio internacional. Se tomaron varias medidas de austeridad, pero ninguna de ellas sacrifica el nivel de vida de los trabajadores. Ese es el tema crucial: las medidas del FMI siempre atentan contra los intereses de los trabajadores. Sabemos que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de los asalariados mientras perdure en la presión externa y la amenaza de invasión. Pero deseamos asegurar que nadie pase a vivir peor de lo que vive hoy. No pretendemos mejorar sino mantener el nivel de vida actual de los trabajadores. No les vamos a transferir el costo de la recuperación y eso es algo que choca frontalmente contra todas las medidas propuestas por el FMI. A la misión del Fondo le dijimos que el programa que estábamos aplicando en Nicaragua podría ser imitado por casi todos los países latinoamericanos, porque es una fórmula adecuada a la realidad continental.

En el plano interno, las reacciones fueron favorables. Llevamos a cabo reuniones con los encargados del sector productivo controlado por el Estado, las cooperativas y los empresarios privados. Hubo una respuesta muy positiva. Ahora vamos a realizar encuentros sectoriales para profundizar aun más el debate en torno a las medidas tomadas (que incluyen la eliminación de algunos subsidios, la devaluación de la moneda nacional y la congelación de los gas-

tos públicos en varios sectores no vinculados a la defensa nacional). Todos los bienes y alimentos esenciales están siendo distribuidos a la población por parte del Estado, a precios controlados. Los artículos superfluos o en exceso son colocados en el mercado libre. Con ello queremos garantizar a todos, especialmente a la clase trabajadora, el nivel mínimo indispensable para una vida digna, incluso en tiempo de guerra.

¿Cómo están las relaciones con los partidos políticos opositores luego de la elección de noviembre?



—Un hecho nuevo es la campaña de los partidos ilegales para atraer a los partidos que integran la Asamblea Nacional, pero que forman parte de la alianza constituida en torno al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es una campaña incisiva dirigida a ganar adeptos para la contrarrevolución. Pero hasta ahora, los resultados han sido muy menores. Se da el caso de Arturo Cruz que ya visitó campos de entrenamiento de contrarrevolucionarios en Honduras y allí fue fotografiado. Cruz ya dejó de actuar a nivel político para pasar a participar activamente en la con-

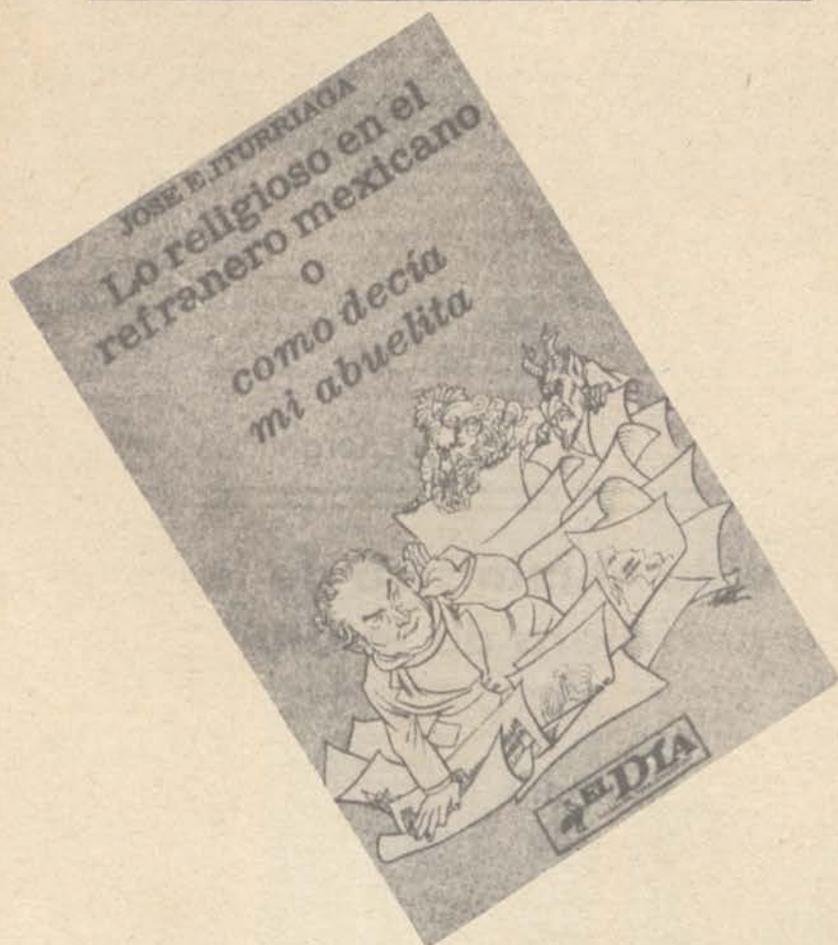
trarrevolución. Más recientemente, también comenzamos a advertir una aproximación entre la ultraizquierda nicaragüense con grupos de la extrema derecha. Lo que aquella no percibe es que su accionar político está favoreciendo a la reacción y poniendo en juego la supervivencia misma de la Revolución.

¿Cuáles fueron, hasta el momento, los efectos de la amnistía otorgada a los contrarrevolucionarios?

—Casi 600 nicaragüenses que se habían vinculado con grupos contrarrevolucionarios en Honduras y Costa Rica, se entrega-

Según el gobierno nicaragüense, Arturo Cruz ya dejó de actuar a nivel político para pasar a participar activamente en la contrarrevolución

ron y fueron amnistiados. La mayoría de ellos pertenece al FDN. Recientemente se dió el caso de un importante dirigente contrarrevolucionario que junto a su familia se asiló en la embajada mexicana en Honduras. Se trata de un elemento vinculado a los servicios de inteligencia de la contrarrevolución, poseedor de informaciones que pueden ser altamente comprometedoras para la estrategia norteamericana. Es necesario que le sea otorgado un salvoconducto para abandonar Honduras, pero existen fuertes presiones para que ello no suceda.



Prólogo de **José Rogelio Álvarez**
Mesólogo de **Andrés Henestrosa**
Epílogo de **Guillermo Tovar**
de **Teresa**
Ilustraciones de **Alberto Beltrán** y
Elvira Gazcón

De venta en las principales librerías y en
Insurgentes Centro 123. Tel.: 5-46-44-19.

El chantaje de los dólares

La UNESCO atraviesa nuevamente una etapa difícil. La retirada de Estados Unidos y la amenaza de Gran Bretaña privan a la organización de 30% de su presupuesto

Guíomar Belo Marques

Estados Unidos concretó su retirada de la UNESCO en el mes de diciembre del año pasado, suspendiendo simultáneamente su cuota en el prespues-

to de la organización, 25% del monto total.

La primera vez que Estados Unidos anunció públicamente su determinación de avanzar ha-



La politización "excesiva" de la UNESCO fue el argumento usado por Reagan para retirar su apoyo. Margaret Thatcher amenaza hacer lo mismo

cia una solución de ese tipo, fue durante la reunión del Consejo Ejecutivo realizada en París entre el 9 y el 24 de mayo de 1984. Su argumento fundamental apunta a dos temas: una politización excesiva de la organización y la supuesta mala gestión económica de la misma.

Ante la amenaza norteamericana, la UNESCO trató, por un lado, de esclarecer a la opinión pública mundial sobre la realidad de sus principios, objetivos y gestión; y por otro, evaluar las alternativas económicas posibles para sobrevivir con esa reducción de 25%.

Hasta el momento, Estados Unidos apenas logró convencer a Gran Bretaña sobre lo acertado de su propuesta. Margaret Thatcher amenaza con retirarse de la UNESCO a fines del año en curso, con su cuota de 5%, si nada se modifica en la política de la organización y en la orientación de su director general, el senegalés Amadou Mahtar M'Bow (electo dos veces, por unanimidad).

Las críticas económicas

Una de las principales críticas de carácter económico formuladas por Estados Unidos consiste en el nivel elevado de los salarios de los funcionarios de la organización, que corresponden al índice más alto de cada categoría de funcionarios públicos del país más rico, aumentado en 1%. El país de referencia es precisamente Estados Unidos y, al igual de lo que sucede en todos los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, los salarios se pagan en dólares.

A mediados de 1984 el número global de empleados de la organización era de 3.444 contra 3.457 en 1975 de los cuales 62,8% son de origen europeo y norteamericano; 4,1% de países

socialistas; 8,3% de América Latina y el Caribe; 8,7% de Asia y el Pacífico; 8,6% de África negra y 7,5% de los países árabes. Hay que agregar, además, que según estadísticas de las propias Naciones Unidas realizadas a fines de 1982, la UNESCO tiene el menor porcentaje de cuadros superiores en comparación con todas las demás instituciones especializadas.

Dominique Rogier / UNESCO



Entre 1979 y 1983 la UNESCO se asoció a campañas que permitieron alfabetizar más de 15 millones de adultos y jóvenes

Estados Unidos acusa también a la UNESCO de administrar mal sus fondos, aumentando desmesuradamente su presupuesto. En realidad, como consecuencia de la valorización del dólar, la UNESCO se beneficia del cambio con el franco francés, moneda con la que efectúa más de 60% de sus gastos: el presupuesto disminuye así en 13%. Mientras que en 1982-1983 fue de 430 millones de dólares, para el actual bienio la Conferencia General votó un presupuesto de 347 millones de dólares.¹

En cuanto a la aplicación de los rubros del presupuesto, es necesario tener en cuenta que la UNESCO no solo no tiene fines de lucro, sino que su misión principal consiste precisamente en el desarrollo de la cooperación intelectual entre las naciones, área en la que siempre ha sido generosa. Entre 1979 y 1983, la UNESCO llevó a cabo más de mil "proyectos operacionales", desarrollados en casi 100 Estados miembros, para los cuales la organización movilizó cerca de 400 millones de dólares. Durante el citado periodo, la UNESCO se asoció a campañas que permitieron alfabetizar más de 15 millones de adultos y jóvenes. Después de 1978, la organi-



zación empleó más de 40 millones de dólares en 29 campañas internacionales de salvaguardia y defensa del patrimonio cultural, entre las cuales se destacan Venecia, la Acrópolis de Atenas, la isla Goré en Senegal y el "Triángulo Cultural" de Sri Lanka. La organización destina anualmente casi 30 millones de dólares a sus programas científicos internacionales.

El apoyo a los movimientos africanos de liberación

"Para las delegaciones que conviven en el seno de la UNESCO es más difícil evitar discre-

pancias ideológicas. Eso en razón de que las desigualdades en materia de educación o de desarrollo tecnológico y científico suscitan mayor polémica o divergencia de puntos de vista que la erradicación de la viruela o la malaria. Del mismo modo, tampoco suscitan aún unanimidad, la forma de encarar la paz, los derechos del hombre o la libre circulación de la información, ideales que la UNESCO se encargó de promover en su acto constitutivo". Estas palabras de M'Bow, que por su claridad no admiten respuesta, explican por qué la UNESCO es, por la importancia de sus objetivos, una organización política.

"Derechos del hombre y derechos humanos están orgánicamente ligados. Sin los derechos de los pueblos, los derechos del hombre corren el riesgo de volverse meramente formales (...) Sin los derechos del hombre, los derechos de los pueblos dejan de ser un recurso contra la injusticia o la tiranía. Se impone la necesidad de profundizar esa relación así como el propio concepto del derecho de los pueblos". Amadou Mahtar M'Bow trató así de explicar la razón por la cual al amparo de sus principios constitutivos, la UNESCO apoya, a través de acciones de carácter cultu-

¹Otros organismos de las Naciones Unidas aprobaron durante el mismo periodo presupuestos en franca expansión: más 4% para la OIT (Organización Internacional del Trabajo); más 12% para la OMS (Organización Mundial de la Salud); más 15% para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

ral y educativo, a algunos movimientos de liberación, una actitud que ha sido criticada por Estados Unidos.

Están asociados a las actividades de la UNESCO desde 1972, según resolución adoptada en la Conferencia General del mismo año, el Congreso Nacional Africano (ANC), el Congreso Panafricano (PAC) y la SWAPO de Namibia. La OLP, considerada desde 1974 por las Naciones Unidas un representante legítimo del pueblo palestino, fue invitada a enviar observadores a las reuniones de la UNESCO, según resolución de la Conferencia General de 1974. Lógicamente, la integración de esos movimientos a las actividades de la organización fue acompañada por diversas resoluciones tendientes a suministrarles ayuda.

Un director general incómodo

Se sabe que quien tiene el poder económico tiene, simultáneamente, de una forma u otra, el poder de decisión. La falta de control político como resultado de que cada país que integra la UNESCO tiene derecho a un voto, ha molestado a Estados Unidos. Además, Washington desea el cese de M'Bow, no porque el director general se haya excedido en sus funciones, sino porque no actuó en la forma que Estados Unidos desea.

De los antecesores de M'Bow, apenas René Maheu llegó al final del mandato. Todos los demás fueron obligados, por diversos motivos, a renunciar. Pero en cuanto a M'Bow, parece que el tiro salió por la culata. "¡No renunciaré!", afirmó el actual director general, al tiempo que defendía todas las medidas adoptadas por la UNESCO a lo largo de su mandato.

Si M'Bow se volvió molesto para Estados Unidos con el paso del tiempo, pese a que Washington fue uno de los más fervorosos defensores de su candidatura



M'Bow: "No renunciaré"

—habiendo votado inclusive para que permaneciese durante siete años más— el problema no está centrado en su persona, sino en lo que M'Bow representa.

En algunos círculos occidentales en los que se plantea la posibilidad de su renuncia, se mencionan algunos nombres para sucederle, como el del ex canciller alemán Helmut Schmidt, y de los ex primeros ministros Pierre-Elliott Trudeau, de Canadá, y Malcolm Frazer, de Australia; incluso hasta el del colombiano Pastrana Borrero. Pero el actual director general no parece dispuesto a ceder a las presiones norteamericanas por la vía de acortar su mandato.

A la búsqueda de soluciones

Si la salida de Gran Bretaña se concreta, pese al pedido de varios países occidentales, la UNESCO perdería treinta por ciento de su presupuesto actual, correspondiente a la participación inglesa y norteamericana. Las dificultades económicas que se generarían impedirían la realización de algunos proyectos previstos para los próximos dos años.

Para estudiar las implicaciones de la retirada norteamericana de la organización y tratar de encontrar soluciones, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO se reunió en sesión extraordinaria, el pasado mes de febrero con la presencia de diplomáticos de más de 50 países. Francia, entretanto, decidió dar una contribución vo-

luntaria de dos millones de dólares, en el sentido de minimizar, dentro de sus posibilidades las dificultades presupuestales generadas por la disminución global de 43 millones de dólares, correspondientes a 25% de la cuota norteamericana. Amadou M'Bow afirmó durante la reunión que otros países se mostraron dispuestos a seguir el ejemplo francés. Libia y Arabia Saudita son algunos de los que ya afirmaron públicamente estar dispuestos a ello.

Parecería que pese a que los países occidentales no están totalmente de acuerdo, existen actualmente dos caminos para la UNESCO: por un lado, reducir los gastos y por otro, solicitar un aumento de las contribuciones voluntarias de los países.

Sin pérdida de tiempo, Estados Unidos lanzó una campaña de presión en el marco de una llamada "Comisión Especial para Controlar la Reforma de la UNESCO". Según se desprende de una declaración difundida recientemente por la diplomacia norteamericana, la comisión fue creada con el objeto de elaborar e imponer a la comunidad internacional "recomendaciones" concretas con vistas a la obtención de cambios radicales en las actividades de la UNESCO.

Por otra parte, alegando restricciones en el presupuesto interno, Estados Unidos va a reducir sus fondos de participación en dos organizaciones más de las Naciones Unidas: FAO y UNICEF.

Se hace cada vez más evidente el rechazo de la actual administración norteamericana a la actividad de los organismos de ayuda mutua internacionales. No convence a nadie el argumento de la necesidad de reducciones presupuestales, cuando los fondos destinados a armamento aumentan año a año.

Falta saber si el poder del dólar llegará tan lejos como la administración Reagan pretende. ●



AEROLINEAS NICARAGUENSES, S. A.
 PASEO DE LA REFORMA NO. 322-A
 MEXICO, D. F. 06600



RL529	RL527	RL315	RL415	RL525	RL521	RL521	No. DE VUELO	RL520	RL524	RL414	RL314	RL526	RL528
lla	Ju-Sa	Lu-Ju Sa	Lu-Ju Sa	Ma-Mi VI-Do	Ma	Mi VI-Do	FRECUENCIAS	Lu-Mi VI-Do	Lu-Mi Ju-Sa	Ma-VI Do	Ma-VI Do	Ju-Sa	Ma
720	727	737	727	727	727	727	EQUIPO	727	727	727	737	727	720
					08:30	14:30	MIAMI LL	12:50					
13:30	13:30				↓	↓	MEXICO LL	↑				12:30	11:30
↓	↓						SAN SALVADOR LL					10:40	↑
15:30	15:20						SAN SALVADOR LL					10:10	↑
↓	15:50				09:50	15:50	MANAGUA LL	09:30				09:30	09:30
15:30	16:30	18:10	18:20	17:00			MANAGUA LL		08:40	06:40	07:50		
		↓	↓	↓					↑	↑	↑		
		19:00	17:40	18:10			SAN JOSE LL	08:00		06:00			
			↓	↓			SAN JOSE LL	07:30					
		20:30	20:10				PANAMA LL	07:30			07:30		

TELEFONOS: RESERVACIONES Nos. 511-3290/511-3617
 AEROPUERTO-CARGA 762-4708/784-0476

aerónica
 LA LINEA DEL ARCOIRIS

Comunicación

Chile

Cómo los periodistas combaten la censura

Desde noviembre de 1984, setenta y cinco periodistas de seis publicaciones clausuradas por la dictadura comenzaron a editar un boletín diario con noticias censuradas

Jorge Andrés Richards*



Reproducción de las carátulas de dos revistas clausuradas

El 17 de noviembre de 1984, el gobierno del general Augusto Pinochet decretó el estado de sitio para acallar la protesta que había tomado cuerpo en los medios sindicales, estudiantiles y en las poblaciones pobres cercanas a Santiago. Además de restringir drásticamente la libertad individual, el decreto de estado de sitio determinó también la clausura de las revistas *Cauce*, *Análisis*, *APSI*, *La Bicicleta*, y *Pluma y Pincel*, así como el diario *Fortín*

Mapocho. Los diarios y revistas que no fueron clausurados tuvieron, sin embargo, que someterse a draconianas normas de censura, especialmente en lo que se refiere a la información política, económica y sindical. Casi todos fueron sometidos al régimen de censura previa.

En esas circunstancias, el derecho a la información fue prácticamente anulado, marcando una grave regresión del proceso de liberalización de la prensa que avanzaba lentamente gracias al esfuerzo exclusivo de los periodistas. Fue en el marco de ese clima que los profesionales que

trabajaban en las publicaciones clausuradas decidieron editar la *Carta de los Periodistas*, una publicación lanzada apenas cinco días después de ser decretado el estado de sitio y que tiene como principal objetivo brindar una información alternativa con las noticias prohibidas por la censura oficial.

Editada bajo la responsabilidad del Colegio de Periodistas, *Carta* nuclea a casi 75 profesionales que publican un boletín diario de cuatro páginas cuyos objetivos son: romper el cerco informativo impuesto por el régimen; cumplir con el principio ético, profesional y moral de informar al pueblo chileno; ubicarse dentro de los límites de la desobediencia civil (los periodistas, al escribir en *Carta*, desafían el decreto de estado de sitio y a través de esa lucha intentan el retorno de la democracia en Chile), y mantener una lucha común, unitaria y solidaria de los medios de comunicación afectados, junto al Colegio de Periodistas.

Cómo funciona

Carta de los Periodistas está redactada y editada por profesionales de cada uno de los medios de prensa clausurados por el gobierno. En grupos de cuatro o cinco, se relevan diariamente para un trabajo que comienza a las 10 de la mañana en la sede del Colegio de Periodistas y termina a las 19 cuando el boletín es distribuido a suscriptores y colaboradores. La mayor parte de las informaciones se refieren a noticias cuya difusión no fue permitida por el gobierno. Esa característica hizo que, desde su primer número *Carta* fuese requerida por movimientos políticos, sindicatos, organizaciones de pobladores, etcétera.

La distribución de *Carta* se

* Miembro del equipo del ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales).

realiza desde la misma sede del Colegio de Periodistas, donde los ejemplares son entregados a los suscriptores e interesados al precio de 20 pesos chilenos. Entre los suscriptores regulares se encuentran agencias de noticias extranjeras, embajadas, corresponsales de diarios extranjeros, partidos políticos, universidades, organizaciones de la iglesia, organizaciones académicas y de empresarios, entre otros.

A fines de enero, *Carta* llegó a su número 50, circulando ininterrumpidamente de lunes a viernes excepto el día de Navidad. Todo lo recaudado se destina a financiar la publicación y al pago de un honorario a sus redactores, periodistas y editores. Casi 250 organizaciones reciben regularmente el boletín diario, pero cada ejemplar es posteriormente reproducido por cada uno de los compradores, llegando a un total de lectores estimado en 35 mil personas.

Dentro de esa tarea informal de difusión, la iglesia, las parroquias, los sindicatos y los movimientos de pobladores juegan un papel importante tanto en la capital como en el interior del país. La creciente circulación de *Carta* tuvo, como consecuencia inmediata, que numerosos lectores se acercaran hasta el Colegio de Periodistas a hacer llegar informaciones, estableciendo un vínculo directo entre quien edita el boletín y su público. *Carta* pasó a convertirse en un instrumento fundamental para las agencias internacionales y corresponsales en tránsito por Chile que, de otra manera, no tendrían acceso a informaciones más detalladas y verdaderas sobre la situación del país, ya que la prensa tradicional no solo está presionada por el gobierno sino también amordazada por la censura previa o indirecta.

Apoyo común a información alternativa

Merece ser mencionada espe-



Una joven periodista se amordaza protestando contra la censura

cialmente la conducta de los periodistas chilenos que trabajan en las revistas y diarios cerrados por el gobierno. Desde el día en que fueron aplicadas las medidas de fuerza se dio una coordinación conjunta tanto en las tareas periodísticas como administrativas. Los medios sancionados tienen líneas ideológicas diferentes, que van desde la democracia cristiana a la izquierda.

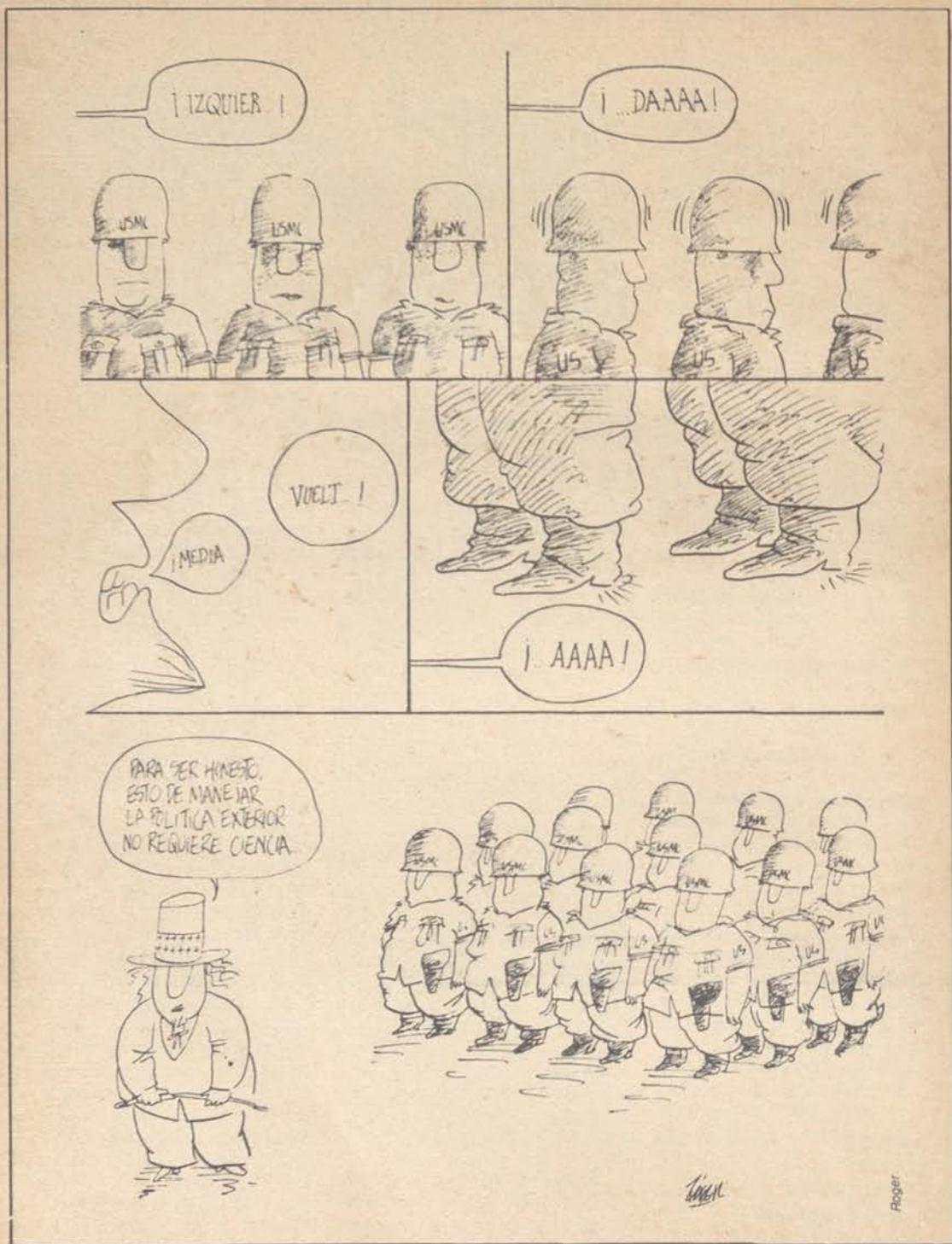
En esas condiciones, la lucha unitaria demostró que en la práctica es perfectamente posible llegar a acuerdos y perspectivas comunes en la defensa de un derecho tan fundamental como el de la información. Un fenómeno semejante sucedió a nivel de la dirección del Colegio de Periodistas, donde se vivieron situaciones aun más sorprendentes. Tanto el Consejo Nacional como el Consejo Metropolitano asumieron la lucha por las publicaciones clausuradas como propia. En el Colegio hay profesionales que políticamente están ubicados tanto a la derecha como al centro o a la izquierda. Todos, inclusive, se movilizaron por apoyar financieramente ese esfuerzo de contar con una información alternativa.

La solidaridad se extendió incluso a las redacciones de las publicaciones que no fueron sancionadas por el gobierno, las

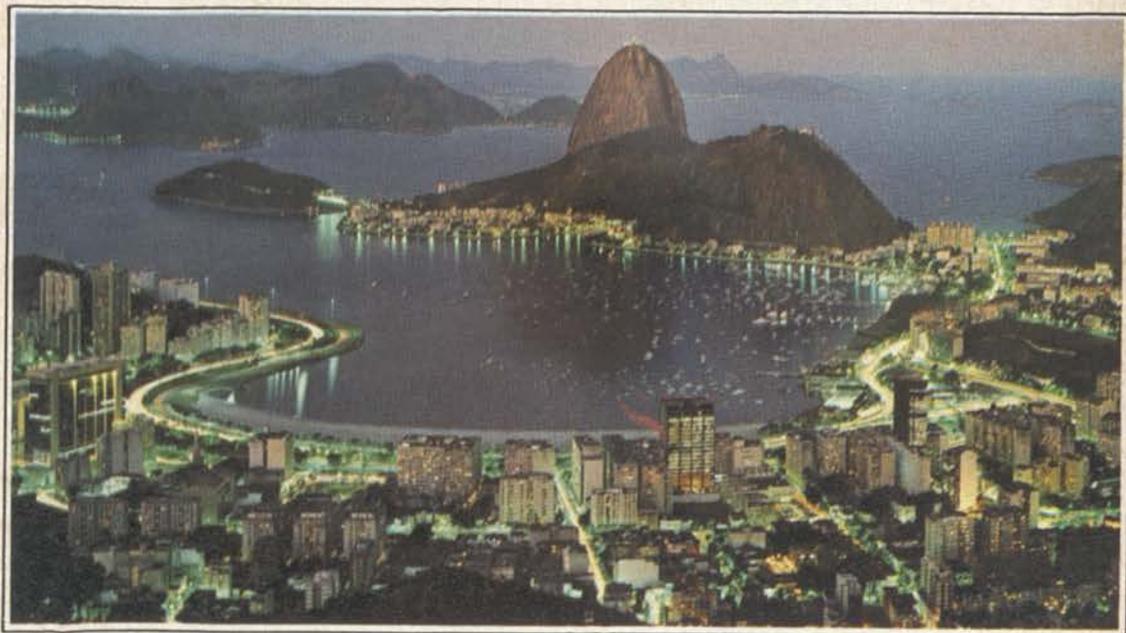
que expresaron su apoyo a *Carta* en documentos o declaraciones y le dieron apoyo material para mantener al equipo periodístico de los medios clausurados. En varias redacciones los periodistas contribuyeron con parte de sus salarios a un fondo de ayuda a sus colegas. Eso sucedió con periodistas de la revista *Hoy*, del diario *El Mercurio*, del vespertino *La Tercera* y del Canal 11 de televisión. Muchos de los que dieron su solidaridad también fueron sancionados con la pérdida del empleo y hasta con amenazas de prisión. Pero ni siquiera así la ayuda se interrumpió.

Sin embargo, no sucedió lo mismo a nivel de la dirección de diarios como los de la cadena *El Mercurio* o *La Tercera*, que llegaron a justificar las medidas represivas. En buena medida ello es comprensible porque es un hecho conocido las enormes deudas que arrastran esos diarios con el gobierno. *El Mercurio*, el diario más conservador de Chile y que pertenece a la familia Edwards, debe 120 millones de dólares, mientras que el consorcio de *La Tercera* debe 40 millones de dólares. En esos dos grupos los intereses personales predominaron sobre la defensa de la libertad de expresión e información. ●

Humor



Rio de Janeiro es mucho mas que una postal de Brasil.



El Estado de Rio de Janeiro no está compuesto solamente por bellezas naturales. Es, sobre todo, un gran taller de trabajo. Por eso, somos el segundo polo de desarrollo y el mayor centro financiero de Brasil.

Nuestras empresas producen, a escala de exportación, alimentos y bebidas, pieles y manufacturas de cuero, papel, productos químicos, plásticos y textiles, caucho natural y sintético, aparatos electrónicos, productos metalúrgicos y mucho más. Y, además de concentrar el mayor número de empresas de consultoría en ingeniería, Rio de Janeiro tiene el principal aeropuerto y el segundo mayor puerto de Brasil.

El BD-Rio, como agencia financiera de fomento, tiene la función de trabajar por el desarrollo del Estado. Por eso, el BD-Rio quiere ser el vínculo entre nuestras empresas exportadoras y los potenciales importadores de nuestros productos. Vínculo que unirá a pueblos amigos. Use el BD-Rio para hacer contactos con las empresas de Rio de Janeiro. El BD-Rio tendrá siempre la solución adecuada para sus expectativas.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
RIO DE JANEIRO
-BRASIL

ABRIENDO NUEVOS CAMINOS

BD-Rio

BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO S.A.

Praia do Flamengo, 200 - 23º, 24º, y 25º andares

Rio de Janeiro - Brasil - CEP. 22210

Tel. 205.5152 (PABX) - Telex (021) 22318

Afiliado a la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo - ALIDE.



TAAAG

LINHAS AÉREAS DE ANGOLA
★
ANGOLA AIRLINES